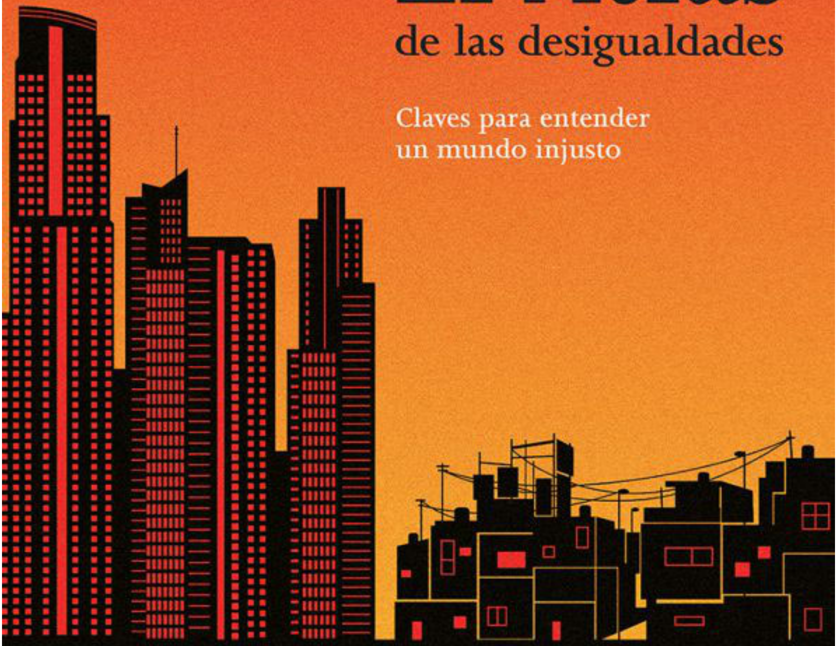
LE MONDE diplomatique

El Atlas
de las desigualdades

Claves para entender un mundo injusto



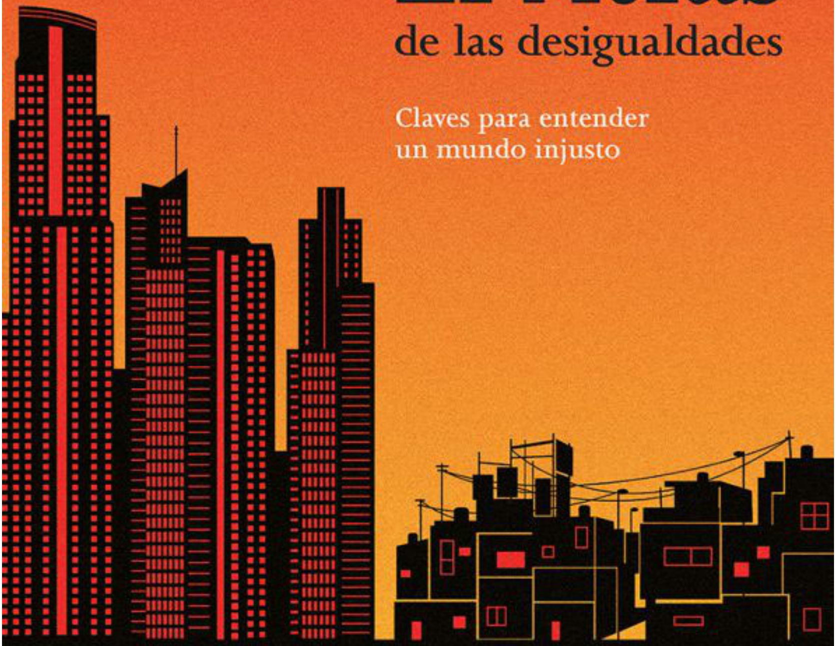
Capital intelectual

Courrier international

LE MONDE
diplomatique

El Atlas
de las desigualdades

Claves para entender
un mundo injusto



Capital intelectual

Courrier international

PARACETAMOL
GENIOL®
EL DOLOR DESAPARECE
PARACETAMOL 500 mg
GENIOL®
LIBERACIÓN INMEDIATA
ANALGÉSICO
ANTIFEBRIL
ELEA
CONT.: 16 Comprimidos
Potencia Analgésica.
Rápida Acción.
Tolerancia Gástrica.
www.geniol.com.ar
Lea atentamente el prospecto y ante la menor duda consulte a su médico y/o farmacéutico.
Elea
Adelante con tu vida

Seguinos y conocé todo lo que hacemos desde hace 20 años por la **educación**, el **desarrollo local** y la **cultura** de nuestras regiones.

@FUNDACIONESGP

FUNDACIONES
GRUPO·PETERSEN G·P

WWW.FUNDACIONESGRUPOPETERSEN.COM.AR

Fundación Banco San Juan
Fundación Banco Santa Fe
Fundación Banco Entre Ríos
Fundación Banco Santa Cruz

LE MONDE
diplomatique

EL ATLAS DE LAS DESIGUALDADES

Claves para entender
un mundo injusto

Capital intelectual

LE MONDE diplomatique
Edición Cono Sur

El Atlas de las desigualdades

Director José Natanson
Editora Creusa Muñoz
Diseño de tapa Max Rompo y Ana Zelada
Diagramación www.trineo.com.ar
Investigación estadística Creusa Muñoz
Infografías, mapas y gráficos www.trineo.com.ar
Corrección Alfredo Cortés
Producción y comercialización Esteban Zabaljauregui

© Le Monde diplomatique edición Cono Sur / Courrier international

ISBN: 978-987-614-634-0
Hecho el depósito que ordena la Ley 11.723.

Libro de edición argentina.
Digitalización: Proyecto451
Todos los derechos reservados.

Prohibida la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento sin el permiso escrito de la editorial.

Capital Intelectual edita el periódico mensual *Le Monde diplomatique*, edición Cono Sur

Le Monde diplomatique, **edición Cono Sur**

Director
José Natanson

Redacción
Pablo Stancanelli (editor)
Creusa Muñoz (editora)
Luciana Garbarino
Nuria Sol Vega

Secretaria
Patricia Orfila
secretaria@eldiplo.org

Corrección
Alfredo Cortés

Diseño original
Javier Vera Ocampo

Publicidad
Maia Sona
msona@capin.com.ar

Paraguay 1535 (C1061ABC)
Ciudad de Buenos Aires, Argentina
Teléfono: (54-11) 4872-1300
www.eldiplo.org

Le Monde diplomatique **(París)**

Fundador
Hubert Beuve-Méry

Presidente del Directorio y Director de la Redacción
Serge Halimi

Jefe de Redacción
Benoît Bréville

Directora de las relaciones y las ediciones internacionales
Anne-Cécile Robert

1-3 rue Stephen-Pichon,
70013 Paris
www.monde-diplomatique.fr

Courrier international

Director de *Courrier international*
Arnaud Aubron

Directora de Redacción
Claire Carrard

Jefa de Edición
Virginie Lepetit

Concepción de los mapas
Thierry Gauthé

Investigación de datos
Aline Gerstner, Virginie Lepetit y Fatima Rizki

Concepción gráfica y dirección artística
Sophie Laurent-Lefèvre

Jefa de diseño
Bernadette Dremière

Diagramación
Leila Bergougnoux

Infografía
Catherine Doutey

Fotograbado
Denis Scudeller

SUMARIO

6 PRESENTACIÓN
Creusa Muñoz

8 UN MUNDO DESIGUAL

10 INTRODUCCIÓN
Bernardo Kliksberg

12 LA CONDENA ORIGINARIA

CAPÍTULO 1. RIQUEZAS
LA FALACIA DE LA MERITOCRACIA

16 CÓMO LEGITIMAR UN MUNDO DESIGUAL
Thomas Piketty

18 EL SUEÑO DE LA JUSTICIA SOCIAL
François Dubet

22 CONSTRUCCIONES ANACRÓNICAS
Branko Milanović

24 ¿DÓNDE ESTÁN LOS RICOS?

26 MÁS ALLÁ DE TODAS LAS CRISIS
Olga Cantó Sánchez

28 UNA PORCIÓN CADA VEZ MÁS GRANDE DE LA TORTA

30 LA TIERRA DE LOS PRIVILEGIADOS
Luis Felipe López-Calva y Nora Lustig

32 EL DESPLOME DE LOS SALARIOS
Nazaret Castro

CAPÍTULO 2. RECURSOS
VIDAS PRECARIAS

38 EL COSTO DEL HAMBRE
Patricia Aguirre

42 MARCADOS DESDE EL ORIGEN
Roxana Mazzola

44 TIERRAS ACAPARADAS

46 ¿FALTA DE VIVIENDA O FALTA DE ESTADO?
Denis Merklen

48 POBRES Y SEDIENTOS
De la Redacción de *Courrier international*

50 INODOROS, UN BIEN DE LUJO

52 EL FIN DE LA UTOPÍA IGUALITARIA
Enric Puig Punyet

55 DESIGUALDADES.COM
Mariela Baladron

56 JAMÁS SIN MI SMARTPHONE

CAPÍTULO 3. SALUD
BRECHAS ENDÉMICAS

60 EL DINERO HACE LA LONGEVIDAD
Javier Padilla Bernáldez

62 ¿CUÁNTOS AÑOS DE VIDA?

64 ¿CÓMO VIVIR MÁS?

66 MÁS ANCIANOS QUE NIÑOS
María Julieta Oddone

68 LA ENFERMEDAD DE LA EXCLUSIÓN
Gabriela Benza y Gabriel Kessler

70 FALENCIAS ESENCIALES

72 DISPARIDADES PERPETUAS
Verónica Ocvirk

CAPÍTULO 4. LIBERTADES
DERECHOS EXCLUSIVOS

76 EL SUFRAGIO ¿UNIVERSAL?
Miguel Ángel Presno Linera

78 EL VIRUS DE LA DESINFORMACIÓN
Edith Rodríguez Cachera

80 ENCARCELAMIENTO

82 PRISIONEROS DEL PREJUICIO
Mariela Belski

86 PENA DE MUERTE

88 CONDENADOS A LA MARGINALIDAD
Claudia Cesaroni

90 EDUCACIÓN: ASIGNATURAS PENDIENTES
Leire Salazar

CAPÍTULO 5. GÉNERO
UNA REVOLUCIÓN INCOMPLETA

94 UNA INCLUSIÓN EXCLUYENTE
Virginia García Beaudoux

98 CÓMO MATERNAR EN PRECARIEDAD
Nancy Giampaolo

100 LA CARRERA PERPETUA POR LA PARIDAD

102 LAS HUELLAS DE LA OPRESIÓN
Mélany Barragán

104 ABORTO, REACCIONARIOS AL ATAQUE

106 EL DERECHO A TENER DERECHOS
Mabel Bellucci y Viviana Norman

108 DESCOLONIZAR EL FEMINISMO
Zahra Ali

110 LGTB, LA LEY DEL ORGULLO

CAPÍTULO 6. MEDIOAMBIENTE
LA DEUDA ECOLÓGICA

114 EL APARTHEID CLIMÁTICO
Antonio Elio Brailovsky

118 POR FAVOR, TOSA
De la Redacción de *Courrier international*

120 OCÉANOS DE PLÁSTICO
Víctor Ingrassia

122 REFUGIADOS DEL CLIMA

124 LOS DESCARTADOS DEL SISTEMA
Sergio Federovisky

Presentación

EL DRAMA DEL SIGLO XXI

El capitalismo alcanzó su versión más descarnada y brutal. Y es que el vaso nunca derrama: el 1% más rico de la población mundial se apropió del 27% del crecimiento económico de los últimos 40 años, mientras que el 50% más pobre capturó sólo el 13%, es decir, 3.500 millones de personas se quedaron con menos de la mitad de lo que percibió la reducida elite más acaudalada del planeta (1). Este abismo socioeconómico se explica por las transformaciones estructurales que ha sufrido el capitalismo en la era de la financiarización. Una de las más importantes es el mayor ensamblaje entre los perceptores de una elevada renta de capital y los perceptores de una elevada renta de trabajo. Es decir, los individuos que cuentan con una alta renta de capital prácticamente son los mismos que se encuentran entre el decil y el percentil de ingresos máximos de la sociedad. Es lo que el reconocido economista Branko Milanović denominó como *homoploutia* (de *homo*, igual y *ploutia*, riqueza) para advertir sobre el desmesurado poder económico que los capitalistas adquirieron en el sistema meritocrático liberal imperante en el mundo a diferencia del capitalismo clásico del siglo XIX en el que prácticamente ningún capitalista de los rangos más elevados de la escala percibía una renta de trabajo.

Esta convergencia en las mismas manos, de la renta de capital y de la de trabajo, se duplicó en los últimos treinta y siete años, y todo indica que seguirá creciendo ya que el cambio estructural en la organización de la fuerza laboral, mayormente descentralizada, mermó considerablemente la capacidad de negociación de los trabajadores, menguando sus salarios a favor de la rentabilidad del capital e impulsando, en definitiva, la polarización de los ingresos (2). Pero los ricos no sólo son los beneficiarios exclusivos de esa doble concentración sino también de otra, más anquilosada aun, la patrimonial, que también aumentó, y lo hizo mucho más rápido que los salarios por el débil crecimiento, los intereses de capital y el precio de las propiedades (3). Asistimos así a un mundo cada vez más injusto donde la única igualación posible es la que se da hacia abajo.

Una elite perpetua

Está claro que la igualdad absoluta no existe o, al menos, los pocos intentos que se han dado en las sociedades por alcanzar este ideal nunca pudieron trascender en el mundo como hoy lo hacen las desigualdades más extremas. Pero, ¿qué hay detrás de la prevalencia en la historia de los regímenes desigualitarios? ¿Por qué seguimos validando un sistema donde sólo unos pocos se benefician en desmedro de la mayoría? La respuesta, quizás, resida en los mecanismos de perpetuación de la elite multimillonaria que concentra tanto el poder económico como el poder político ya que la distribución del financiamiento de las campañas electorales suele estar también hiperconcentrada en las personas más pudientes de la sociedad. Es el caso de Estados Unidos en el que el 1% más rico de la población aportó el 40% del total de las contribuciones para las presidenciales de 2016 (4). Donaciones que esperan, por supuesto, una retribución política afectando las medidas impositivas, la transferencia de la riqueza pública a manos privadas, el control gubernamental sobre el ocultamiento de fondos económicos y financieros, la regulación de la transmisión intergeneracional de la riqueza y demás mecanismos políticos e institucionales que eternizan el enquistamiento en el poder de la elite económica y de sus descendientes (5). Pero para perpetuarse la elite también necesita de la connivencia de las masas y es aquí donde radica la perversión central del sistema ya que se apela a un discurso propietarista, empresarial y meritocrático que afirma que las desigualdades son justas porque derivan de un proceso libremente elegido en el que todos tenemos las mismas posibilidades de acceder al mercado y a la propiedad. Un argumento que, en definitiva, termina estigmatizando a los perdedores del sistema económico por su supuesta falta de méritos, encubriendo que la "igualdad de oportunidades" no es más que una falacia en las sociedades actuales. Cuando se nace en la indigencia, los niños y las niñas tienen grandes posibilidades... de permanecer desescolarizados, ser sometidos a trabajo infantil, padecer en su vida adulta trabajos precarios o desempleo, y contar con una esperanza de vida reducida. Porque las desigualdades son acumulativas y se retroalimentan, y coartan toda vía de escape a los que las padecen. Así como los ricos heredan la fortuna, no por mérito, sino por sucesión, los pobres heredan la pobreza, no por carencia de talento, sino por defecto.

Este sistema, sin embargo, al ser cada vez más insostenible para la mayor parte del planeta, está perdiendo legitimidad. Pero sin un contrapoder fuerte y organizado que verdaderamente lo cuestione seguirá profundizándose. Los Estados se han vuelto débiles frente

al poder económico y financiero, y las clases medias y populares carecen de un sentido de lucha colectiva no sólo por el cambio en la naturaleza de la organización del trabajo y el aumento del trabajo precarizado que desarticuló su poder frente al capital, sino también por la erosión de los mecanismos de solidaridad debido a la emergencia de pequeñas desigualdades cada vez más individualizadas entre personas de una misma posición socioeconómica. Como aquellas que atraviesan a colegas con distintas remuneraciones por igual trabajo o las que persisten entre trabajadores en blanco y trabajadores en negro, o como las que hay entre mujeres y hombres con un mismo puesto laboral pero con distinto salario o las que existen entre los que viven en un barrio cerrado y los que viven en la ciudad...

Así como los ricos heredan la fortuna, no por mérito, sino por sucesión; los pobres heredan la pobreza, no por carencia de talento, sino por defecto.

Todas estas pequeñas desigualdades, como explica el sociólogo francés François Dubet, son también relevantes porque son las que pesan en la vida cotidiana y, al erosionar la identificación de las personas en un mismo grupo socioeconómico, terminan obstruyendo toda acción organizada que pretenda combatir a las grandes desigualdades.

Entre el arcaísmo y la modernidad

Es cierto que en los últimos doscientos años se hicieron grandes progresos en salud y educación que facilitaron una mayor movilidad socioeconómica, pero aún persisten grandes disparidades entre países así como en el interior de los Estados(6). No es lo mismo nacer en Sierra Leona donde la esperanza de vida es de 52 años que en Hong Kong donde alcanza los 84 años, como tampoco lo es respirar en el barrio de Bronx de la ciudad de Nueva York, integrado por un 70% de latinoamericanos y un 29% de afroamericanos, en el que la contaminación atmosférica alcanza casi el triple del promedio estatal(7). Tampoco ser mujer que ser hombre en Francia, donde la participación de las mujeres en el 1% de los salarios más elevados del país es sólo del 16%. Porque, aunque hubo cierta evolución en la paridad de género, como en varios países del mundo, esta no deja de ser lenta: se calcula que, de continuar con el mismo ritmo, recién en el año 2144 las mujeres llegarían a representar la mitad de efectivos del percentil superior de los ingresos en el país galo(8). Y es que en todo el planeta los regímenes desigualitarios están atravesados por el progreso pero también por el arcaísmo. Aunque no quedarán más que arcaísmos si las desigualdades siguen profundizándose, porque el progreso para unos pocos no es progreso sino retroceso.

La historia ha demostrado que las grandes redistribuciones de la riqueza se han dado a través de guerras, revoluciones o hiperinflaciones inesperadas. La elite económica mundial seguramente impedirá un cambio de régimen del que es exclusivamente beneficiaria. Pero de no impulsar reformas en el régimen a través de medidas de redistribución y pre-distribución que son las que permiten contrarrestar las desigualdades originarias, la asfixia económica que hoy sufren los más desfavorecidos y la que empiezan a sentir en menor medida las clases medias y populares será insostenible, porque los pilares que hoy garantizan la rentabilidad de unos pocos y aseguran su perpetuidad en el poder, mañana serán los causantes de su propia destrucción.

1. Thomas Piketty, *Capital e ideología*, Paidós, Buenos Aires, noviembre de 2019.
2. Branko Milanović, *Capitalismo, nada más*, Taurus, Madrid, 2020.
3. François Dubet, *La época de las pasiones tristes*, Siglo XXI, Buenos Aires, 2020.
4. Branko Milanović, *op. cit.*
5. Según el World Inequality Database, la riqueza privada neta ha experimentado un incremento generalizado en las ultimas decadas, pasando de 200-350% del ingreso nacional en la mayoria de los paises ricos en 1970, a 400-700% en la actualidad. Mientras la riqueza pública se ha hecho negativa o cercana a cero. En cuanto a los activos en paraisos fiscales se estima que representan más del 10% del PIB mundial.
6. La esperanza de vida en el mundo pasó de una media de 26 años en 1820 a 72 años en 2020 y se estima que a comienzos de siglo XIX sólo un 10% de la población mundial mayor de 15 años estaba alfabetizada contra un 85% en la actualidad. Para más información véase Thomas Piketty, *op. cit.*
7. Según la Union of Concerned Scientists.
8. Thomas Piketty, *op. cit.*

Creusa Muñoz

Un mundo desigual

En los últimos cuarenta años las desigualdades se han multiplicado y recrudecido en casi todo el planeta, siendo muy pocos los países que hoy ostentan un Índice de Desarrollo Humano elevado. Brechas que serían aun más profundas si no fuera por el crecimiento extraordinario de Asia en las últimas décadas.

Índice de Desarrollo Humano

Muy alto	Más de 0,800
Alto	Entre 0,700 y 0,799
Medio	Entre 0,550 y 0,699
Bajo	Entre 0,354 y 0,549

El Índice de Desarrollo Humano es utilizado para medir la tasa de desarrollo humano de un territorio. Varía entre 0 (desarrollo bajo) y 1 (desarrollo muy alto) y se calcula en base a tres indicadores: el PIB por habitante, la esperanza de vida al nacer y el nivel de educación.

Este planisferio es una Proyección de Briesemeister. Se lo considera "equivalente", es decir: que respeta las relaciones de superficie entre los países, lo cual es poco común. A menudo es utilizado en el presente *Atlas*, ya que la idea es no sumar desigualdades a las desigualdades...

Fuente: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). //hdr.undp.org/en/composite/HDI
© Courrier International

Introducción

LA MADRE DE TODAS LAS BATALLAS

Con frecuencia los medios de comunicación anuncian la lista de los más ricos del mundo como si se tratara de un ranking deportivo. Pero no se trata de un fenómeno inofensivo ya que tiene consecuencias importantes para el 99% del género humano que no figura en ellos y que no sólo vive con ingresos infinitamente inferiores sino que sufre un complejo de desigualdades que se refuerzan mutuamente.

Bernardo Kliksberg

Asesor especial de diversos organismos internacionales. Autor de numerosas obras de extendida difusión, entre ellas *Primero la gente* **(Planeta, 2011), que escribió con el premio Nobel Amartya Sen. Profesor Honorario y Doctor Honoris Causa de numerosas Universidades de América Latina, Europa y Asia.**

No se puede entender el mundo al que se ha llegado, un mundo donde el 1% tiene más que el 99%, donde la esperanza de años de vida es muy dispar, donde un 50% trata de sobrevivir con ingresos irrisorios, inmerso en la economía informal o marginal, donde millones de niños mueren el mismo día que nacieron, por causas ligadas a la pobreza, donde el deterioro medioambiental está comprometiendo la mayoría de los ecosistemas, sin examinar a fondo los impactos ultra regresivos de las grandes desigualdades.

En 2020, los 26 más ricos del mundo tenían un patrimonio que superaba al del 50% de la población mundial, mientras la mitad de la misma ganaba menos de 5,5 dólares por día.

América Latina, al respecto, es un caso representativo. Tiene una dotación de recursos naturales de excepción, posee un tercio de las aguas limpias del planeta, fuentes de energía barata en gran escala, su subsuelo es riquísimo en materias primas estratégicas, tiene condiciones óptimas para la producción de alimentos, incontables paraísos turísticos y muchas otras riquezas. Sin embargo, ya antes de la pandemia del Covid-19 un 30% de la población se hallaba en la pobreza, y la exclusión y la informalidad eran muy agudas. Una de las principales explicaciones reside en que es la región más desigual del mundo. Es decir, no es que hay pobreza y desigualdad sino que hay pobreza en estas proporciones porque hay desigualdad. Como lo demostraron diversos modelos econométricos, hay una "pobreza innecesaria" generada por las muy elevadas desigualdades. Otro hubiera sido el desarrollo económico y social de la región si las tasas de desigualdad fueran más bajas.

Lo ratifica también inversamente el caso de los paises nórdicos: tienen el menor Coeficiente de Gini de desigualdad del orbe, la mitad del de América Latina. La equidad y la inclusión son uno de los motores principales que les han permitido alcanzar un desarrollo vigoroso e inclusivo. Encabezan las tablas más importantes de logros, entre ellas las de desarrollo humano, esperanza de vida, acceso a educación y salud, transparencia, igualdad de género, baja criminalidad. También ocupan las cuatro primeras posiciones del Índice Global de Felicidad de la ONU, y del nuevo Índice de Progreso Social. En la base de su éxito histórico está un gran pacto nacional que apostó a la igualdad y la convirtió en realidades a través de políticas universales de educación y salud gratuitas de la mejor calidad, protección social, equilibrio ambiental, bajas brechas salariales, políticas fiscales progresivas, entre otras.

Círculos viciosos

La desigualdad o la igualdad cuentan. Lo ha demostrado terminantemente la pandemia del Covid-19 que ha causado una crisis mundial sin precedentes poniendo al descubierto las profundas brechas e incrementando aun más la concentración de la riqueza. En efecto, el año 2020 ya estaba envuelto en una escalada de desigualdades. Entre las principales se pueden enumerar las siguientes: las 26 personas más ricas del mundo tenían un patrimonio que superaba al del 50% de la población mundial, mientras la mitad de la población global ganaba menos de 5,5 dólares

por día, lo que los colocaba en la pobreza o al borde de la misma. Como lo ha indicado reiteradamente Naciones Unidas en sus Informes de Desarrollo Humano, las grandes desigualdades generan pobreza y están asociadas a la inestabilidad económica, la corrupción, las crisis financieras, la falta de cohesión social, el ascenso de la criminalidad y los déficits agudos de salud física y mental.

En América Latina no es que hay pobreza y desigualdad sino que hay pobreza en estas proporciones porque hay desigualdad. Otro hubiera sido el desarrollo económico y social si las tasas de desigualdad fueran más bajas.

En cuanto al sistema sanitario, el acceso a la salud antes de la pandemia de Covid-19 no era el mismo para todos: 10.000 personas morían diariamente por no tener posibilidad de atención a la salud. La desigualdad era previa al nacimiento y condicionaba severamente las posibilidades de supervivencia y la esperanza de vida. En efecto, el 17% de los niños que nacieron hace 20 años, en los países de bajo desarrollo humano murieron. De modo que funcionaban activamente "los círculos viciosos de la pobreza". Los niños que nacían en hogares pobres, tenían problemas de nutrición y salud, en muchos casos se veían forzados a trabajar, tenían limitada a escolaridad y para subsistir se integraban a la economía informal. Allí percibían bajos ingresos y carecían de protección social. Generalmente, al no haber políticas establecidas que desbloqueen las desigualdades que se encuentran en cada etapa, la pobreza se termina reproduciendo inter-generacionalmente.

Respecto al saneamiento también existían grandes brechas de desigualdad: el 40% de las personas carecían de agua potable, cerca de dos mil millones vivían en países con fuerte estrés hídrico, más de dos mil millones no tenían sistemas de saneamiento adecuados y mil millones se veían obligadas a tener que hacer sus necesidades a campo abierto. En el ámbito habitacional 1.600 millones de personas vivían en casas inadecuadas y otros 600 millones en asentamientos informales y campamentos.

El hambre también recrudeció. Antes de la pandemia, 830 millones de personas padecían dicho flagelo. A ello se sumaban 2.000 millones que sufrían la llamada hambre silenciosa. Es decir, carecían de las dosis necesarias de uno o varios de los seis micronutrientes esenciales. Los déficits de zinc producían retrasos neuronales, los de hierro anemia, y así sucesivamente. Pero el hambre no tiene que ver sólo con la escasez de alimentos. Hoy con los progresos tecnológicos, el mundo produce alimentos que podrían satisfacer las necesidades de una población de 12.000 millones de personas, esto es, un 50% más que la población actual. De modo que se trata fundamentalmente de un tema de acceso a alimentos, de contar con los ingresos mínimos necesarios.

Injusticias transversales

Las desigualdades también se extendieron en otras áreas: en los países desarrollados el 50% de los jóvenes de 20 años cursó estudios universitarios mientras sólo el 3% lo hizo en los países de menor desarrollo. La brecha digital también ocupa enormes proporciones: el 87% de la población de los países desarrollados tenía acceso a internet mientras que en los países menos desarrollados sólo el 19%.

En las cuestiones de género, si bien hubo progresos, las disparidades seguían siendo amplias. Además de las brechas salariales que según el Foro de Davos, al ritmo actual necesitarían más de un siglo para corregirse, las mujeres cargaban sobre sí gran parte de las tareas de la economía del cuidado. Ello significa 12.500 millones de horas de trabajo diario aproximadamente no remuneradas. A su vez el mundo laboral también concentra una gran desigualdad entre trabajadores formales e informales: previo a la pandemia, el 61% de los trabajadores se desempeñaba en la informalidad.

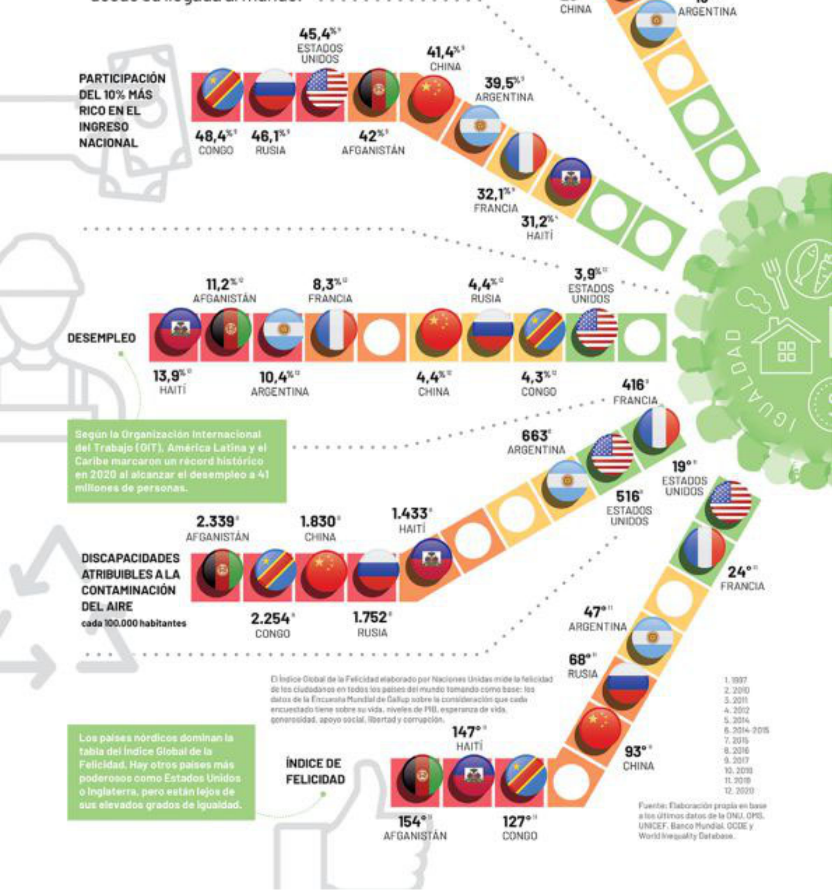
Estas desigualdades si bien eran prominentes en el mundo en desarrollo, también tenían una fuerte expresión en países desarrollados. Por ejemplo, en Inglaterra, el 30% más rico acumulaba el 75% de la riqueza nacional. El 30% más pobre, solo el 2%. Cuando el Covid-19 se extendió por el mundo, el 70% de la población mundial ya vivía en países donde las desigualdades aumentaron en las últimas tres décadas.

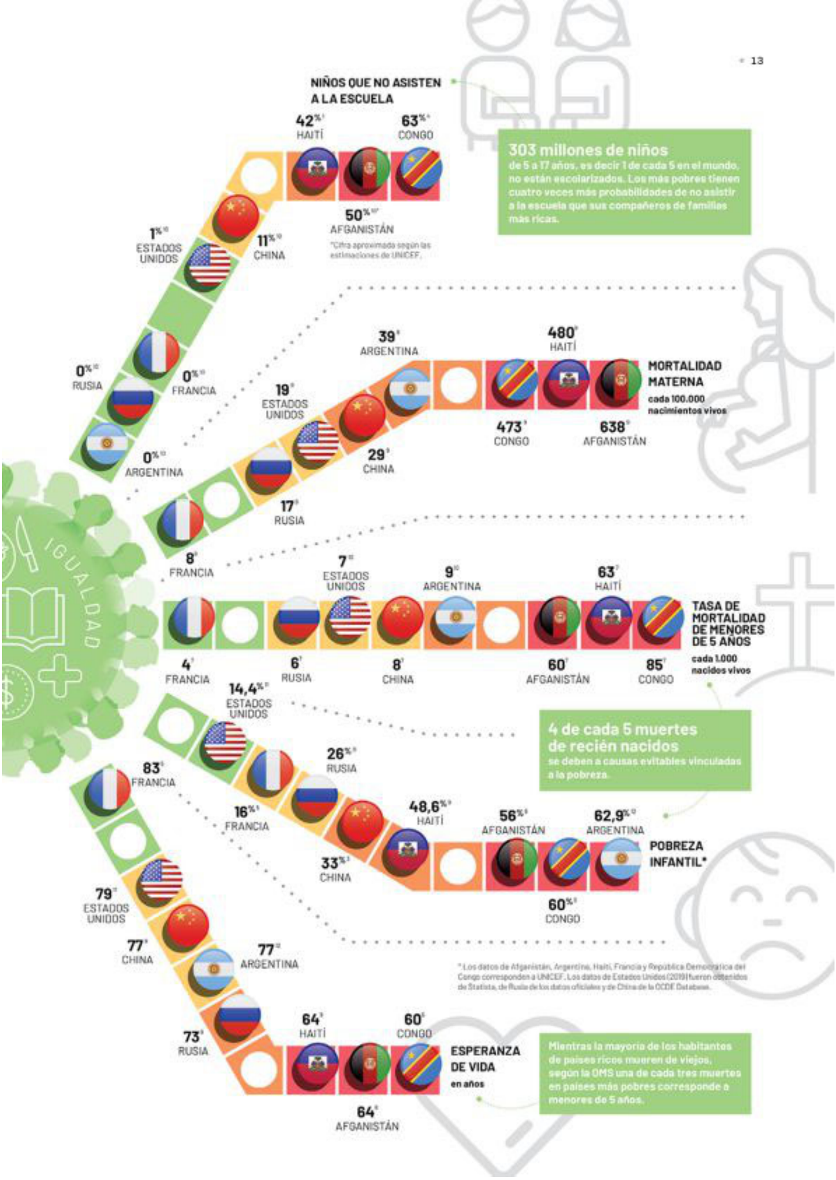
Las grandes desigualdades están asociadas a la inestabilidad económica, la corrupción, las crisis financieras, la falta de cohesión social, la criminalidad y los déficits agudos de salud física y mental.

No se trata solo de desigualdades en los ingresos, son complejos de desigualdades en numerosos campos que se refuerzan mutuamente como lo muestra el formidable aporte de El Atlas de las desigualdades de *Le Monde diplomatique*, edición Cono Sur, que va desde las disparidades monetarias hasta las que tienen que ver con los recursos, el acceso a la salud, las libertades, las cuestiones de género y el medioambiente. Sólidamente documentadas con infografías, gráficos y cartografías y acompañadas de ensayos analíticos de un equipo de prestigiosos científistas del más alto nivel y dilatada trayectoria. Esta rigurosa y sugerente obra impulsará y nutrirá el gran debate impostergable sobre cómo enfrentar las inequidades que hoy agobian al mundo. ▢

La condena originaria

La premisa de que todos somos iguales al nacer resulta a todas luces falaz cuando en los países más pobres los individuos ya están condenados desde su llegada al mundo.




NIÑOS QUE NO ASISTEN A LA ESCUELA
42% HAITÍ
63% CONGO
50% AFGANISTÁN
*Cifra aproximada según las estimaciones de UNICEF.
1% ESTADOS UNIDOS
11% CHINA
0% RUSIA
0% FRANCIA
0% ARGENTINA
303 millones de niños
de 5 a 17 años, es decir 1 de cada 5 en el mundo, no están escolarizados. Los más pobres tienen cuatro veces más probabilidades de no asistir a la escuela que sus compañeros de familias más ricas.
39 ARGENTINA
480 HAITÍ
MORTALIDAD MATERNA
cada 100.000 nacimientos vivos
19 ESTADOS UNIDOS
473 CONGO
638 AFGANISTÁN
29 CHINA
17 RUSIA
8 FRANCIA
IGUALDAD
7 ESTADOS UNIDOS
9 ARGENTINA
63 HAITÍ
TASA DE MORTALIDAD DE MENORES DE 5 AÑOS
cada 1.000 nacidos vivos
4 FRANCIA
6 RUSIA
8 CHINA
60 AFGANISTÁN
85 CONGO
14,4% ESTADOS UNIDOS
4 de cada 5 muertes de recién nacidos
se deben a causas evitables vinculadas a la pobreza.
26% RUSIA
83 FRANCIA
16% FRANCIA
48,6% HAITÍ
56% AFGANISTÁN
62,9% ARGENTINA
POBREZA INFANTIL*
33% CHINA
60% CONGO
79 ESTADOS UNIDOS
77 CHINA
77 ARGENTINA
* Los datos de Afganistán, Argentina, Haití, Francia y República Democrática del Congo corresponden a UNICEF. Los datos de Estados Unidos (2019) fueron obtenidos de Statista, de Rusia de los datos oficiales y de China de la OCDE Database.
73 RUSIA
64 HAITÍ
60 CONGO
ESPERANZA DE VIDA
en años
64 AFGANISTÁN
Mientras la mayoría de los habitantes de países ricos mueren de viejos, según la OMS una de cada tres muertes en países más pobres corresponde a menores de 5 años.

1. RIQUEZAS

La falacia de la meritocracia

De Estados Unidos a China y de Rusia a Brasil, las desigualdades han aumentado sustancialmente desde los años 80, a tal extremo que en algunos países del mundo resulta cada vez más difícil justificarlas en nombre del interés general. La hipocresía de las proclamas meritocráticas, que legitiman las injusticias socioeconómicas culpabilizando por su suerte a los propios perdedores del sistema, se desarma frente a los muros infranqueables que privan a las clases desfavorecidas de ascender en la escala social. ¿Hasta cuándo subsistirá un mundo donde la riqueza se concentra cada vez en menos manos mientras la mayoría se empobrece? Un drama que en pleno siglo XXI exhibe toda su crudeza.

El relato dominante

CÓMO LEGITIMAR UN MUNDO DESIGUAL

En las sociedades contemporáneas, el relato dominante es fundamentalmente el propietarista, empresarial y meritocrático: la desigualdad moderna es justa, puesto que deriva de un proceso libremente elegido en que todos tenemos las mismas posibilidades. Una cómoda manera de justificar la desigualdad sin siquiera cuestionarla, estigmatizando a los desfavorecidos del sistema.

Thomas Piketty

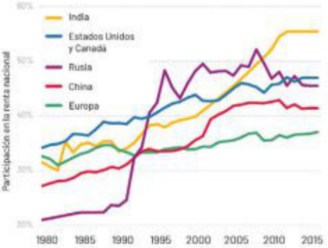
Director de Investigación en la École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS), profesor en Paris School of Economics y codirector de la World Inequality Database. Autor, entre otros, de *El capital en el siglo XXI* **y** *Capital e ideología* **(Paidós, 2015 y 2019, respectivamente).**

Todas las sociedades tienen la necesidad de justificar sus desigualdades: sin una razón de ser, el edificio político y social en su totalidad amenazaría con derrumbarse. Por eso, en cada época se genera un conjunto de discursos e ideologías que tratan de legitimar la desigualdad tal y como existe o debiera existir, así como de describir las reglas económicas, sociales y políticas que permiten estructurar el sistema. De la confrontación entre esos discursos e ideologías, que es al mismo tiempo intelectual, institucional y política, surgen generalmente uno o varios relatos dominantes en los que están basados los regímenes desigualitarios existentes en cada momento.

En las sociedades contemporáneas, el relato dominante es fundamentalmente el propietarista, empresarial y meritocrático: la desigualdad moderna es justa, puesto que deriva de un proceso libremente elegido en que todos tenemos las mismas posibilidades de acceder al mercado y a la propiedad. Todos obtenemos un beneficio espontáneo de la acumulación de riqueza de los más ricos, que son también los más emprendedores, los que más lo merecen y los más útiles. Esto nos situaría en las antípodas de la desigualdad existente en las sociedades más antiguas, que estaba basada en las diferencias entre

Hiperconcentración de la riqueza

Participación en la renta nacional del 10% más rico de la población, por país, en porcentaje. 1980-2015



Fuente: World Inequality Report, 2018, wid.world.

clases sociales, decididas de manera rígida, arbitraria y, a menudo, despótica.

De la complementariedad a la culpabilización

El problema es que este gran relato propietarista y meritocrático, que vivió un primer momento de gloria en el siglo XIX, tras el hundimiento de la sociedad estamental del Antiguo Régimen, y que experimentó una reformulación radical de alcance mundial a finales del siglo XX, tras la caída del comunismo soviético y el triunfo del hipercapitalismo, se antoja cada vez más frágil. La falta de consistencia de este relato es evidente tanto en Europa como en Estados Unidos, en la India como en Brasil, en China como en Sudáfrica, o en Vene-

Ganancias de los trabajadores

Promedio mundial, en dólares, anual

Fuente: OIT, 2019.

zuela como en los países de Medio Oriente. Cada caso es diferente como resultado de evoluciones históricas específicas. No obstante, a comienzos del siglo XXI, estas evoluciones parecen cada vez más ligadas entre sí. Sólo desde una perspectiva transnacional es posible comprender las debilidades del relato dominante y plantear la construcción de un relato alternativo.

> Existe un abismo entre las proclamas meritocráticas oficiales y la realidad a la que se enfrentan las clases desfavorecidas, en lo que concierne al acceso a la educación y a la riqueza.

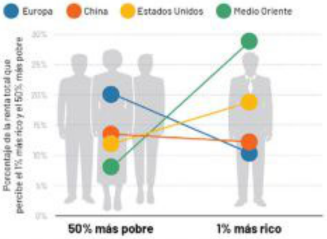
De hecho, en todo el mundo se observa un aumento de las desigualdades socioeconómicas desde la década de 1980-1990. En algunos casos, la desigualdad ha adquirido tal dimensión que resulta cada vez más difícil justificarla en nombre del interés general. Existe un enorme abismo entre las proclamas meritocráticas oficiales y la realidad a la que se enfrentan las clases desfavorecidas, especialmente en lo que concierne al acceso a la educación y a la riqueza. El discurso meritocrático y empresarial es, a menudo, una cómoda manera de justificar cualquier nivel de desigualdad por parte de los ganadores del sistema económico actual, sin siquiera tener que someterlo a examen, así como de estigmatizar a los perdedores por su falta de méritos, de talento y diligencia. La culpabilización de los más pobres no existía o, al menos no con esta magnitud, en los regímenes desigualitarios del pasado que ponían el acento en la complementariedad funcional entre los diferentes grupos sociales.

La desigualdad moderna se caracteriza por un conjunto de prácticas discriminatorias entre estatus sociales y orígenes étnico-religiosos que son ejercidas con violencia mal descrita en el cuento de hadas meritocrático. Esta violencia nos acerca a las formas más brutales de desigualdad de las que decimos querer distinguirnos. Basta citar la discriminación a la que se enfrentan las personas que no tienen domicilio o provienen de ciertos barrios u orígenes. Pensemos también en los migrantes que se ahogan en el mar. Sin un nuevo horizonte universalista e igualitario que permita afrontar de manera creíble los retos que plantean la desigualdad, los movimientos migratorios y las transformaciones climáticas en curso, es de temer que el repliegue identitario y nacionalista ocupe un espacio cada vez mayor en la construcción de un relato que termine por sustituir al actualmente predominante (propietarista y meritocrático). Sucedió en Europa durante la primera mitad del siglo XX, y vuelve a ponerse de manifiesto a comienzos del siglo XXI.

La Primera Guerra Mundial lanzó el movimiento de destrucción y, más tarde, de redefinición de la muy desigualitaria mundialización comercial y financiera propia de la Belle Époque (1880-1914), período que sólo puede considerarse "bello" en comparación con la violencia desencadenada que siguió. La Belle Époque fue tal para los rentistas y, en concreto, para el hombre blanco propietario. Si no transformamos profundamente el sistema económico actual para convertirlo en menos desigual, más equitativo y sostenible, tanto entre países como en el interior de cada país, entonces el "populismo" xenófobo y sus posibles éxitos electorales podrían ser el principio del fin de la mundialización hipercapitalista y digital de los años 1990-2020.

Las bases de los regímenes desigualitarios

Porcentaje de la renta total que percibe el 1% más rico y el 50% más pobre, 2018



Fuente: http://piketty.pse.ens.fr/files/ideologie/pdf/G13.4.pdf.

¿Hacia un nuevo horizonte igualitario?

El combate por la igualdad y la educación es el que ha permitido el desarrollo económico y el progreso humano y no la sacralización de la propiedad, la estabilidad y la desigualdad. El relato hiperdesigualitario que se ha impuesto desde los años 1980-1990 es, en parte, el producto de la historia y del desastre comunista. Pero también es el fruto de la ignorancia y de la fragmentación del conocimiento que ha contribuido a alimentar el fatalismo y las derivas identitarias actuales. Echando la vista atrás, desde una perspectiva pluridisciplinar, es posible construir un relato más equilibrado y esbozar el contorno de un nuevo socialismo participativo para el siglo XXI. Es posible concebir un nuevo horizonte igualitario de alcance universal, una nueva ideología de la igualdad, de la propiedad social, de la educación del conocimiento y del reparto del poder que sea más optimista con la naturaleza humana. Esa nueva ideología puede ser más precisa y convincente que los relatos precedentes, al estar mejor anclada en las lecciones de la historia global. Por supuesto, cada uno es libre de juzgar y de asumir como propias estas conclusiones tan frágiles como provisionales, de transformarlas y llevarlas más lejos. ▢

Este texto fue extraído de *Capital e ideología*, Paidós, Buenos Aires, 2019.

¿Igualdad de posiciones o igualdad de oportunidades?

EL SUEÑO DE LA JUSTICIASOCIAL

Las sociedadesdemocráticasque afirmanque todas las personas "nacenlibres e iguales" puedendividirseen dos concepcionesde la justiciasocial: la primera pretendereducir las desigualdadesentre las posicionessocialesde ricos y pobres; la segunda busca promover la igualdadde oportunidadespara que todos puedan accedera cualquierposiciónsocial. Pero la primera es la que mejor cuestiona una estructurade clases fuertementejerarquizada.

François Dubet

Sociólogofrancés, autor de *Repensar la justicia social. Contra el mito de la igualdad de oportunidades* y *¿Por qué preferimos la desigualdad? (aunque digamos lo contrario)*, **ambos publicados por Siglo XXI.**

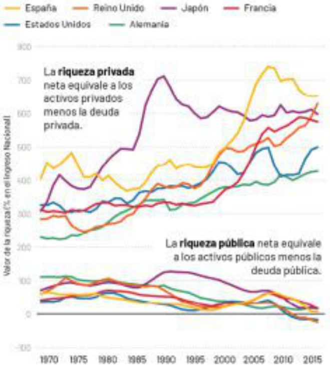
Existen dos grandes concepciones de justicia social: la "igualdad de posiciones" y la "igualdad de oportunidades". Ambas parten de un problema común: buscan reducir la tensión fundamental entre, por un lado, la idea de la igualdad de todos, y, por otro, las desigualdades sociales reales surgidas de las tradiciones, la competencia de intereses y el funcionamiento "normal" de las sociedades modernas y más o menos capitalistas. Estas dos soluciones, la de la igualdad de posiciones o resultados y la de la igualdad de oportunidades, apuntan a reducir ciertas desigualdades sociales para volverlas aceptables, cuando no perfectamente justas.

El primer modelo, la igualdad de posiciones, está centrado en el conjunto de lugares ocupados por los individuos, sean estos hombres o mujeres, miembros de las minorías visibles o de la "mayoría blanca", más cultos o menos cultos, más jóvenes o menos jóvenes... Esta representación de la justicia social invita a reducir las desigualdades de ingresos, de condiciones de vida, de acceso a los servicios y de seguridad que están asociadas a las posiciones sociales que ocupan individuos muy diferentes en numerosos aspectos: las calificaciones, el sexo, la edad, el talento... El objetivo es corregir la estructura social más que fomentar la circulación de los individuos entre las diversas posiciones desiguales.

En este esquema, la movilidad social –la posibilidad de cambiar de posición a lo largo de las generaciones– es una consecuencia indirecta de la relativa igualdad social, pero no es la prioridad. Para decirlo en pocas palabras: no se trata de prometer a los hijos de los obreros que tendrán tantas posibilidades de convertirse en ejecutivos como

Personas más ricas, gobiernos más pobres

Participación de la riqueza pública y privada en el ingreso nacional, en porcentaje, 1970-2015



Fuente: "Informe sobre la desigualdad global", World Inequality Lab, 2018.

los hijos de los propios ejecutivos, sino de reducir la brecha en las condiciones de vida y trabajo entre los obreros y los ejecutivos, entre los asalariados y los patrones. Los sindicatos y los partidos de izquierda, y en América Latina los partidos populistas, fueron en general los que impulsaron este proyecto de justicia social, en nombre de las clases trabajadoras, contra la explotación. Dicha concepción considera que el progreso social consiste en redistribuir la riqueza de los ricos hacia los pobres a través de los impuestos y el desarrollo del sector público.

La segunda concepción de la justicia social está centrada en la igualdad de oportunidades, la posibilidad de que cualquier individuo ocupe cualquier posición social en función de un principio meritocrático. No apunta tanto a reducir la desigualdad como a luchar contra las discriminaciones que obstaculizan la realización del mérito que permite que cada uno acceda a posiciones desiguales luego de una competencia equitativa en la que los individuos se enfrentan para ocupar posiciones sociales jerarquizadas. Bajo esta perspectiva, las desigualdades serían justas, dado que todas las posiciones son accesibles para todos. Y la definición de las desigualdades sociales cambia sensiblemente, ya que éstas son vistas menos como desigualdades de clase que como el conjunto de obstáculos que se oponen a una competencia equitativa entre los individuos, sin que la estructura de clases sea objetada a priori.

Las desigualdades se profundizaron más allí donde se priorizó la perspectiva de igualdad de oportunidades por sobre la de igualdad de posiciones.

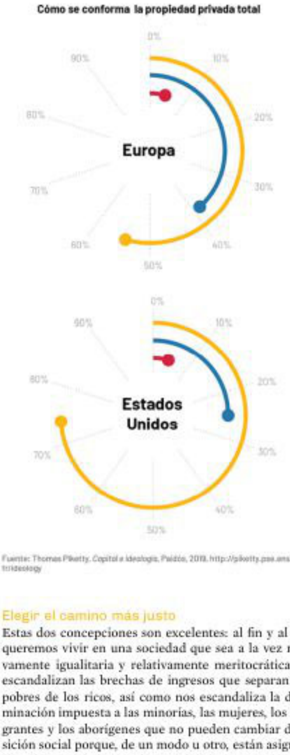
El ideal aquí no es reducir las desigualdades sino construir una sociedad en la que cada generación se distribuya equitativamente en todas las posiciones sociales en función de los proyectos y el mérito de los individuos. En este modelo, la justicia requiere que los hijos de los obreros tengan las mismas posibilidades que los hijos de los ejecutivos de convertirse en ejecutivos, sin que se ponga en cuestión la distancia entre unos y otros. Asimismo, implica la paridad de la presencia de las mujeres en todos los escalones de la sociedad, pero sin que se transforme la propia escala de actividades profesionales e ingresos. Esta figura de la justicia social también obliga a tener en cuenta la denominada diversidad étnica y cultural, de modo que esté representada en todos los niveles de la vida social.

Esta concepción liberal de la justicia, que apela a la libertad, la movilidad y el mérito de los individuos, parece imponerse en todas partes, tanto a la derecha como a la izquierda del espacio político. La lucha de clases es reemplazada por la tensión entre incluidos y excluidos, y la educación es percibida como la principal herramienta.

La mentira de la igualdad de oportunidades

Concentración de la propiedad privada total en Europa y Estados Unidos, en porcentaje, 2018

El 50% más pobre · El 40% siguiente · El 10% más rico



Fuente: Thomas Piketty, *Capital e ideología*, Paidós, 2019. http://piketty.pse.ens.fr/ideology

Elegir el camino más justo

Estas dos concepciones son excelentes: al fin y al cabo, queremos vivir en una sociedad que sea a la vez relativamente igualitaria y relativamente meritocrática. Nos escandalizan las brechas de ingresos que separan a los pobres de los ricos, así como nos escandaliza la discriminación impuesta a las minorías, las mujeres, los inmigrantes y los aborígenes que no pueden cambiar de posición social porque, de un modo u otro, están asignados a su lugar. A primera vista, no se trataría de elegir entre el modelo de posiciones y el de oportunidades, dado que una sociedad democrática verdaderamente justa debe combinar la igualdad básica de todos sus miembros y las "desigualdades justas" que surgen de una competencia

equitativa. Por lo demás, los que objetan esta competencia en la economía la aceptan de buena gana en la escuela o en el fútbol.

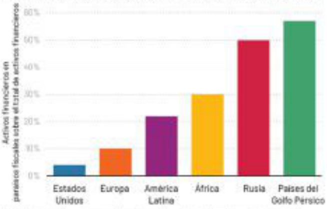
Sin embargo, el hecho de que queramos a la vez la igualdad de posiciones y la igualdad de oportunidades no nos dispensa de elegir el orden de nuestras prioridades. En términos prácticos, es decir en términos de políticas sociales y programas políticos, no se hace exactamente lo mismo según se elija en primer lugar una u otra. Por ejemplo, no es lo mismo priorizar el aumento de salarios y la mejora de las condiciones de vida en los barrios populares que implementar políticas educativas para que los niños de esos barrios tengan las mismas oportunidades que el resto de acceder a posiciones sociales más ventajosas. Una cosa es abolir una posición social injusta y otra permitir que los individuos puedan superarla, sin cuestionarla. Ambas cosas son deseables, pero hay que elegir cuál hacer primero.

Cuanto más valoran las sociedades únicamente la igualdad de oportunidades, más aceptan las desigualdades sociales reales en nombre de un darwinismo social latente.

Otro ejemplo: en una sociedad que necesariamente debe establecer prioridades, no es lo mismo mejorar la calidad de la oferta escolar en los barrios desfavorecidos que ayudar a los alumnos desfavorecidos más meritorios para que tengan la posibilidad de unirse a la elite social. En otras palabras, no es lo mismo buscar que los miembros de las minorías etno-raciales estén representados equitativamente en el Parlamento y en los medios de comunicación que orientar la acción política a que los empleos que ellos ocupan estén mejor remunerados y sean menos penosos. El argumento según el cual todo debería hacerse al mismo tiempo no resiste los imperativos de la acción política, que obliga fatalmente a elegir lo que pare-

Evasión fiscal en el mundo

Activos financieros en paraísos fiscales, en porcentaje, 2015



Nota: Estas estimaciones excluyen los activos no financieros (inmobiliarios, etc.) y deben ser consideradas como un umbral mínimo.
Fuente: Thomas Piketty, *Capital e ideología*, Paidós, 2019, http://piketty.pse.ens.fr/fr/ideology

ce más importante y más decisivo. Podemos desear tanto la igualdad de posiciones como la igualdad de oportunidades, pero si no queremos contentarnos con palabras estamos obligados a elegir el camino que consideremos más justo.

La elección se impone porque estos dos modelos de justicia social no son solamente esbozos teóricos. En los hechos, son impulsados por movimientos sociales diferentes, que privilegian grupos sociales e intereses distintos. No movilizan y no construyen exactamente los mismos actores ni los mismos intereses. Una persona no se define ni actúa de la misma manera si lucha por mejorar su posición que si busca incrementar las posibilidades de salir de esa posición. En el primer caso, el actor generalmente es definido por su trabajo, por su "función", por su "utilidad"... y por su explotación. En el segundo caso, es definido por su identidad, por su "naturaleza"... y por la discriminación que padece en tanto mujer o en tanto minoría estigmatizada. Por supuesto, estas dos maneras de definirse, de movilizarse y de actuar en el espacio público son legítimas, pero no deben ser confundidas, y en todo caso tenemos que elegir cuál priorizar. No hace falta caer en una cosificación de las clases sociales, por un lado, o de las minorías, por otro, para comprender que una sociedad no se percibe y no actúa de la misma manera según elija ante todo las posiciones o las oportunidades.

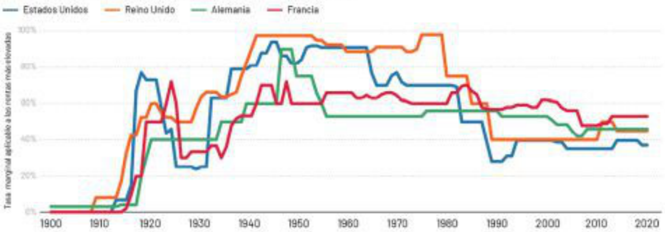
Dos razones esenciales

Defender como prioritaria la búsqueda de la igualdad de posiciones no supone negar toda legitimidad a la justicia de las oportunidades y el mérito. Pero es la perspectiva que considero más adecuada por dos razones esenciales.

La primera es que la igualdad de posiciones, al invitar a reformar la estructura social, es "buena" para los individuos y para su autonomía; aumenta la confianza y la cohesión social en la medida en que los actores no se inscriben en una competencia continua, que consiste tanto en triunfar como exponer su estatus de víctima de discriminación para beneficiarse de una política especí-

Involución impositiva

Tasa máxima del impuesto sobre la renta, en porcentaje, 1900-2020



Fuente: Thomas Piketty, *Capital e ideología*, Paidós, 2019. http://piketty.pse.ens.fr/fr/ideology

fica. La igualdad de posiciones, aunque siempre relativa, crea un sistema de obligaciones y derechos que lleva a destacar lo que tenemos en común más que lo que nos distingue y, en ese sentido, refuerza la solidaridad. No apunta a la comunidad perfecta de las utopías y las pesadillas comunistas, sino que busca mejorar la calidad de la vida social y, por ende, la autonomía personal, ya que uno es tanto más libre de actuar cuando no se ve amenazado por desigualdades sociales demasiado grandes. No contradice la filosofía política liberal, aunque lleve a controlar y limitar el libre juego del liberalismo económico. En síntesis, la mayor igualdad posible es buena en sí misma, siempre y cuando no ponga en cuestionamiento la autonomía de los individuos; más aun: es deseable porque refuerza esa autonomía.

El segundo argumento a favor de la igualdad de posiciones se relaciona con el hecho de que es probablemente la mejor forma de hacer realidad la igualdad de oportunidades. Si las oportunidades se definen como la posibilidad de circular en la estructura social, de subir los escalones, parece evidente que esa fluidez es mayor cuando se reduce la distancia, cuando los que suben no tienen demasiados obstáculos que superar y los que bajan no corren el riesgo de perderlo todo. Efectivamente, en su propia definición la igualdad de oportunidades no dice nada de la distancia social que separa las posiciones sociales, que puede ser tan grande que los individuos no logren superarla nunca, exceptuando héroes de los que podemos preguntarnos si no son el árbol de la fluidez que tapa el bosque del inmovilismo o, en otras palabras, si no son héroes de propaganda.

A pesar de la sensatez de lo que John Rawls llama el "principio de diferencia", que invita a que la igualdad de oportunidades no degrade la situación de los menos favorecidos, claramente hay que constatar que las desigualdades se profundizaron más allí donde se priorizó la perspectiva de igualdad de oportunidades por sobre la de igualdad de posiciones. En definitiva, cuanto más valoran las sociedades únicamente la igualdad de oportunidades, más aceptan las desigualdades sociales reales en nombre de un darwinismo social latente. El caso de Estados Unidos así lo demuestra: en nombre de la igualdad de oportunidades, la desigualdad se duplicó.

En otras palabras, tenemos buenas razones para pensar que el viejo proyecto de reducción de las desigualdades entre los gerentes y los trabajadores, entre los empleados calificados y los menos calificados, entre los barrios ricos y los pobres sigue siendo la mejor manera de hacer que las sociedades se vuelvan más soportables y, a largo plazo, el camino más adecuado para promover indirectamente la igualdad de oportunidades. Si lo pensamos a escala internacional, allí donde las desigualdades son profundas conviene más reducir las desigualdades macrosociales que crear una competencia de todos contra todos en nombre de la igualdad de oportunidades. La igualdad de oportunidades se mejora cuando somos relativamente iguales. En ese sentido, los "viejos proyectos" del movimiento obrero y la socialdemocracia no perdieron su vigencia.

La versión original de este texto fue publicada bajo el título "Elegir para actuar", *Le Monde diplomatique*, edición Cono Sur, Buenos Aires, marzo de 2016.
Traducción: Bárbara Poey Sowerby

Los déficits de la izquierda

CONSTRUCCIONES ANACRÓNICAS

Soñar con un mundo más igualitario suele ser bastante común. Pero hay que distinguir entre sueños y realidad. Para tener éxito, no se puede restaurar un mundo que ya no existe, que va contra la corriente de la vida y la economía modernas. Es necesario que la izquierda ofrezca un programa que combine su internacionalismo y su cosmopolitismo de antaño con una fuerte redistribución nacional.

Branko Milanović

Economista serbio-estadounidense especialista en desarrollo y desigualdades. Profesor visitante en el Graduate Center de la City University of New York (CUNY) e investigador titular en el Luxembourg Income Study (LIS). Anteriormente, fue economista jefe en el Departamento de Investigación del Banco Mundial.

Atrapada entre el implacable proteccionismo y la xenofobia trumpistas, por un lado, y la coalición neoliberal de liberadores sexuales y oscuros recaudadores, por el otro, la izquierda de los países ricos parece carecer de nuevas ideas. Y peor que carecer de nuevas ideas es intentar restaurar un mundo que ya no existe, que va contra la corriente de la vida y la economía modernas.

Sin embargo, este es un ejercicio en el que participan algunos sectores de la izquierda. Tengo en mente varios ensayos de *El gran retroceso* de Heinrich Geiselberger, un artículo reciente de Chantal Mouffe (1) y, quizás más manifiestamente, *El futuro del capitalismo*, de Paul Collier. Dani Rodrik proporcionó munición ideológica temprana para este punto de vista con su célebre "trilema". Es también el contexto en el que mi *Capitalismo, nada más* fue recientemente reseñado por Robert Kuttner en *The New York Review of Books*.

Este proyecto apunta a recrear las condiciones existentes aproximadamente entre 1950 y 1980, que fue, de hecho, el período en que floreció la socialdemocracia. Si bien muchos tienden a presentar esta época en tonos excesivamente brillantes, sin duda fue, en muchos aspectos, extraordinariamente exitosa para Occidente: el crecimiento económico era elevado, los ingresos de las naciones occidentales convergían, la desigualdad era relativamente baja, la movilidad social era mayor que hoy, las costumbres sociales se volvían más relajadas e igualitarias y la clase trabajadora occidental era más rica que las tres cuartas partes de la humanidad (y podía sentirse, como escribe Collier, orgullosa y superior al resto del mundo). Hay mucho por lo que sentir nostalgia.

Condiciones especiales e irrepetibles

Pero ese éxito se dio en condiciones muy especiales e imposibles de recrear. ¿Cuáles eran?

Primero, no existía una competencia entre gran parte de la mano de obra global y los trabajadores y trabajadoras del Primer Mundo. Las economías socialistas, China e India seguían políticas autárquicas, por diseño o por accidente histórico. En segundo lugar, el capital no se movía demasiado. No solo existían restricciones al capital, sino que las inversiones extranjeras eran a menudo objeto de nacionalización, y tampoco existían los medios tecnológicos para trasladar fácilmente grandes cantidades de dinero.

En tercer lugar, la migración era limitada y, cuando sucedía, se daba entre pueblos culturalmente similares (como la migración del sur de Europa a Alemania) y gracias a la creciente demanda de mano de obra impulsada por las economías nacionales en crecimiento. En cuarto lugar, la fuerza de los partidos socialistas y comunistas nacionales, combinada con los sindicatos y la amenaza soviética (especialmente en Europa), hizo que los capitalistas se manejaran con precaución: por instinto de supervivencia, tuvieron cuidado de no presionar demasiado a trabajadores y sindicatos.

En quinto lugar, el espíritu socialdemócrata de igualdad estaba en sintonía con las costumbres predominantes en aquella época, reflejadas en la liberación sexual, la igualdad de género y la reducción de la discriminación. En un contexto interno tan benigno, y sin enfrentarse a ninguna presión por parte de trabajadores extranjeros mal remunerados, los socialdemócratas podían seguir siendo internacionalistas, como fue el caso de notabilí-

La izquierda tiene que apoyar la globalización, tratar de limitar sus efectos nefastos y aprovechar su indudable potencial para igualar, con el tiempo, los ingresos en todo el mundo.

Igualar para abajo

Participación de la renta real por adulto en el crecimiento mundial, en percentil, 1980-2018

Fuente: Thomas Piketty, *Capital e ideología*, Paidós, Buenos Aires, 2019.

simas figuras como Olof Palme en Suecia y Willy Brandt en la República Federal de Alemania.

Cambios drásticos

En las condiciones sociales y económicas totalmente diferentes que presenta la actualidad, cualquier intento de recrear un contexto interno tan benigno implicaría cambios drásticos y, de hecho, reaccionarios. Sin decirlo abiertamente, sus partidarios piden socialdemocracia en un solo país o, más exactamente, en un rincón (rico) del mundo.

Collier aboga por amurallar el mundo rico para detener la migración, que considera culturalmente disruptiva y que socava injustamente el trabajo nacional. Collier justifica estas políticas, aplicadas sobre todo por los socialdemócratas en Dinamarca, diciendo que su preocupación son los países menos desarrollados: no vaya a ser que el éxodo de sus trabajadores más calificados y ambiciosos empuje aun más a estos países hacia la pobreza. Sin embargo, está claro que no son esos los verdaderos motivos de tales políticas.

Otros protegerían a Occidente de la competencia de China, argumentando, otra vez de manera falsa, que los trabajadores occidentales no pueden competir con trabajadores de menores salarios, sometidos a una dura disciplina productiva y sin sindicatos independientes. Como ocurre con las políticas que detendrían la migración, la justificación del proteccionismo se camufla con el lenguaje de la preocupación por los demás.

Dentro de esta perspectiva, debería lograrse que el capital nacional permaneciera principalmente en casa, promoviendo una globalización mucho más "superficial" de la que existe hoy. Las empresas occidentales que actúen con ética no deberían contratar a personas en (digamos) Myanmar que no gocen de derechos laborales elementales.

Las masas populares

En todos los casos, estas políticas apuntan a interrumpir el libre flujo de comercio, personas y capital y a aislar al mundo rico de las masas populares. No tienen casi ninguna posibilidad de éxito, simplemente porque los avances tecnológicos de la globalización no se pueden deshacer: China e India no pueden volver al aislamiento económico y las personas de todo el mundo, dondequiera que estén, desean mejorar su situación económica emigrando a países más ricos.

Además, estas políticas representarían una ruptura estructural con el internacionalismo que siempre fue uno de los logros más importantes de la izquierda (si bien suele más bien brillar por su ausencia). Reducirían el crecimiento en los países pobres y la convergencia mundial, frenarían la reducción de la desigualdad y la pobreza mundiales y, a fin de cuentas, resultarían contraproducentes para los propios países ricos.

Soñar con un mundo restaurado suele ser bastante común, y a menudo (especialmente a una edad avanzada) nos acostumbramos a entregarnos a esas ensoñaciones. Pero hay que aprender a distinguir entre sueños y realidad. Para tener éxito en tiempo real, en las condiciones actuales, la izquierda necesita ofrecer un programa que combine su internacionalismo y su cosmopolitismo de antaño con una fuerte redistribución nacional. Tiene que apoyar la globalización, tratar de limitar sus efectos nefastos y aprovechar su indudable potencial para igualar, con el tiempo, los ingresos en todo el mundo.

Como escribió Adam Smith hace más de dos siglos, la igualación de las condiciones económicas y el poder militar en todo el mundo es también una precondición para que prevalezca la paz universal.

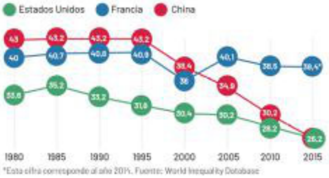
1. https://braveneweurope.com/chantal-mouffe-a-left-populist-strategy-for-post-covid-19

Este texto ha sido publicado bajo el título "Socialdemocracia, internacionalismo y redistribución nacional", *Nueva Sociedad*, Buenos Aires, octubre de 2020.

Traducción: Carlos Díaz Rocca

El declive de la clase media

Participación del grupo de ingresos del 40% intermedio de China, Francia y Estados Unidos en la riqueza total, en porcentaje



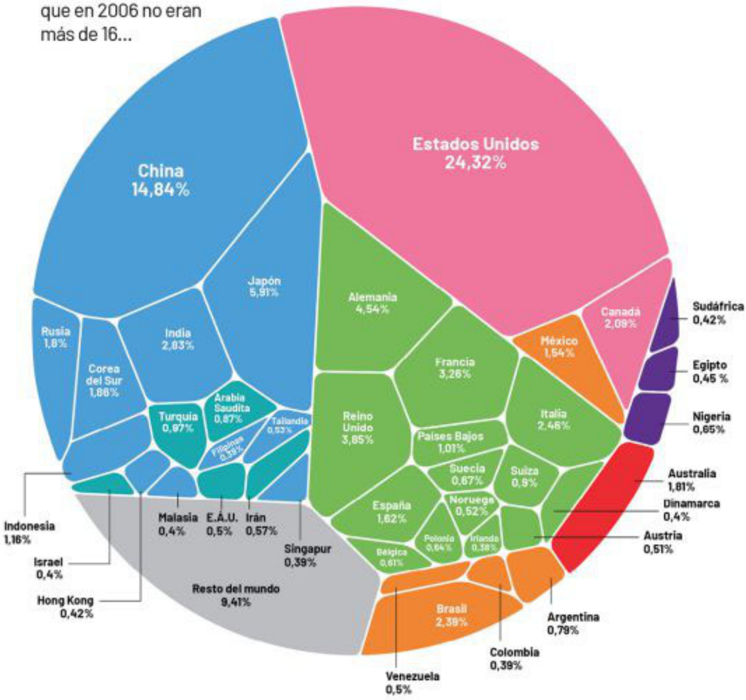
*Esta cifra corresponde al año 2014. Fuente: World Inequality Database

¿Dónde están los ricos?

Los países cuyo PIB es más importante a menudo albergan una gran cantidad de súper ricos. Sin embargo, existen algunas diferencias. "Estados Unidos sigue liderando la carrera de los multimillonarios, pero China está recuperando terreno", subrayaba *The Wall Street Journal* a fines de 2018. En efecto, en 2017, 373 personas poseían en el gigante asiático un patrimonio superior a los 1.000 millones de dólares mientras que en 2006 no eran más de 16...

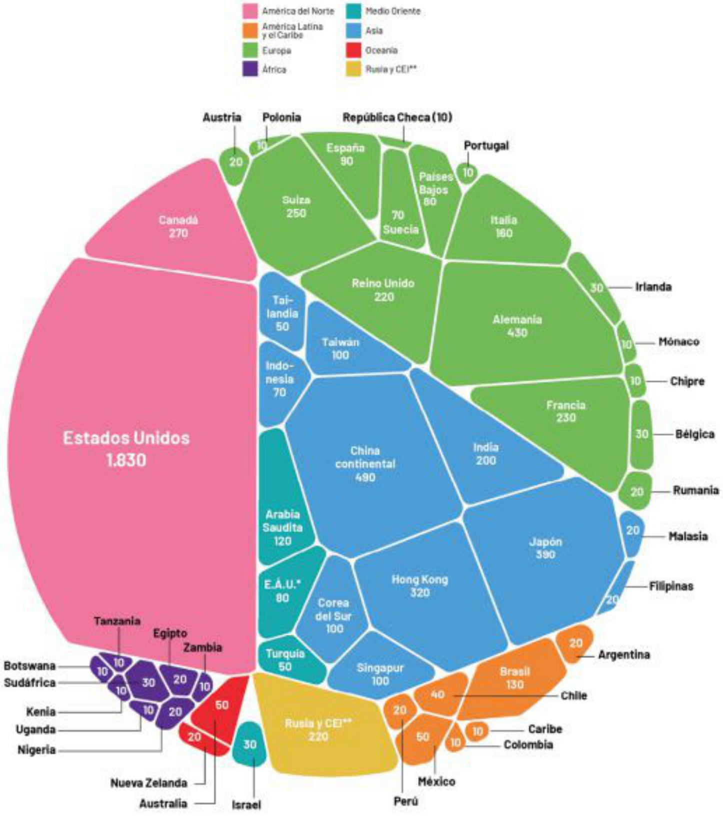
Participación de los países en el PIB mundial
(en porcentaje, 2017)

- América del Norte
- América Latina
- Europa
- África
- Medio Oriente
- Asia
- Australia
- Resto del mundo



Fuente: Base de datos de los índices de desarrollo en el mundo, Banco Mundial, 1-2-17, www.Knightfrank.Com/wealthreport
© Courrier international

Número de personas con un patrimonio superior a 500 millones de dólares
(2017)



Sólo son tenidas en cuenta las personas con domicilio principal en el país.
*Emiratos Árabes Unidos. **Comunidad de Estados Independientes, países de la antigua URSS.

Concentración de riquezas

MÁS ALLÁ DE TODAS LAS CRISIS

La desigualdad de ingresos se ha incrementado en prácticamente todas las regiones del planeta en las últimas décadas. En España ha crecido más que en el resto de la Unión Europea y hoy se sitúa entre los cuatro países con mayor Coeficiente de Gini, por detrás de Bulgaria, Lituania y Letonia. Un flagelo difícil de erradicar.

Olga Cantó Sánchez

Catedrática de Fundamentos del Análisis Económico en la Universidad de Alcalá y Doctora en Economía por el Instituto Universitario Europeo de Florencia.

A mediados de los años 70, la OCDE publicó uno de los primeros informes sobre el alcance de la desigualdad en los países ricos. Se utilizaron datos de encuestas de ingresos de distintos países y se seleccionó una muestra que incluía a Australia, Canadá, España, Estados Unidos, Francia, Noruega, República Federal de Alemania, Reino Unido y Suecia. Aunque con algunos problemas de homogeneidad de las fuentes, los indicadores de desigualdad estimados dibujaban un panorama nítido. Los países nórdicos eran los que disfrutaban de menores niveles de inequidad gracias a la extensión de sus sistemas de impuestos y prestaciones sociales, Estados Unidos era el país donde la desigualdad era mayor y, entre el resto de los países europeos ricos, España se destacaba como el más desigual por la mayor distancia entre el porcentaje de la renta disponible que recibían los hogares pertenecientes al quintil más bajo y el que recibía el quintil más rico.

Más de cuarenta años después podemos comprobar que las posiciones no han cambiado mucho. Según el último informe sobre desigualdad global publicado por el *World Inequality Lab* en 2018 (1), la desigualdad de ingresos se ha incrementado en prácticamente todas las regiones del planeta en las últimas décadas, aunque con distintas velocidades. Desde 1980 la desigualdad de ingresos ha crecido en China, Estados Unidos, India y Rusia y también en los países europeos, pero con importantes diferencias en el nivel y en la tendencia. Por ejemplo, en Estados Unidos la participación del 1% más rico en la renta nacional se ha duplicado en las últimas tres décadas mientras que en los países de Europa Occidental esta participación aumentó de forma mucho más moderada. Además, en Estados Unidos ha caído más de un tercio la participación de la mitad más pobre de la población en la renta nacional mientras que en Europa se ha mantenido casi estable y sólo se ha reducido ligeramente. Las claves para entender estas diferencias entre Estados Unidos y Europa, según el informe, son, en primer lugar, la enorme desigualdad educativa estadounidense que no deja de crecer y que impulsa la desigualdad salarial y, en segundo lugar, el creciente aumento de la desigualdad de las rentas de capital y su cada vez menos progresivo sistema tributario.

En EE.UU. la participación del 1% más rico en la renta nacional se ha duplicado en las últimas tres décadas mientras que en los países de Europa esta participación aumentó de forma más moderada.

Una recuperación frustrada

En España hubo pocos cambios relevantes en cuanto a la distancia de ingresos entre los dos quintiles extremos que en 2018 seguía colocando al país, como en 1973, a la cola de países de la Unión Europea, sólo por delante de Italia y algunos países del Este de Europa. Esta aparente ausencia de cambios relevantes en el largo plazo resulta llamativa, ya que los instrumentos generales de corrección de las desigualdades de las rentas primarias se han extendido notablemente en estas cuatro décadas. Mientras que a principios de los años 70 el gasto público en España apenas excedía el 20% del PIB, en la actualidad es más del doble, correspondiendo casi dos tercios de ese gasto a protección social, esencialmente salud y educación. Un crecimiento similar, aunque más contenido en su nivel máximo, ha sido el de los ingresos públicos, con un amplio desarrollo de la imposición personal progresiva sobre la renta.

Un intervalo temporal tan amplio –las cuatro últimas décadas– esconde, sin embargo, cambios en la desigualdad cuya identificación nos permite interpretar mejor lo sucedido. Uno de los puntos clave es que los altos niveles de desempleo en España no son el único elemento para explicar las diferencias con los países europeos de mayor renta y hoy parece más diluido que nunca ese automatismo entre la creación de empleo y la reducción de la desigualdad.

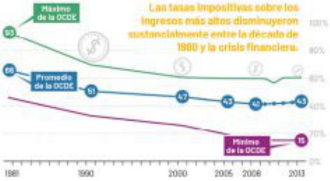
Tener más y ganar más

Participación del 1% de los ingresos superiores de los países de la OCDE en el ingreso total antes de impuestos, 1981-2012

Fuente: Brian Keeley, "Desigualdad de ingresos", OCDE, 2018.

Tener más y pagar menos

Tasas impositivas legales máximas, mínimas y promedios sobre los ingresos más altos en los países de la OCDE, 1981-2013



Otros elementos, como la extensión de la temporalidad y la parcialidad de los contratos, la concentración de situaciones laborales precarias en algunos hogares o la persistente debilidad del sistema de prestaciones e impuestos, han pasado a tener mayor importancia.

Se puede constatar, en primer lugar, que la intensa crisis económica de los años 70 no dio lugar a aumentos importantes de la desigualdad, pese a que el desempleo creció rápidamente, porque su efecto fue parcialmente compensado por el notable incremento de los salarios y por el tardío desarrollo de los instrumentos básicos del Estado de Bienestar, incluyendo la puesta en marcha de un sistema más ambicioso de fiscalidad progresiva. Fue en los años 80 cuando se produjo la mayor reducción de la desigualdad de las últimas décadas. La reactivación de la economía con una importante reducción de la tasa de desempleo y el notable crecimiento del gasto social hicieron que la desigualdad disminuyera, mientras que en la mayoría de los países de la OCDE se daba la tendencia contraria. Tras un cierto repunte en el primer tercio de los años 90 como consecuencia de una breve pero intensa etapa recesiva, los indicadores de desigualdad apenas cambiaron durante la etapa de bonanza económica que se prolongó hasta la crisis de 2008. Esto apunta a que el crecimiento de la actividad económica y del empleo no se tradujeron en cambios en la desigualdad de ingresos, porque factores como la extensión de la temporalidad, la parcialidad y los bajos salarios evitaron un reparto más equitativo del crecimiento.

Con la crisis de 2008, en cambio, la desigualdad aumentó rápidamente. El drástico crecimiento del desempleo, el incremento de las diferencias salariales cuando se derrumbó el sector de la construcción y la insuficiencia de las políticas públicas de protección de rentas que sostuvieran unos niveles mínimos de ingresos, hicieron que la desigualdad aumentara considerablemente y que lo hiciera, además, a un ritmo mayor que el de la mayoría de los países europeos.

El sistema de prestaciones e impuestos español después de mejorar su eficacia en la década de los años 80, y aunque contribuyó a amortiguar los primeros efectos de la crisis, fue insuficiente para compensar el gran crecimiento de la desigualdad de las rentas primarias. Las políticas públicas de carácter monetario siguen siendo de las menos eficaces de la Unión Europea para reducir la desigualdad en la renta de los hogares. Mientras que en desigualdad de rentas de mercado España se sitúa en el decimosegundo puesto de los 27 países de la UE, en desigualdad de renta disponible se encuentra en el octavo. Es decir, dentro de Europa la dimensión de la desigualdad es distinta según los países, lo que suele estar ligado al funcionamiento del mercado de trabajo y a una diferente intensidad protectora de cada sistema de Estado de Bienestar.

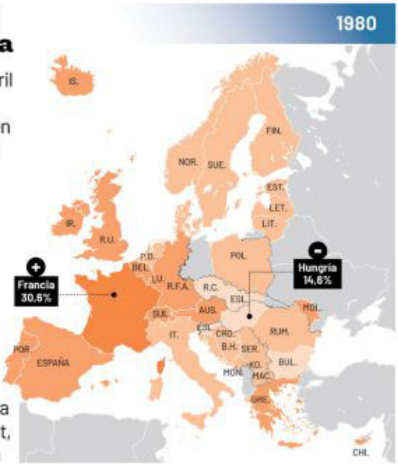
En general, la evidencia empírica reciente apunta a que las políticas de austeridad en muchos países de la Unión Europea han estado asociadas a aumentos en la desigualdad de renta disponible principalmente en la parte alta de la distribución. No así en el caso de los países periféricos, como España, donde el aumento en los ingresos públicos se consiguió a través del aumento de impuestos personales y de consumo, más que aumentando impuestos sobre los beneficios o las ganancias de capital. Como consecuencia, en los países del sur de Europa la recesión económica junto con la consolidación fiscal ha impulsado el crecimiento de la desigualdad de la renta disponible y la reducción de la capacidad adquisitiva de muchos hogares. España es uno de los países de la OCDE en los que la desigualdad de ingresos ha crecido más durante la recesión y se coloca hoy entre los cuatro países con mayor Coeficiente de Gini de la Unión Europea, solo por detrás de Bulgaria, Lituania y Letonia. La etapa de recuperación económica desde 2015 hasta 2020 se ha caracterizado por una moderada reducción de la desigualdad, esencialmente porque el crecimiento de los ingresos de la mitad más pobre de la población se mantuvo por debajo de la media. Eso hizo que, a pesar de la caída del desempleo hasta la llegada de la crisis de la COVID-19, la desigualdad se redujera muy lentamente, lo que explica que España continúe hoy ocupando las primeras posiciones en el ranking de países europeos con mayor desigualdad de ingresos.

1. https://wid.world/document/activity-report-2019-world-inequality-lab/

Mientras que en desigualdad de rentas de mercado España se sitúa en el decimosegundo puesto de los 27 países de la UE, en desigualdad de renta disponible se encuentra en el octavo.

Una porción cada vez más grande de la torta

Según las cifras publicadas en abril de 2019 por el Laboratorio de las Desigualdades Mundiales, tanto en Europa como en Estados Unidos, la participación en la riqueza del 10% más rico de la población aumentó considerablemente en los últimos 37 años. En Europa, Polonia es hoy el país más desigual, con el 38,4% de los ingresos en manos del 10% más rico. Una nimiedad en comparación con Estados Unidos. En los estados de Nevada, Florida, Nueva York, Massachusetts, Connecticut, el 10% más rico obtiene más de la mitad de los ingresos. El estado de Nueva York encabeza este ranking, con el 61,7%. Francia, que figuraba en 1980 como el Estado más desigual de Europa, hoy se sitúa en el quinto lugar, detrás de Polonia, Alemania, Irlanda y el Reino Unido.



Ingresos percibidos por el 10% más rico en Europa y Estados Unidos
Previo impuestos, en %, 1980 y 2017

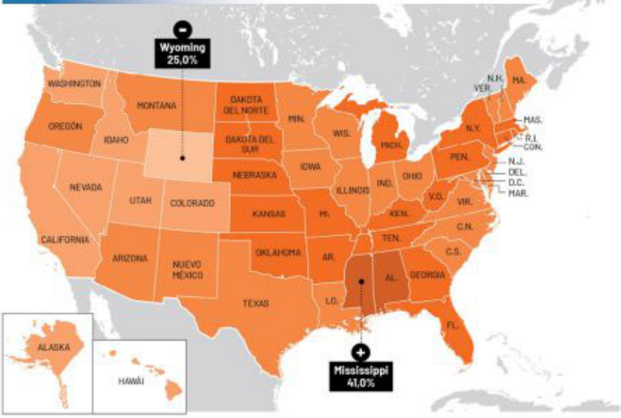
- Más de 50
- De 45,1 a 50
- De 40,1 a 45
- De 35,1 a 40
- De 30,1 a 35
- De 25,1 a 30
- De 20,1 a 25
- Menos de 20

(+) Estados que tienen una desigualdad más pronunciada

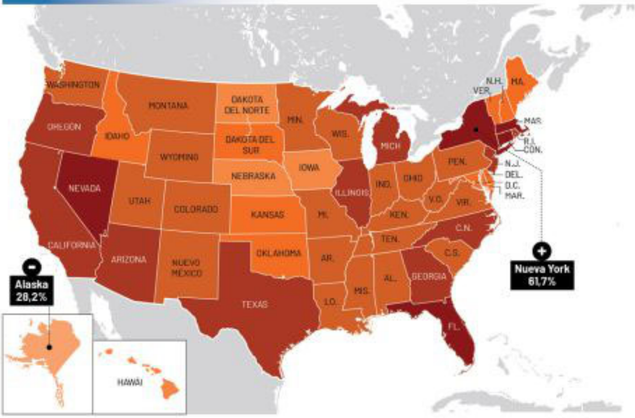
(−) Estados que tienen una desigualdad menos pronunciada

Los puntos negros indican las fronteras de Estados europeos que existían en 1980 y que desaparecieron después (R.D.A., Checoslovaquia, U.R.S.S., Yugoslavia)

1980



2017



Fuente: Thomas Blanchet, Lucas Chancel y Amory Gethin, "How unequal is Europe? Evidence from Distributional National Accounts, 1980-2017", World Inequality Database, abril de 2019. © Courrier International

América Latina

LA TIERRA DE LOS PRIVILEGIADOS

Aunque la tendencia no fue uniforme, en los últimos treinta años la brecha de desigualdades se redujo sustancialmente en América Latina. Pero este patrón presentó claras señales de agotamiento a partir de 2012, con el fin del superciclo de las materias primas y la consecuente caída económica. Un fenómeno que se perpetúa y que sigue instalando a la región como la más desigual del mundo.

Luis Felipe López-Calva y Nora Lustig

Respectivamente, asistente del Secretario General de Naciones Unidas y Director Regional para América Latina y el Caribe en el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y profesora Samuel Z. Stone de Economía Latinoamericana y directora del Instituto Compromiso con la Equidad en Tulane University, Nueva Orleans.

Durante 2002-2013, la desigualdad disminuyó en cada país de la región latinoamericana. En Chile, el Coeficiente de Gini disminuyó de 0,481 en 2006 a 0,465 en 2017, en Colombia de 0,562 en 2001 a 0,496 en 2017 y en Ecuador de 0,532 en 2003 a 0,446 en 2017. Alrededor del año 2000, este indicador era igual a 0,514 en la región, un 12% más alto que el dato más reciente, de 0,455. Una caída de este nivel significa que, por ejemplo, en Brasil –el país más desigual de la región– el ingreso percibido por el 10% más rico pasó de ser cerca de sesenta veces mayor que el del 10% más pobre a menos de cuarenta veces.

¿Qué factores están detrás de la caída de la desigualdad de ingresos? En principio, las tendencias observadas no permiten afirmar que exista una relación entre crecimiento económico y desigualdad porque esta disminuyó tanto en países que experimentaron un rápido crecimiento económico –por ejemplo, Chile, Panamá y Perú– como en aquellos con un desempeño moderado, como Brasil, o un bajo crecimiento, como en el caso de México. La desigualdad cayó tanto en países exportadores de materias primas (por ejemplo, Argentina, Bolivia, Brasil y Chile) como en países importadores (por ejemplo, El Salvador y Guatemala). Asimismo, el Coeficiente de Gini ha estado a la baja tanto en países gobernados por regímenes de izquierda (por ejemplo, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile y Venezuela), como en aquellos gobernados por partidos de centro o de centroderecha (por ejemplo, México y Perú).

> En los países de Sudamérica, con la reducción del crecimiento y el poco margen fiscal, los gobiernos de la región ya no pudieron seguir aumentando los salarios mínimos o las transferencias al ritmo previo.

Los estudios disponibles apuntan a dos potenciales factores responsables de la disminución de la desigualdad: la expansión del acceso a la educación que llevó a una menor desigualdad en los ingresos laborales por hora y un mayor volumen y progresividad de las transferencias públicas. Algunos especialistas concluyen que poco más del 60% de la reducción en el Coeficiente de Gini puede ser atribuido a una caída en la desigualdad del ingreso laboral por hora, 17% correspondería al impacto igualador de las transferencias del gobierno y 15%, al efecto igualador de otros ingresos –que incluye transferencias privadas y, en particular, remesas (1)–.

La reducción en la desigualdad del ingreso laboral ocurrió, en general, en un contexto de crecimiento de los ingresos laborales por hora, pero con un crecimiento mayor en la parte inferior de la distribución. Entre 2002 y 2013, el ingreso laboral del decil más pobre creció, en promedio, un 50% en términos reales, mientras que el aumento promedio fue del 15% para el decil más rico (y 32% para el ingreso de la mediana de la distribución) (2). ¿Qué ocasionó la reducción de la desigualdad en los ingresos laborales por hora? La evidencia disponible sugiere que tanto el aumento como el descenso de la desigualdad del ingreso laboral han estado asociados al incremento o la caída de los retornos de la educación; (o, en otras palabras, al incremento o la caída, respectivamente, de los diferenciales de salarios por hora según el nivel educativo). En particular, en la mayoría de los países donde la desigualdad total descendió durante la década de 2000, los retornos de la educación primaria, secundaria y terciaria, respecto de ninguna escolaridad o escolaridad primaria incompleta, también descendieron.

La reducción de los retornos, a su vez, ha estado asociada al mayor acceso a la educación logrado en años

anteriores, lo que volvió escasos (en términos relativos, claro está) a los trabajadores sin instrucción o con primaria incompleta (3). El mayor acceso a la educación básica y a niveles educativos superiores es resultado de los esfuerzos explícitos de los gobiernos para garantizar una cobertura universal desde las décadas anteriores.

En segundo lugar, las transferencias del gobierno se volvieron más generosas y progresivas durante este periodo. Los programas de transferencias monetarias condicionadas a gran escala, como Bolsa Família (Brasil) y Progresa-Oportunidades-Prospera (México), redujeron la desigualdad en los ingresos per cápita de los hogares (entre el 10% y el 20%). Finalmente, en los países gobernados por regímenes de izquierda (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, El Salvador, Nicaragua, Paraguay, Uruguay y Venezuela), la acción del Estado ha sido evidente a través de políticas activas en el mercado laboral. Los países de izquierda aumentaron los salarios mínimos a un nivel más alto que los otros países en la región, que comprimió la distribución salarial. En gran parte, la acción del Estado fue posible por el aumento de ingresos fiscales asociado al auge del precio de las materias primas.

Mejoras en riesgo

Ratio entre los ingresos del 10% más rico y el 10% más pobre

Las cifras muestran las desigualdades entre las dos franjas extremas de la población.

En el caso de Bolivia, indica que el 10% más rico percibió un ingreso 149 veces superior que el 10% más pobre en 1999.

*Datos correspondientes al año 2000.
Fuente: CEDLAS. © Courrier international

El fin del superciclo

Pero el superciclo de las materias primas terminó alrededor de 2012 y es a partir de entonces que se observó, en un buen número de países, una reducción en el ritmo de caída de la desigualdad (Chile, Perú y Uruguay), una pausa (Argentina), e, incluso, una reversión de la tendencia descendente (Brasil y Paraguay). En los países de Sudamérica, con la reducción del crecimiento y el poco margen fiscal, los gobiernos de la región ya no pudieron seguir aumentando los salarios mínimos o las transferencias al ritmo previo. Además, varias naciones (Chile, Colombia y Ecuador) sufrieron una oleada de protestas durante los últimos meses de 2019, cuyo foco principal fue el rechazo a la desigualdad.

Si la desigualdad de ingresos experimentó una caída inusitada en el periodo reciente, ¿cómo se explica este descontento social? Es posible que el fin del auge de las materias primas en los países de América del Sur, la caída de la tasa de crecimiento del ingreso por habitante y un aumento de la incidencia de la pobreza condujeran directamente al incremento del descontento social. Además, los indicadores utilizados para medir la desigualdad de ingresos probablemente no capturen la relación entre ésta y el nuevo descontento social o no representen otros aspectos de la desigualdad que a la gente le importan. Por ejemplo, el Coeficiente de Gini mide las diferencias relativas en los niveles de ingresos de las personas u hogares, cuando quizá lo que provoca una agudización del descontento social sea el crecimiento de brechas absolutas. Por último, es posible que los datos utilizados para medir la desigualdad sean deficientes para cuantificar, incluso, los niveles de concentración del ingreso. Las encuestas de hogares no siempre captan bien los ingresos de los más ricos. Los hogares tienden a declarar menos ingresos de lo que realmente reciben, sobre todo, los procedentes de las rentas del capital.

La historia reciente de la desigualdad del ingreso en América Latina indica que las políticas públicas pueden modificarla. En particular, la reducción de la desigualdad observada durante la primera década de este siglo se puede vincular principalmente a dos componentes de la política social: el gasto en educación, que resultó en un aumento de la escolaridad de sectores pobres de la población y eventual reducción de la desigualdad del ingreso laboral, y la expansión de las transferencias monetarias focalizadas en la población pobre. A partir de 2012, la reducción de la desigualdad del ingreso no ha sido sostenible en un conjunto de países porque al tener que enfrentar tasas de crecimiento más bajas o incluso negativas, las condiciones en el mercado laboral se volvieron en contra de los sectores pobres al mismo tiempo que las restricciones fiscales impidieron introducir mecanismos de compensación. Sin duda, la pandemia del Covid-19 pone límites adicionales al espacio fiscal para las políticas redistributivas. Sin acciones compensatorias de política pública, las desigualdades se profundizarán.

1. Joao Pedro Azevedo, Gabriela Inchauste y Viviane Sanfelice, "Decomposing the recent inequality decline in Latin America", Banco Mundial, 2013.
2. Carlos Rodríguez-Castelán, Luis Felipe López-Calva, Nora Lustig y Daniel Valderrama, "Understanding the dynamics of labor income inequality in Latin America", Banco Mundial, 2016.
3. Diego Battiston, Carolina García-Domench y Leonardo Gasparini, "Could an increase in education raise income inequality? Evidence for Latin America", *Latin American Journal of Economics*, Vol. 51, N° 1, 2014.

Los países de izquierda aumentaron los salarios mínimos a un nivel más alto que los otros países en la región, que comprimió la distribución salarial.

Costo de vida

EL DESPLOME DE LOS SALARIOS

Como en todo el mundo, los salarios en Argentina se depreciaron sustancialmente con la implantación del orden neoliberal. Aunque mejoraron durante el kirchnerismo, nunca lograron recuperarse y en los últimos años volvieron a caer con fuerza, con el correlato de un acelerado incremento de los índices de pobreza e indigencia.

Nazaret Castro

Periodista y doctora en Ciencias Sociales (Ides/UNGS), cofundadora de Carro de Combate y *Revista Amazonas*. **Autora de** *La dictadura de los supermercados* **(Akal, Madrid, 2017; Buenos Aires, 2019) y coautora junto con Laura Villadiego de** *Carro de Combate*, **Capital Intelectual, Buenos Aires, 2021.**

"Salarios eran los de antes..." Esa expresión tan familiar sirve como título para un artículo de los economistas Juan M. Graña y Damián Kennedy (1), que se preguntaban, hace ya una década, por la relación entre salario, productividad y acumulación de capital en la Argentina del último medio siglo. Aquel trabajo, así como otros posteriores que realizó el Centro de Estudios sobre Población, Empleo y Desarrollo (CEPED-IIE-UBA) al que pertenece Graña, le aportaba datos a una percepción generalizada: los salarios en términos constantes –es decir, corrigiendo la inflación– de los argentinos llegaron a su máximo histórico en 1974; y, aunque ha habido picos de mejora, no se han recuperado después de casi medio siglo (2).

¿Qué fue lo que ocurrió? "Desde 1970 y hasta la crisis de 2001, vemos un proceso de pérdida salarial brutal, hasta llegar a casi la mitad del poder adquisitivo", sintetiza Graña. Es decir: los salarios se desplomaron con la implantación del orden neoliberal, que se introdujo con la dictadura militar, al imponer una nueva ley de regulación financiera que fue clave para la desregulación del movimiento de capitales. La nueva institucionalidad se consolidó y profundizó con el menemismo. En los años 90, se llevó a cabo la privatización de servicios públicos y la liberalización del comercio y las finanzas hasta que el sistema colapsó y, en 2002, los salarios se desplomaron, y no recuperaron el nivel anterior a la crisis de 2001 hasta 2007.

"Las dimensiones clave de esta lógica económica no han sido cuestionadas en sus raíces más profundas, y sólo algunas medidas parciales han conseguido mejoras temporarias en el poder adquisitivo de la población con ingresos fijos y en los niveles de pobreza", apunta Corina Rodríguez, economista y doctora en Ciencias Sociales. Lo cierto es que, si bien los salarios comenzaron a repuntar a partir de 2007, para alcanzar su punto máximo en 2013, en ese momento "apenas se arañó el nivel salarial de 1970", afirma Graña. Y a continuación se produjo el estancamiento, seguido de una nueva caída del poder salarial que, en los últimos tres años, es ya del 20%. "En cuarenta años, la clase obrera argentina no avanzó ni un paso", concluye el economista.

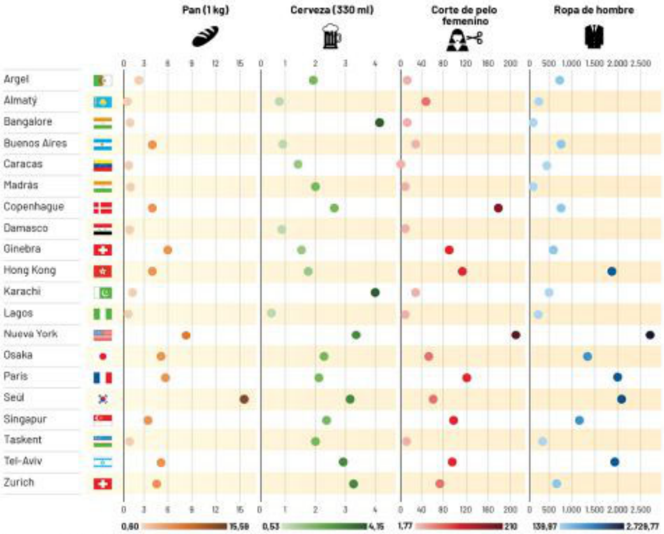
"Desde 1970 y hasta la crisis de 2001, vemos un proceso de pérdida salarial brutal, hasta llegar a casi la mitad del poder adquisitivo."

La pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores es un fenómeno mundial; pero lo característico del caso argentino es que este proceso se combina con una caída generalizada de las condiciones económicas. "En el 70, el país estaba muy por encima de los promedios de América Latina: los 90 nos acercaron a América Latina", explica Graña. Esto se aprecia en el aumento del porcentaje de trabajo no registrado; en particular, se incrementó el número de cuentapropistas en condiciones precarias. El mercado de trabajo se latinoamericanizó.

El correlato de este deterioro del poder adquisitivo y del aumento de la desigualdad es un acelerado incremento de los índices de pobreza e indigencia en el país. El informe *El desafío de la pobreza en Argentina* (3) estima que en los últimos treinta años la tasa de pobreza no ha bajado del 25%. El mismo estudio concluye que, entre las personas en situación de pobreza crónica en el país, casi la mitad tiene

Dime dónde vives y te diré cuánto gastas

Precio promedio de un bien o servicio en distintas ciudades del mundo,en dólares, 2019



Nota: A fines de una mayor claridad, se utilizaron únicamente los datos accesibles de forma gratuita en el informe "The Economist Intelligence Unit". Se desconoce el precio de un traje en Damasco.
Fuente: The Economist Intelligence Unit(eiu.com). © Courrier International

menos de 25 años, el 70% cuenta con un nivel educativo bajo y, aunque la mayoría de los adultos tienen trabajo, éstos son precarios y sin aportes de seguridad social o cobertura de salud.

Según datos de 2019 del INDEC (4), alrededor de 9,9 millones de personas estaban por debajo de la línea de la pobreza en Argentina, y 2,3 millones, por debajo de la línea de indigencia (5). Estudios más recientes del Observatorio Social de la UCA revelan que la pobreza en Argentina alcanza al 45% de la población y alrededor de seis millones de personas pasan hambre en un país tantas veces alabado como "el granero del mundo". Si los años del gobierno de Mauricio Macri aumentaron los índices de pobreza e indigencia –la UCA calcula que durante esos años unas 600.000 personas cayeron en la indigencia–, las cifras empeorarán aun más debido a los efectos económicos de la pandemia del COVID-19 y la parálisis de la actividad económica derivada de una larga cuarentena.

> Son necesarios cambios profundos, que intervengan en esa institucionalidad neoliberal que impide que los salarios recuperen el poder adquisitivo que tuvieron en los 70.

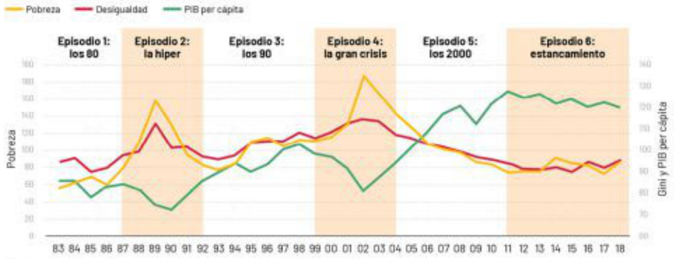
Un problema estructural

Si bien el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) ha permitido paliar el aumento de la indigencia en el país (6), no basta. "Toda política de sostenimiento de los ingresos de la población puede ser positiva sólo si va acompañada de un abordaje de las raíces estructurales de la inflación", sostiene Corina Rodríguez. La economista recuerda que, en Argentina, la pobreza no sólo tiene que ver con la pérdida de poder adquisitivo de los salarios, sino también con la recurrente inflación, que, como promedio, ha sido del 83% anual en el último medio siglo y que alcanzó el año pasado el 53,8%.

"La inflación en Argentina es un proceso complejo y multicausal, que tiene que ver con la dolarización de precios clave, la expectativa inflacionaria que genera la variación del tipo de cambio, la puja distributiva y con

De crisis en crisis

Pobreza, desigualdad y PIB per cápita en Argentina, 1983-2018



Nota: Las series están expresadas como porcentaje del valor promedio del periodo 1983-2018, igual a 100.
Fuente: Informe El desafío de la pobreza en Argentina, CIPPEC/CEDLAS/PNUD.

una economía concentrada con unos pocos actores, muy poderosos, que resuelven la fijación de precios", señala Rodríguez. Políticas como la fijación de precios máximos pueden permitirnos ganar tiempo, pero no resuelven un problema que es estructural (7). Juan M. Graña afirma: "El problema de la inflación es que alguien tiene que pagar el costo; y en Argentina el perdedor es el trabajador que no tiene un sindicato fuerte". Entre las más desprotegidas están, entonces, las personas que trabajan en la economía popular. Rodríguez va más allá: "La pobreza es una consecuencia de la lógica de acumulación capitalista, y en mi opinión, no puede resolverse estructuralmente sin un cambio sistémico".

Ocurre que, como recuerda el sociólogo Alexandre Roig, secretario académico de la UNSAM y autor de *La moneda imposible* (FCE, 2016), "el poder adquisitivo, o poder de compra, es un poder. Tener o no tener dinero da el poder de adquirir o no cierta mercancía; y por tanto, el sistema de precios tiene que ver con el poder". Entonces, prosigue Roig, "la pregunta sería, ¿cómo devolverle poder de compra al trabajador? Hay dos posibles estrategias: por el consumo y por la producción. Yo creo que desde los gobiernos progresistas se ha optado por la vía del consumo; pero no necesariamente favorecer el consumo implica aumentar el poder de la clase trabajadora. Esa intervención sobre el poder de compra hay que articularla con las relaciones de producción; hay que crear las condiciones adecuadas desde las instituciones, y colocar la cuestión como parte del conflicto capital-trabajo".

El neoliberalismo como síntoma

Decía Michel Foucault que en el discurso lo que se dice es tan importante como lo que se oculta. Y, como afirma Roig, "el neoliberalismo es síntoma de una transformación profunda del capitalismo que revela y oculta cuestiones más profundas, que todavía no podemos pensar con claridad". El orden neoliberal se ha descrito a menudo como un gobierno de las finanzas, en que los mercados especulativos crean dinero del propio dinero, relegando al trabajo como base de la acumulación. En realidad, "las finanzas se nutren del trabajo; es decir: los procesos de captación del valor se alzan sobre la base de la desvalorización del trabajo; pero, en el neoliberalismo, el trabajo está cada vez más disimulado como fuente de acumulación", subraya Roig. Y es aquí, cree el sociólogo, cuando la economía popular se yergue como "un lugar privilegiado para ver cómo se invisibilizan algunos trabajos".

En Argentina, la pobreza no sólo tiene que ver con la pérdida de poder adquisitivo de los salarios, sino también con la recurrente inflación.

Esto es lo que ha permitido mapear el Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular (Renatep); en menos de dos meses, se inscribió casi medio millón de personas. Entre ellas, 127.000 asumen en los barrios populares tareas tan vitales como los comedores populares; el 64% son mujeres. Se comprueba una vez más que los trabajos más invisibilizados son los más feminizados y a menudo son, también, los más esenciales.

El Renatep es una iniciativa impulsada por la Unión de Trabajadores de la Economía Popular a fin de reconocer los derechos laborales de cooperativistas, cuentapropistas, vendedores ambulantes y un largo etcétera de personas que, expulsadas del mercado formal, deciden generar sus propios ingresos. Porque, como subraya Roig, en Ar-

gentina estos trabajadores no registrados no se consideran "microemprendedores" como sucede en otros países, sino que se asumen como parte del mundo del trabajo.

Cómo revertir la inequidad

La situación es compleja, pero, ¿cómo impulsar políticas que devuelvan poder de compra a los trabajadores? Graña apunta a una política de ingresos mínimos, que "corra el piso desde abajo, de forma que se garantice que todos cuenten con el ingreso básico para vivir". Cree también que deben adaptarse las instituciones para operar sobre la desigualdad, "y para ello es necesario que aumenten los impuestos que pagan los ricos", y no sólo de forma coyuntural.

Corina Rodríguez añade: "La universalización del empleo formal es una aspiración fantasiosa: el empleo formal tal como se entendió en la segunda mitad del siglo XX es una institución en vías de extinción. Además, el empleo como horizonte emancipador está fuertemente cuestionado en el marco del deterioro estructural de las condiciones de ese empleo". En ese contexto, Rodríguez apuesta por el apoyo estatal a la economía popular, "pero no como un sector económico marginal, sino como la base para la transformación de los modos de producción y distribución", a través de un conjunto articulado de políticas que "inviertan en la infraestructura necesaria, generen mecanismos de remuneración de los trabajos invisibilizados y favorezca la difusión de los principios que sustentan la economía popular, como la organización colectiva y el principio de reciprocidad, al conjunto de la economía".

Son necesarios cambios profundos que, de una vez por todas, intervengan en esa institucionalidad neoliberal que impide que los salarios sean como los de antes. A nadie se le escapa que no será fácil, en un mundo cada vez más plutocrático, en que, según datos de Oxfam, 85 personas poseen la misma riqueza que la mitad de la población mundial (8). Pero tal vez el primer paso consista en perderle el miedo a la conflictividad social y entender que, como sugiere Roig, "es el territorio del conflicto lo que delimita los términos".

1. "'Salarios eran los de antes...' Salario, productividad y acumulación de capital en Argentina en el último medio siglo", en *Realidad Económica*, N° 242, marzo de 2009. Disponible en: http://www.iade.org.ar/articulos/salarios-eran-los-de-antes-salario-productividad-y-acumulacion-de-capital-en-la-argentina

2. Véase Florencia Jaccoud, Agustin Arakaki, Ezequiel Monteforte, Laura Pacifico, Juan M. Graña y Damián Kennedy, "Estructura productiva y reproducción de la fuerza de trabajo. La vigencia de los limitantes estructurales de la economía argentina", en *Cuadernos de Economía Crítica*, N° 2, 2015, pp. 75-112. Disponible en: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5990466 Véase también Agustin Arakaki, Juan M. Graña, Damián Kennedy y Matías A. Sánchez, "El mercado laboral argentino de la posconvertibilidad (2003-2015): entre la crisis neoliberal y los límites estructurales de la economía", en *Semestre Económico*, Universidad de Medellín, 2018. Disponible en: https://revistas.udem.edu.co/

3. Leonardo Gasparini, Leopoldo Tornarolli y Pablo Gluzzman, *El desafío de la pobreza en la Argentina: diagnóstico y perspectivas*, CIPPEC/CEDLAS/PNUD, 2019. Disponible en: https://www.cippec.org/publicacion/el-desafio-de-la-pobreza-en-la-argentina

4. INDEC, *Condiciones de vida. Incidencia de la pobreza y la indigencia en 31 aglomerados urbanos*, Vol. 4, N° 4, segundo semestre de 2019.

5. La línea de indigencia mide si los hogares cuentan con ingresos para cubrir la canasta básica alimentaria; la línea de pobreza establece si los ingresos del hogar permiten satisfacer, además, necesidades no alimentarias como vestimenta, transporte, salud y educación.

6. Según el *Informe de panorama productivo* del CEPXXI, el IFE ha evitado que entre 2,7 y 4,5 millones de personas cayeran en la pobreza y la indigencia.

7. Para Graña, los motivos de la debilidad de la economía argentina y de su moneda son estructurales y tienen que ver con el agotamiento de un modelo de desarrollo basado en la industrialización por sustitución de importaciones (ISI), que no tenía sentido tras el proceso mundial de deslocalización de la producción y de pérdida de peso de las manufacturas en la economía global. Véase Juan M. Graña, "Potencialidades y límites de la Industrialización Sustitutiva Argentina (1935-1975). Análisis desde una perspectiva actual y mundial", en *Ensayos de Economía*, N° 43, julio-diciembre de 2013. Disponible en: https://revistas.unal.edu.co/index.php/ede/article/view/42883

8. Es decir, 85 acumulan tanta riqueza como 3.500 millones de personas. Además, esos super ricos incrementaron su fortuna en medio millón de dólares por minuto en el último año. Véase: https://www.oxfamargentina.org/que-hacemos/reducimos-desigualdad/

Informales y mal pagos

Población argentina en base a rango etario y condición laboral

Fuente: Elaboración DESS a partir de EPH IV, Trimestre 2019, INDEC.

2. RECURSOS

Vidas precarias

La falta de acceso a recursos fundamentales como el agua potable, la alimentación, la vivienda, los sistemas básicos de saneamiento e incluso la conexión digital someten a miles de millones de personas a la marginalidad más extrema. Estas carencias que suelen presentarse desde la infancia se profundizan en la vida adulta haciendo imposible todo intento de ascenso social. Mientras las potencias siguen acaparando tierras de países subdesarrollados a precios irrisorios para posicionarse mejor en el orden hipercapitalista global, más de la mitad de la humanidad que vive con menos de 5,5 dólares al día muestra el agotamiento de un sistema donde la igualdad no es más que una utopía.

Alimentación

EL COSTO DEL HAMBRE

Según la FAO, 821 millones de personas estaban subalimentadas en 2019, 9 millones más que el año anterior. Cifras que manifiestan que hay un persistente flagelo mundial que aún no termina, a pesar del incremento de la producción agroalimentaria, de la globalización de la economía, de los descubrimientos científicos o de las buenas intenciones. Qué hay detrás del hambre...

Patricia Aguirre
Doctora en Antropología por la UBA. Investigadora y Docente del Instituto de Salud Colectiva de la Universidad Nacional de Lanús.

En diciembre de 2019, antes de la pandemia, la Oficina de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), advertía que había 821 millones de personas subalimentadas, 9 millones más que en 2018. Este índice de prevalencia de subalimentación (PoU, por su sigla en inglés) fue elaborado por la FAO en 1974, a partir de la información de los países acerca de la disponibilidad de alimentos y las necesidades calóricas de su población. En tanto muchos Estados no informan, se trata de estimaciones basadas en la economía registrada (que no toman en cuenta la producción campesina, para autoconsumo e informal, ni a la población indocumentada de un país). De modo que permite comparar entre países, pero no localizar poblaciones vulnerables dentro de cada uno.

Hace una década se comenzó a usar otro índice llamado FIES, basado en una escala de experiencia de inseguridad alimentaria, es decir, consiste en preguntarle al hambriento cuánto hambre tiene para, así, localizar y medir a nivel individual y estimar el porcentaje de población que sufre diferentes grados de padecimiento. Según el FIES, la inseguridad alimentaria será *leve* cuando sólo estén preocupados, *moderada* cuando han reducido su comida y no están seguros de poder obtener más y *severa* cuando han pasado días sin comer (situación en la que estaba cerca del 10% de la población mundial a principios de 2020).

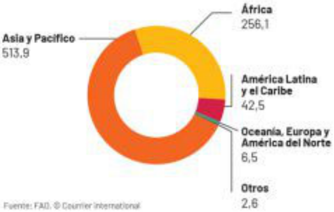
Estas cifras manifiestan que en el mundo hay un persistente padecimiento que no termina a pesar del incremento de la producción agroalimentaria, de la globalización de la economía, de los descubrimientos científicos o de las buenas intenciones. La ONU atribuye este aumento del hambre a la desaceleración del crecimiento económico y a las desigualdades en aumento. En un planeta dominado por la lógica del mercado, la desaceleración del crecimiento se manifiesta en problemas de empleo e ingresos que minan la capacidad de compra y precarizan la ingesta. El aumento de las desigualdades es otro aspecto del sistema económico mundial que opera incluso durante el crecimiento, cuando éste se concentra en pocas manos y no llega a las mayorías.

Un derecho humano fundamental

Durante milenios se trató la problemática del hambre como el resultado de los recursos naturales (es decir, producto de su falta o su estado de crisis). La solución consistía en tener stocks anti-cíclicos para enfrentar las emergencias. A principios del siglo XX, Argentina abra-

¿Dónde está el problema?

Personas que sufren hambre, en millones, por región, 2018



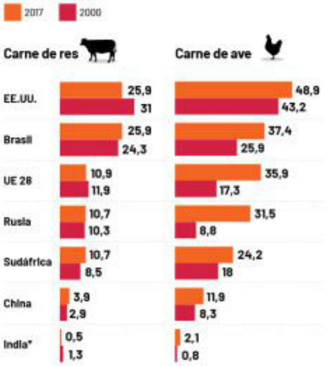
Fuente: FAO. © Courrier International

zaba esta concepción, sintiéndose "el granero del mundo". Esto suponía que en un país fértil la existencia de subalimentación era un problema individual, a lo sumo familiar ya que había alimentos suficientes, incluso para exportar. También suponía que era un problema transitorio, dependiente del individuo y no del sistema social, que se resolvía en el ámbito privado con voluntad, con caridad o con asistencia.

La hambruna provocada por la Segunda Guerra Mundial dejó en claro –y el concepto dominará la política alimentaria mundial hasta la actualidad– que la cuestión alimentaria es un problema humano, de la manera cómo nos relacionamos con la naturaleza y distribuimos los recursos según la estructura de derechos de cada sociedad. En 1948, en su Carta Fundacional, Naciones Unidas reconoce la alimentación como un derecho humano fundamental ya que sobre él se construye la vida, la salud, la libertad. La FAO será la encargada de velar por su cumplimiento; para ello a partir de 1974 recrea el concepto de *Seguridad Alimentaria* –antes ligado a la bromatología– que designa el derecho de todas las personas a una alimentación cultural y nutricionalmente adecuada. Para apoyar a los países miembros en su lucha por hacer efectivo este derecho para toda su población, desarrolla estas mediciones junto a estudios, compromisos, políticas, planes de acción, directrices, asistencia técnica y ayuda humanitaria en la emergencia, entre otras acciones.

¿Quién come carne?

Consumo anual, en kilos por persona, 2000 y 2017



*El 30% de la población india es vegetariana, principalmente por razones religiosas.
Fuente: OCDE. © Courrier International

> Amartya Sen demostró, estudiando hambrunas del siglo XX, que no fueron consecuencia de la falta de alimentos, sino de desigualdades en la distribución.

Los componentes de la seguridad alimentaria (disponibilidad, acceso, estabilidad y utilización biológica) han variado su jerarquía a través del tiempo. La seguridad alimentaria en los años 70 se asociaba a la disponibilidad de alimentos (esta es una ecuación que parte de la producción a la que se le suma el stock del año anterior y los alimentos importados y se le restan la exportación y las pérdidas por semillas, transporte y procesamiento). Por eso los países trataban de extender sus fronteras agrícolas sobre bosques nativos y humedales que consideraban improductivos, aumentar las hectáreas bajo riego construyendo represas, modernizar su producción adoptando la Revolución Verde y favoreciendo los agronegocios. Hoy cuando los efectos de estas políticas se manifiestan como deterioro del medio y de las poblaciones que viven en él, la soberanía alimentaria procura hacer efectivo el derecho a la alimentación recuperando saberes y modelos de producción sostenibles de pueblos originarios y campesinos. Después del Pacto de San Salvador (2011) y la Declaración de Cochabamba (2012), en América el derecho pasará por la seguridad con soberanía.

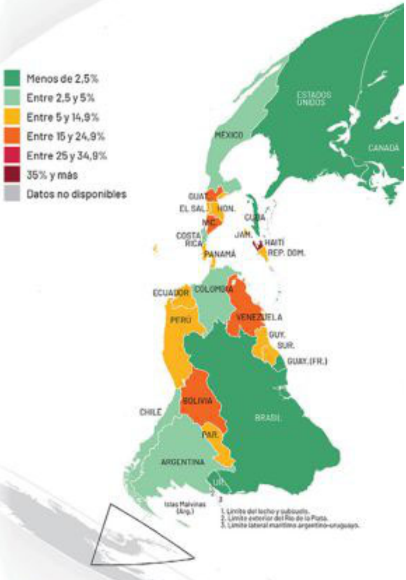
En 1985, al menos estadísticamente, se logró disponibilidad suficiente como para que todos los habitantes del planeta comieran 2.700 kilocalorías al día (que la OMS consideraba adecuado para una vida activa y sana). Pero el mismo año había 890 millones de subalimentados. Y aunque la disponibilidad siguió en aumento (hoy está cerca de las 3.100 kilocalorías por día), la subalimentación no se ha reducido proporcionalmente. Hay alimentos suficientes, ahora excedentarios pero para gran parte de la población no son accesibles. Porque ni el mundo ni los países se comportan como un todo y las desigualdades internas entre naciones y regiones prevalecen sobre los promedios estadísticos. Amartya Sen demostró, estudiando hambrunas del siglo XX, que no fueron consecuencia de la falta de alimentos, sino de desigualdades en los mecanismos de distribución (1). Aunque los alimentos estaban disponibles en India, su país, no fueron accesibles para parte de su población porque la estructura de derechos de su sociedad (por ejemplo a través del ingreso) legitimaba su exclusión. Este pensador influyó tanto en la política alimentaria mundial que la seguridad alimentaria desde entonces valoriza el acceso por sobre los otros componentes.

Una crisis paradojal

Como la alimentación es un fenómeno complejo (esto quiere decir que se comporta como un sistema abierto al medio con componentes múltiples e interrelaciona-

Hambre en el mundo

Prevalencia de la subalimentación en la población total, en porcentaje, 2016-2018



dos, con gran capacidad de transformación, resiliencia y autoorganización) la búsqueda de soluciones simples, únicas –la bala de plata– no ha hecho más que frustrar las buenas intenciones de terminar con el hambre. El sueño de la suficiencia alimentaria se cumplió con creces, somos 7.500 millones de personas en el planeta y se produce para 10.000 millones, pero se malogra el 30% de la producción (por pérdidas debidas al mal procesamiento industrial, destrucción sistemática para mantener precios y negligencia) mientras existen 821 millones de personas subalimentadas. Pareciera una paradoja, y lo es si pensamos en términos lineales producción-población. Asimismo, si pensamos que mejorar la distribución soluciona por sí sola el problema, descubriremos otra paradoja del pensamiento lineal: al mejorar el acceso los pobres padecen otras formas de desnutrición, no ya la desnutrición aguda de los cuerpos piel y huesos, sino un hambre oculta, en cuerpos incluso con sobrepeso pero con serias carencias de nutrientes (anemia por falta de hierro, raquitismo por falta de calcio, etc.). La altura es particularmente sensible a estas formas ocultas del hambre que llamamos malnutrición, porque el crecimiento lineal es muy demandante de calidad antes que de cantidad en la alimentación. Estas formas del hambre se presentan sin estridencias, silenciosamente, en la forma de niños acortados, petisos, que no despliegan su potencial genético de altura porque cuando debían pegar el estirón, tenían comida, pero rica en energía (los alimentos más baratos de la escala de precios: pan, papas, fideos, azúcar, mate) y pobre en los micronutrientes que necesitaban para un crecimiento saludable (lácteos, verduras, frutas, carnes, que son alimentos caros). Y esta hambre de micronutrientes, hambre oculta, se puede dar incluso en personas con sobrepeso, es una forma de malnutrición cruel si las hay, que oculta tras los problemas del exceso (de energía) todos los problemas de la escasez (de nutrientes).

Hay alimentos suficientes, incluso excedentarios, pero para gran parte de la población no son accesibles.

En 2013 cuando había 1.500 millones de personas con sobrepeso (de las cuales se calculaba que el 30% eran obesas) y 810 millones de desnutridos la OMS declara pandemia a la obesidad. Y como en todas las pandemias: los pobres las sufren más. Desde la década de los 90 se observa que la obesidad, antes una enfermedad de la abundancia, empezaba a desplazarse hacia poblaciones bajo la línea de pobreza. No hacía otra cosa que seguir el clivaje de los determinantes sociales de la alimentación: mayor prevalencia en los más vulnerables (los pobres, las mujeres, los niños, los ancianos). Cuando se analicen con criterio alimentario los datos del COVID-19 obtendremos el mismo mapa, porque todo el sistema inmunológico está compuesto de proteínas. Los determinantes sociales de la alimentación explican mucho más que las enfermedades de base nutricional.

Estos son solo los efectos marcados en los cuerpos de la crisis de la alimentación actual. Una crisis paradojal (hay alimentos), estructural (toca todas las áreas: producción, distribución y consumo) y terminal (el cambio climático muestra que se ha sobrepasado la capacidad autodepuradora del ecosistema). Es la crisis del derecho a la alimentación adecuada, no porque falten alimentos

Fuente: Programa Mundial de Alimentos, 2019.

sino por la forma que elegimos como sociedad de producirlos, distribuirlos y consumirlos.

La distribución inequitativa que en un mundo de economía globalizada se realiza a través de mecanismos de mercado, hace que los alimentos vayan a donde pueden pagarlos no a donde los necesitan. Entonces, la alimentación adecuada dependerá de la capacidad de compra. Los pobres, ya sean pueblos originarios o campesinos en el ámbito rural o trabajadores informales y desocupados en el ámbito urbano o migrantes donde quiera que vayan, muestran que a menores ingresos mayor vulnerabilidad. Aunque políticas asistenciales tratende compensar con nutrientes la falta de autonomía. Parafraseando a Amartya Sen: si queremos terminar con el padecimiento alimentario, luchemos por eliminar las desigualdades que la comida se cuida sola.

1. Amartya Sen, *Poverty and Famines: An Essay on Entitlements and Deprivation*, Claredon Press, Oxford, 1981.

Infancia

MARCADOS DESDE EL ORIGEN

La mala distribución de oportunidades hace que muchos niños y niñas ya estén desde la infancia condenados a la pobreza y a un sistema que los excluye, con menos posibilidades de revertir luego en su vida adulta. La situación latinoamericana expresa claramente este punto de partida desigual. Una trampa intergeneracional que veda toda alternativa de un futuro mejor.

Roxana Mazzola
Docente de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y Coordinadora Académica del Diploma Superior de Desigualdades y Políticas Públicas Distributivas de FLACSO Argentina.

Agustina y Thiago son dos hermanos que viven en Ingeniero Juárez, localidad ubicada en la norteña provincia argentina de Formosa. Según las estimaciones oficiales, se trata del municipio más pobre del país. Ellos no eligieron su lugar de nacimiento y crianza, pero es muy probable que dicha procedencia determine sus oportunidades. Allí donde la presencia del Estado es más difusa, y su inacción reproduce y plasma inequidades múltiples, el desarrollo personal y colectivo se encuentra desde la infancia más condicionado. A edad temprana esas restricciones son críticas porque influyen decididamente en el desarrollo de la vida, y constituyen una "marca de origen" que explica luego trayectorias disímiles.

La transmisión de la pobreza

La situación de las infancias en América Latina tiende a estudiarse desde la condición de pobreza monetaria que tienen los hogares, y es a partir de esas mediciones que se deciden e impulsan las intervenciones. El impacto que genera saber que en muchos países casi la mitad de los niños y niñas son pobres actúa como catalizador de acusaciones cruzadas entre fuerzas políticas, acaso pensando que "una" sola política pública puede llegar a mejorarles sustancialmente su condición, pero desconociendo las nuevas brechas inherentes al propio modelo de acumulación, y sobre las cuales se actúa menos (o directamente no se actúa).

Las hambrunas son un problema de distribución, como señala Amartya Sen (1). En este sentido, hoy existe cierto consenso generalizado entre expertos sociales y organismos de Naciones Unidas en considerar que la pobreza es una faceta de la desigualdad y enfrentarla requiere abordar esta problemática en todas sus dimensiones. Este punto de partida diferencial en el diagnóstico también hace alusión implícitamente a la necesidad de un rol más presente del Estado en el mercado, con una agenda que priorice la atención de quienes padecen más esas inequidades, como las infancias y las mujeres.

Por ejemplo, hoy la Organización Mundial de la Salud (OMS) está hablando de un fenómeno reciente para la región, conocido como "hambre oculta", que ya no tiene que ver con la carencia de alimentación sino con el tipo de nutrientes que se ingieren, y que a la vez también es manifestación de otros procesos de desigualdad asociados. Si bien todavía existen mayores proporciones de desnutrición crónica infantil en la población indígena, con Ecuador y Guatemala como ejemplos más críticos, la pandemia global es la

Según UNICEF, en 2019 más de 340 millones de niños sufrían carencias de micronutrientes esenciales (vitaminas y minerales).

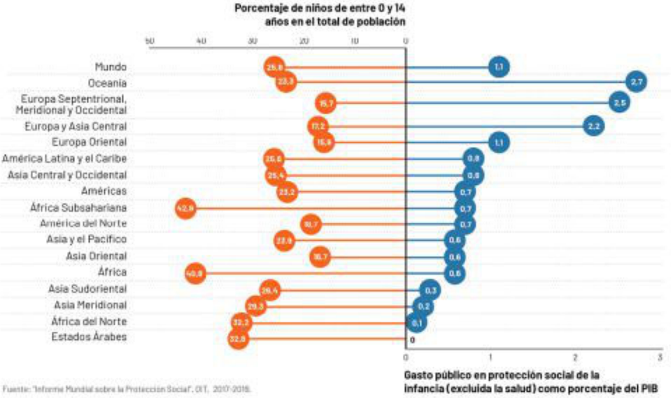
Retraso en el crecimiento en el mundo

Niños menores de 5 años con retraso en el crecimiento, por región, en porcentaje, 2018

Informe "Estado Mundial de la infancia", UNICEF, 2019.

¿Los niños y las niñas primero?

Porcentaje de niños de entre 0 y 14 años de edad en el total de población y gasto público en protección social de la infancia (excluida la salud) como porcentaje del PIB



Fuente: "Informe Mundial sobre la Protección Social", OIT, 2017-2019.

obesidad. Esta nueva cara de la desigualdad está expresando problemas en los mecanismos de distribución, que exigen el accionar de los Estados.

En las últimas décadas las familias se transformaron. La composición de los hogares expresa estos cambios demográficos y las desigualdades presentes. Los efectos de estas transformaciones sobre la trampa intergeneracional de la pobreza, es decir, sobre la transmisión de las desventajas de la pobreza de padres a hijos, por ende de generación en generación, así como en la exclusión y cohesión social, son de enorme magnitud. Adicionalmente, la desigualdad en la distribución del ingreso es central: en América Latina, el 20% de las familias se apropia del 53,2% del ingreso, mientras que el 20% de las familias más vulnerables recibe apenas el 4,4%.

Un cambio distributivo necesario

Morigerar las desigualdades presentes en las infancias implica, por lo tanto, actuar sobre las familias: las brechas estructurales que las aquejan no podrán revertirse si sólo se busca "una" política destinada a la niñez. Si no se garantizan un conjunto de políticas que resuelvan desigualdades de fondo y que actúen fundamentalmente sobre su entorno, sólo se lograrán mejoras parciales e insuficientes para operar en sentido favorable a largo plazo.

Bajo este entorno de desigualdad, la acumulación de capital físico, humano y social de la niñez en el seno de las familias más pobres se encuentra disminuida, incidiendo en su condición presente y futura. El nivel educativo de los padres, el acceso a viviendas y saneamiento adecuados, el nivel de ingreso de los hogares, que está fuertemente determinado por el desempleo del jefa/e de hogar, el tipo de inserción laboral y el grado de participación de los miembros de la familia en el mercado de trabajo condicionan el desarrollo de la infancia e inciden en su bienestar social.

Priorizar a la infancia requiere de un cambio distributivo institucional. Las desigualdades en la niñez son también reflejo de un sistema institucional injusto. Mientras en América Latina tan sólo 32,2% de las madres con hijos recién nacidos reciben prestaciones y el 62,8% de los niños percibe algún tipo de cobertura, en Europa y Asia Central estos niveles ascienden al 85,8% y 93,2%, respectivamente (2).

Las infancias se encuentran invisibilizadas en la discusión de la distribución. Debemos empezar por priorizarlas en el presupuesto y en los mecanismos de toma de decisiones de las políticas públicas. En el acceso al agua y saneamiento, a la infraestructura de cuidados y a la seguridad social a las infancias, adolescencias, juventudes y géneros se dirimen oportunidades centrales para incidir en las desigualdades presentes.

1. Amartya Sen, *Poverty and Famines: An Essay on Entitlements and Deprivation*, Oxford, Clarendon Press, 1982.

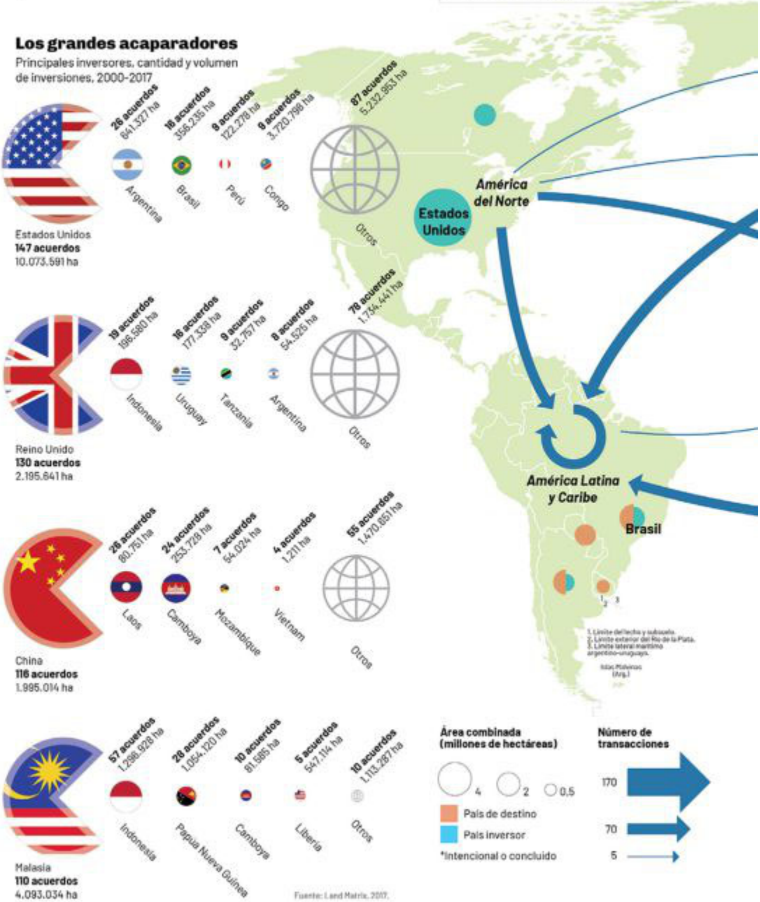
2. Según estimaciones de la OIT, 2017.

> Mientras en América Latina tan sólo 32,2% de las madres con hijos recién nacidos reciben prestaciones y el 62,8% de los niños percibe algún tipo de cobertura, en Europa y Asia Central estos niveles ascienden al 85,8% y al 93,2%, respectivamente.

Tierras acaparadas

Inversiones internacionales en tierra agrícola y en tierras cultivables, 2000-2015

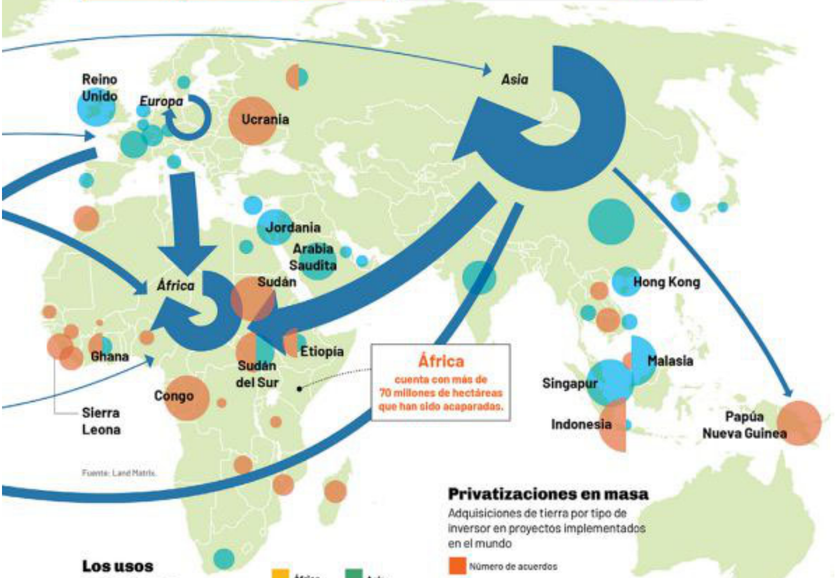
El acaparamiento de tierras es la adquisición de grandes áreas de tierra agrícola (más de mil hectáreas) con fines de especulación, extracción, control de recursos o mercantilización.



Fuente: Land Matrix, 2017.

Más de 1.400 millones
de personas en el mundo dependen directamente de la tierra como recurso de comida, refugio e ingreso.

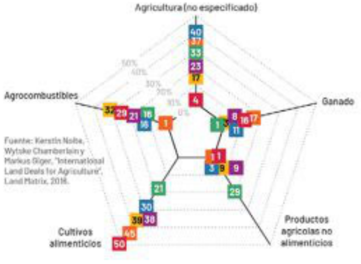
370 millones de indígenas
constituyen el 15% de las personas más pobres del mundo y hasta un tercio de la población mundial que vive en extrema pobreza en áreas rurales, según la ONU.



Fuente: Land Matrix.

Los usos de la tierra

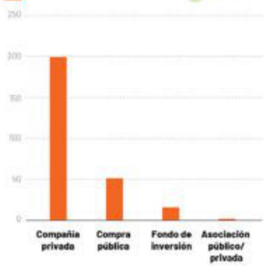
Intenciones agrícolas sobre la tierra adquirida, en porcentaje



Fuente: Kerstin Nolte, Wytske Chamberlain y Markus Giger, "International Land Deals for Agriculture", Land Matrix, 2016.

Privatizaciones en masa

Adquisiciones de tierra por tipo de inversor en proyectos implementados en el mundo



Fuente: Ward Anseeuw, Mathieu Boche, Thomas Breu, Markus Giger, Jann Lay, Peter Messerli y Kerstin Nolte, "Transnational Land Deals for Agriculture in the Global South", Land Matrix, 2012.

Déficit habitacional

¿FALTA DE VIVIENDA O FALTA DE ESTADO?

El mercado inmobiliario en América Latina evidencia que el acceso a la propiedad privada de la vivienda es imposible para amplios sectores de la población. Una alternativa superadora para enfrentar el problema habitacional será el compromiso del Estado en la concreción de un sistema institucionalizado de vivienda social donde el usuario se integra a una trama social solidaria.

Denis Merklen

Sociólogo y profesor en la Sorbona, París. Es autor de *Detrás de la línea de la pobreza. La vida en los barrios pobres de Montevideo* (en coautoría con Verónica Filardo, Editoriales Gorla y Pomaire, Buenos Aires y Montevideo, 2019).

El problema habitacional en América Latina se presenta en todos los países de la región aunque con diversos grados. Según las estimaciones de los propios Estados, en 2010 faltaban en Argentina 1,2 millones de viviendas, en Brasil casi 7 millones, en México 9,6 millones, en Perú 1,8 millones y en Colombia 1,3 millones. Ese mismo año, 13 millones de viviendas eran inadecuadas en Brasil y 21 millones en México. Allí donde la sociedad es más desigual, el problema de la vivienda resulta más crítico.

Sin embargo, este panorama esconde un hecho más relevante y común al conjunto de los países, lo que vuelve casi paradójico que se encuentre siempre ausente de los estudios, oficiales o no, sobre el problema habitacional. Hace tiempo ya que los Estados aceptaron que el salario no permite acceder a la vivienda en condiciones de libre mercado, salvo para la franja superior del asalariado. La dificultad se agrava para las capas de la población sometidas a la inseguridad del empleo y del ingreso, a la precariedad laboral, al trabajo ilegal, a la explotación y a la pobreza.

Un lugar en el mundo

Una batería de políticas públicas ha sido instrumentada con diferentes ritmos e intensidades para responder al problema habitacional, reconocido desde entonces como una de las grandes deudas sociales de todo Estado democrático. El capital inmobiliario no invierte en un mercado que no es tal, en vivienda para aquellos que no pueden pagarla. La respuesta pública se ha dirigido a esa única cuestión, reduciendo la política social de vivienda al "acceso" a la propiedad de la misma. Aliento financiero a la industria de la construcción y crédito barato para la compra de la "casa propia" es lo que se hace y se ha hecho, agregando a veces algún que otro acompañamiento como el asesoramiento técnico, la disposición de tierras y la dotación de servicios. Se trata siempre de lograr que el pobre pueda acceder a la propiedad y corregir los déficits del mercado.

Pero esa vía de acción esconde el hecho de que la vivienda es y puede ser mucho más que un bien; o para decirlo con mayor precisión, el horizonte de la propiedad individual de la vivienda impide brindar otro estatus social a la vivienda, tanto desde el punto de vista de quien la habita como desde el punto de vista de la sociedad.

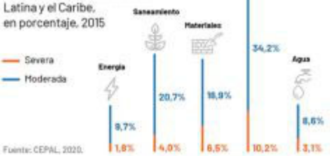
Podemos pensar que la casa no es un bien sino una trama de relaciones sociales. En su definición de "vivienda adecuada" Naciones Unidas exige que las cuatro paredes y un techo estén dotados de agua potable, de disposición de las aguas servidas y de electricidad. Cada uno de esos tres servicios esenciales supone una cadena de provisión bajo la forma de un flujo constante que requiere la instituciona-

+ del 60%

de niñas, niños y adolescentes de áreas urbanas viven en condiciones de hacinamiento en Guatemala, Honduras y Haití, según la Cepal.

Hacinados en la miseria

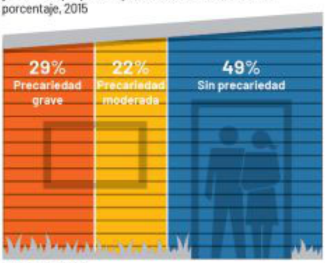
Factores de la precariedad habitacional que sufre la población urbana menor a 17 años de edad en América Latina y el Caribe, en porcentaje, 2015



Fuente: CEPAL, 2020.

Condenados desde la infancia

Población urbana de menos de 17 años en América Latina y el Caribe que padece precariedad habitacional, en porcentaje, 2015



Fuente: CEPAL, 2020.

lización del trabajo necesario para su provisión. Se ve allí la trama de relaciones sociales en la que ineluctablemente está inscripto el refugio del hogar. Y lo mismo puede pensarse para el transporte y la recolección de residuos, por mencionar sólo algunas de las otras dimensiones esenciales que no han sido tenidas en cuenta por Naciones Unidas.

La vivienda es también una posición en el mundo, un lugar en el que fundar la vida en relación con los otros grupos sociales. La noción de barrio ayuda a pensar esta otra trama de relaciones sociales que hacen al hogar. Y el edificio en sí, las cuatro paredes y el techo, también constituyen una trama de relaciones sociales, porque los bienes se degradan más rápido de lo que quisiéramos y es necesario movilizar el trabajo de albañiles, plomeros, electricistas y otros profesionales, técnicos y obreros. Ellos también conforman un conjunto de relaciones que mantiene los muros de pie y el techo sin goteras. Entonces, tratar a la vivienda como un bien, es considerarla desde el punto de vista de quienes pueden movilizar a diario cantidades suficientes de dinero para reproducir esa compleja trama de relaciones sociales.

Reducir nuestra responsabilidad social a la cuestión del "acceso" a la vivienda es ignorar ese entramado de relaciones que deberíamos tener presente cuando decimos "casa". Es por ello que la vivienda es a la vez un refugio y un lugar en el mundo, porque es uno de los principales vectores de la integración social –o al contrario, de la desafiliación–. Una vivienda degradada es simplemente la manifestación primera de un déficit de integración.

Los sistemas de vivienda social institucionalizada, como los que observamos en los países del norte de Europa Occidental, pueden darnos una pista. En Francia, por ejemplo, casi el 20% de la población vive en viviendas que pertenecen a instituciones públicas, las famosas *Habitations à loyer modéré*. En su gestión toman parte los habitantes, el municipio, capitales privados, instancias ministeriales. El usuario de la vivienda (casa o apartamento) tiene un derecho al uso determinado por criterios sociales (de ingreso y de composición del hogar), derecho que es "heredable", transmisible, por una generación. El usuario paga un alquiler que representa alrededor de un tercio del precio de mercado –con variaciones según el tipo de vivienda y la situación del hogar–. Esta vía para encarar el problema saca a la vivienda e, *in fine*, a la ciudad, de la condición de un bien de mercado y ubica el problema habitacional en el plano del derecho y de las instituciones. La vivienda pasa así a integrar el tejido de dispositivos del Estado Social.

Poner a la vivienda en el seno del espacio institucional cambia el estatus de la misma y cambia el lugar de los usuarios en el espacio social. Ya no deben obtener dinero para acceder o mantener en buen estado un bien. Se trata ahora de lidiar con las instituciones para que garanticen la continuidad del derecho. Tanto el espacio social como el espacio político se ven así profundamente reconfigurados por la sola existencia de un sistema social de vivienda.

Punto ciego

La uniformidad de la vía latinoamericana llama la atención porque excluye toda posibilidad de solución institucional. La propiedad privada de la vivienda individual se ha convertido en uno de los puntos ciegos que obturan el horizonte de las sociedades latinoamericanas. Existen pocos contraejemplos. Uno de ellos, en Uruguay, es el de la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua (FUCVAM) donde cerca de 20.000 hogares viven en viviendas que ayudaron a construir y que son propiedad de la cooperativa que integran. Un sistema creado hace cincuenta años por el sindicato de obreros de la construcción y cuya federación forma parte de la central obrera, el PIT-CNT. Con apoyo financiero y técnico del Estado, las cooperativas construyen un barrio en donde se alojan las familias en calidad de "usuarias" sin nunca adquirir la propiedad de la vivienda. Y veinte mil no es un número pequeño para un país de tres millones de habitantes.

En realidad, la región latinoamericana dispone de un importante precedente histórico en la vía social al problema habitacional. Desde principios del siglo XX, parte de lo que conforma la vivienda, a través de los servicios urbanos (agua, energía, recolección de residuos, transporte, salud, educación) fue integrado con bastante éxito al sistema de instituciones públicas, la mayor parte de las veces por medio de monopolios estatales. Una integración a la que le faltó siempre mucho para convertirse en universal, incluso en los países donde el proyecto fue más integrador como en Argentina y en Uruguay. Así funcionaron las cosas hasta que a principios de los noventa el neoliberalismo volvió a cerrar esa hendija dejándoles a las multinacionales de servicios ese espacio de la vida social como fuente de negocios. En los últimos años se reintegraron al Estado Social algunos de esos servicios privatizados. Sin embargo, los quince años de gobiernos progresistas o de izquierda con los que se inauguró el siglo XXI no alcanzaron a imaginar ningún sistema institucionalizado de vivienda social.

Hace tiempo ya que los Estados aceptaron que el salario no permite acceder a la vivienda en condiciones de libre mercado, salvo para la franja superior del asalariado.

Acceso al agua

POBRES Y SEDIENTOS

Cada vez más escasa, el agua es también más cara en los países que están mal equipados en redes de agua potable. Los sectores más pobres nuevamente son los más vulnerables ya que pagan este recurso vital entre diez a veinte veces más que los sectores más ricos. Una desigualdad que se reproduce por el uso inadecuado de las dotaciones de agua en los países menos desarrollados.

De la Redacción de *Courrier international*, París.
Traducción: María Julia Zaparart

Actualmente, 2.100 millones de personas en el planeta carecen de acceso al agua potable limpia y disponible de manera permanente, y 4.000 millones de personas –cerca de dos tercios de la población mundial– se vieron confrontadas a graves penurias de agua durante al menos un mes en el transcurso del año 2018, según lo revelado en un informe de la Unesco del 19 de marzo de 2019.

Además de estas cifras alarmantes, lo que el informe titulado "No dejar a nadie atrás" destaca particularmente son las desigualdades de acceso a este recurso vital. "La mitad de las personas que consumen agua proveniente de fuentes no seguras viven en África: sólo el 24% de la población de África Subsahariana tiene acceso al agua potable segura y el 28% posee instalaciones sanitarias básicas que no se comparten con otros hogares", subraya el sitio News Ghana.

Según Richard Connor, redactor en Jefe del Informe de la Unesco, consultado por la Fundación Thomson Reuters, los ciudadanos cuya vivienda está equipada con agua corriente pagan su agua a un valor mucho más bajo que los habitantes de los barrios pobres. Estos últimos suelen tener que comprarla en bidones o en botellas, a un precio entre 10 y 20 veces más elevado. "Algunos piensan que, si estas personas no tienen agua, es porque no tienen los medios, pero es completamente falso. Gastan hasta el 30% de su salario en agua", insiste Connor.

Por otra parte, la organización WaterAid publicó un informe titulado "Bajo la superficie: el estado del agua en el mundo 2019". El documento muestra que India es el país que utiliza la mayor cantidad de agua subterrá-

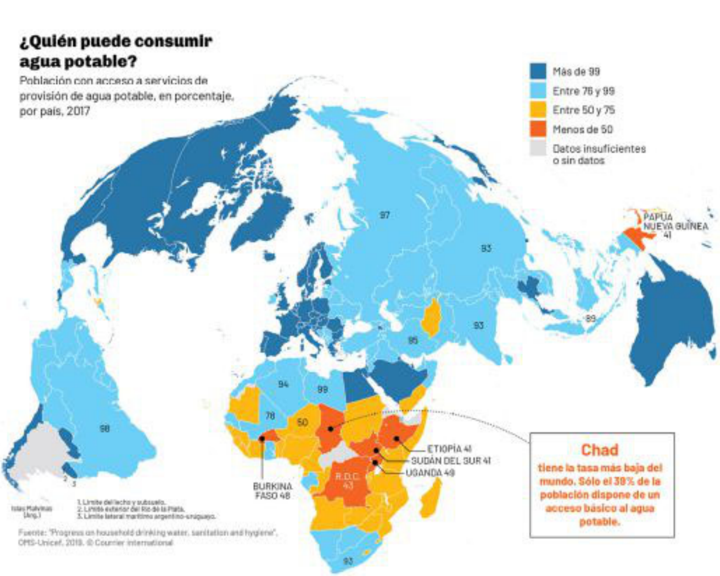
Un bien indispensable

Cantidad de personas que acceden a distintos servicios de provisión de agua en el mundo, en porcentaje, 2000-2017

Fuente: "Progress on household drinking water, sanitation and hygiene", OMS-UNICEF, 2019. © Courrier international

¿Quién puede consumir agua potable?

Población con acceso a servicios de provisión de agua potable, en porcentaje, por país, 2017



Fuente: "Progress on household drinking water, sanitation and hygiene", OMS-Unicef, 2019. © Courrier international

nea (24% del total mundial) y es el tercer exportador (12% del total mundial). "La importación de productos alimentarios y de indumentaria por los ciudadanos ricos de países occidentales hace que numerosas comunidades pobres y marginalizadas tengan dificultades para acceder al agua limpia todos los días. Estos productos que poseen una 'huella hídrica' –el volumen de agua utilizado para su producción– considerable provienen, en efecto, de regiones donde el agua es escasa", agrega el sitio indio Punjab News Express.

En los barrios pobres, algunas personas gastan hasta el 30% de sus salarios en la compra de agua.

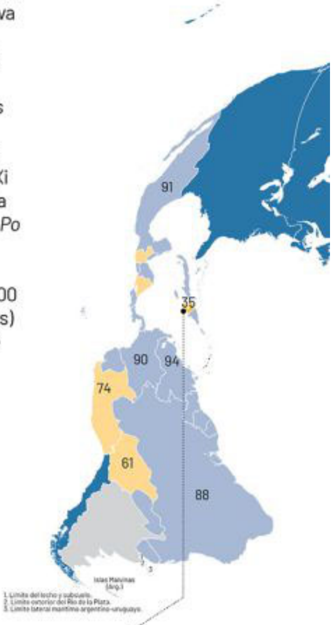
Otro factor de escasez es la agricultura. En un informe publicado el 4 de febrero de 2019, el Banco Mundial advertía sobre las dificultades que enfrentaban los paquistaníes para abastecerse de agua. La culpa es de India que bombea –legalmente– el agua de los afluentes del Indo; pero también, de la agricultura. De este modo *The Express Tribune* insiste sobre un punto del informe que lastima: Islamabad "no saca el mejor partido de sus dotaciones de agua", los volúmenes más grandes son consumidos por la agricultura. Así, los cuatro cultivos principales –el trigo, el arroz, la caña de azúcar y el algodón– absorben por sí solos el "80% del agua utilizada en el país", mientras que sólo contribuyen "en un 5% al PIB nacional", subraya el periódico *Karachí*.

Un futuro poco promisorio

Según el Banco Mundial, Pakistán se expone a otro riesgo "externo" a largo plazo, el del cambio climático. Este último "aumentaría la demanda de agua del 5 al 15% desde la fecha actual al 2047", además de la creciente necesidad debida al desarrollo económico y al aumento de la población que, aunque en la actualidad disminuye, debería elevar el número de paquistaníes "a más de 300 millones" para ese horizonte. El Banco Mundial recomienda al país que siga equipándose en infraestructuras, aunque las represas no sean la solución para todo y los recursos financieros sigan sin aparecer. ▢

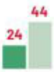
Inodoros, un bien de lujo

Incluso en el siglo XXI, cuatro siglos después de su invención en Gran Bretaña, 2.300 millones de personas carecen de inodoros, según la Organización Mundial de la Salud. Y a 890 millones no les queda otra alternativa que defecar a campo abierto. Como consecuencia, anualmente se producen 500.000 muertes de niños menores de 5 años por diarrea,
cólera y otras enfermedades transmitidas por aguas contaminadas. No obstante, la situación mejoró, particularmente en los dos países más poblados del mundo: India y China. En este último, el presidente Xi Jiping lanzó en 2015 una campaña nacional conocida como la "Revolución del inodoro", recordaba el *Shun Po* (*Hong Kong Economic Journal*) en ocasión del Día Mundial del Retrete, el 19 de noviembre de 2019.
En dos años el gobierno chino invirtió cerca de 20.000 millones de yuanes (es decir, 2.500 millones de euros) para mejorar 68.000 baños públicos, especialmente en las zonas rurales.



Población que cuenta con sistemas de saneamiento, incluidos los rudimentarios
En porcentaje, 2017

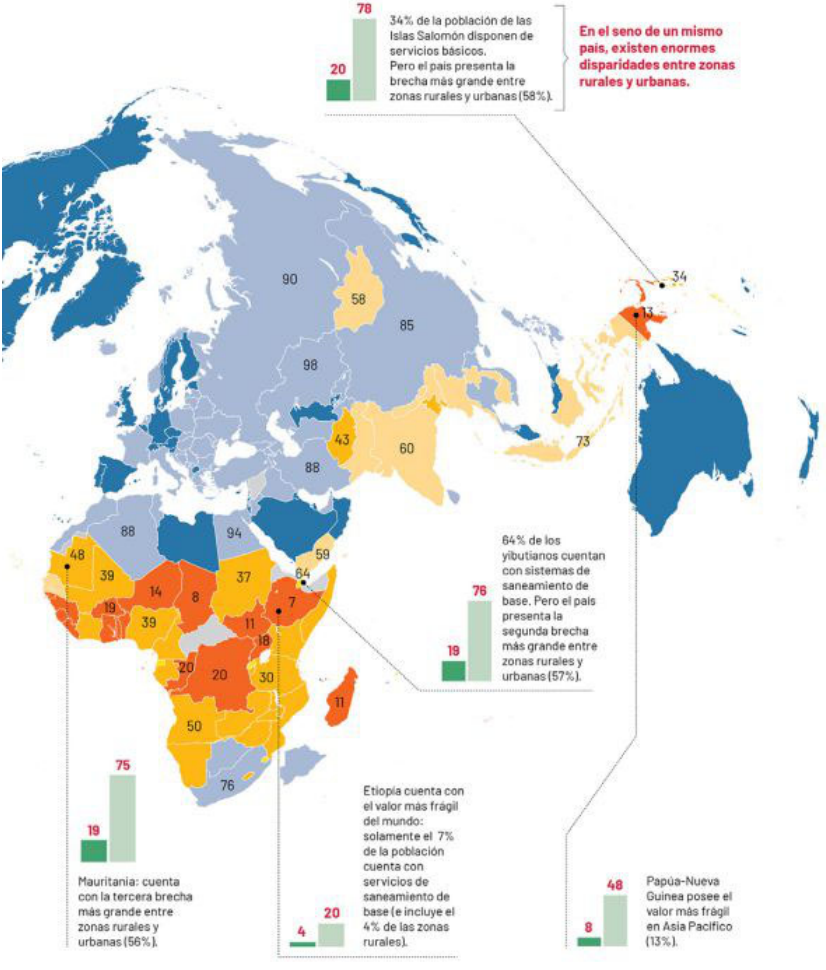
- Más de 99
- De 76 a 99
- De 51 a 75
- De 25 a 50
- Menos de 25
- Datos insuficientes o sin datos



El valor más frágil del continente americano: Haití (35%).

Según la OMS, en 2017 45% de la población mundial contaba con un sistema de saneamiento, incluidos los rudimentarios.

Fuente: "Progress on household drinking water, sanitation and hygiene", OMS-Unicef, 2019. © Courrier International


78
20
34% de la población de las Islas Salomón disponen de servicios básicos.
Pero el país presenta la brecha más grande entre zonas rurales y urbanas (58%).
En el seno de un mismo país, existen enormes disparidades entre zonas rurales y urbanas.
90
58
85
98
43
60
88
73
34
13
88
94
48
39
14
8
37
59
64
7
19
39
11
18
20
20
30
11
50
76
64% de los yibutianos cuentan con sistemas de saneamiento de base. Pero el país presenta la segunda brecha más grande entre zonas rurales y urbanas (57%).
76
19
75
19
Mauritania: cuenta con la tercera brecha más grande entre zonas rurales y urbanas (56%).
Etiopía cuenta con el valor más frágil del mundo: solamente el 7% de la población cuenta con servicios de saneamiento de base (e incluye el 4% de las zonas rurales).
4
20
Papúa-Nueva Guinea posee el valor más frágil en Asia Pacífico (13%).
8
48

El oligopolio digital

EL FIN DE LA UTOPÍA IGUALITARIA

Cuando la red se desmilitarizó, privatizándose y transformándose en lo que hoy conocemos como "Internet", siguió rigiendo la distribución descentralizada de la información como uno de los principios básicos del sistema. Pero hoy resulta evidente que las concentraciones de poder que supuestamente enfrentaría Internet, no sólo no han desaparecido, sino que en muchos casos se han agravado.

Enric Puig Punyet

Escritor y filósofo. Profesor de la Universitat Oberta de Catalunya y director de la fábrica de creación artística La Escocesa (Barcelona). Autor, entre otros libros, de *La gran adicción. Cómo sobrevivir sin internet y no aislarse del mundo* **(Arpa, Barcelona, 2016) y** *El Dorado. Una historia crítica de Internet* **(Clave intelectual, Madrid, 2017).**

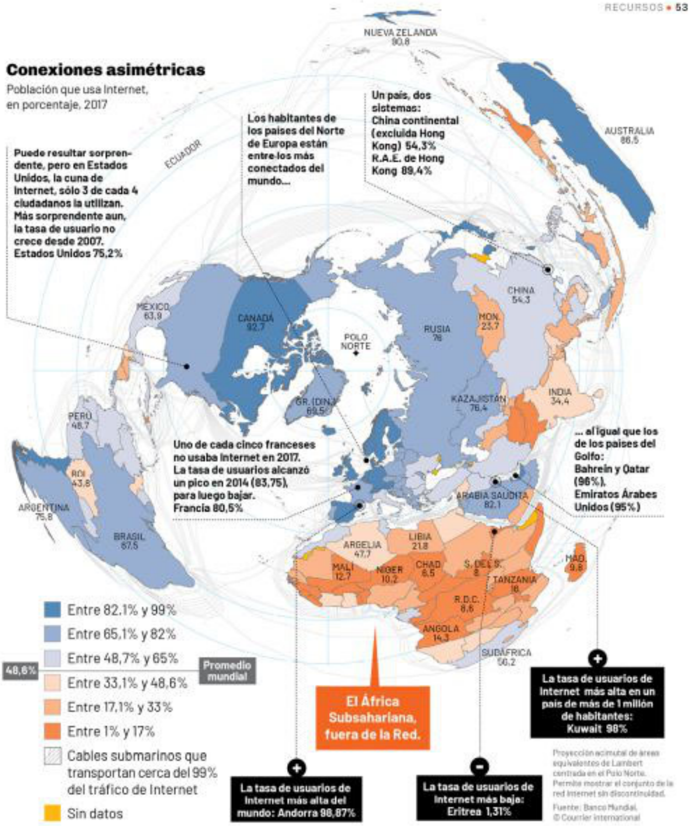
Internet es una red técnica basada en la simultaneidad de acceso y en la desjerarquización de sus nodos. Fue desde sus orígenes un sistema pensado para la descentralización de la información. En su prehistoria como Arpanet, durante la Guerra Fría, el constante temor de Washington a un ataque nuclear hizo de esta dispersión de la información una estrategia deseable. Cuando este dispositivo se desmilitarizó, privatizándose y transformándose finalmente en lo que hoy conocemos como "Internet", es decir, la estandarización de protocolos dentro de una red de alcance global (www), siguió rigiendo la distribución descentralizada como uno de sus principios básicos, como el estandarte de ese nuevo sistema que se coronaba como antídoto contra las concentraciones de poder imperantes en todos los sectores del antiguo régimen fordista. Partiendo de esa premisa, Internet se expandió a una velocidad vertiginosa en gran parte por el fuerte calado que tuvo el discurso solucionista que le siguió, materializado en sentencias y promesas grandilocuentes: "Por cada persona que tiene acceso a Internet se crea un nuevo puesto de trabajo y una persona sale de la pobreza. Por lo tanto, llevar y conectar a todo el mundo a Internet es una gran prioridad nacional, e incluso global" (Mark Zuckerberg); "En el futuro, la web lo será todo. Será como la electricidad. Si alcanzamos esto, podremos arreglar todos los problemas del mundo" (Eric Schmidt).

> Los principales agentes (autodenominados redistribuidores) del oligopolio de Internet se han posicionado en muy pocos años como las personas (exclusivamente masculinas) más ricas del mundo.

Sin embargo, pasados los primeros años de ciberoptimismo, hoy se ha tornado evidente que las concentraciones de poder del antiguo régimen a las que el sistema Internet quería hacer frente –primero ingenua, luego interesadamente– no solo no han desaparecido, sino que en muchos casos se han agravado dentro del nuevo régimen, reproduciendo y amplificando las brechas de clase, género y territorio del anterior: los principales agentes (autodenominados redistribuidores) del oligopolio de Internet se han posicionado en muy pocos años como las personas (exclusivamente masculinas) más ricas del mundo (Jeff Bezos ostenta el primer puesto de la lista Forbes 2020, Bill Gates el cuarto, Mark Zuckerberg el quinto, Larry Page y Sergey Brin el octavo y el décimo) y, durante estos mismos años, millones de empleos han desaparecido globalmente por la automatización digital y millones de vidas han visto más precarizada su existencia por el cambio de dinámicas sociales y laborales provocadas por el nuevo régimen. Con la implementación acelerada de Internet, el capitalismo fordista ha mutado definitivamente hacia un semiocapitalismo asentado en el tráfico de datos y en un poder simbólico virtual que, por haber minimizado su sustrato material, por haber desmaterializado la mercancía, se torna más virulento, acelerado y polarizado.

Concentración simbólica y económica

Los análisis de la potencia redistributiva de Internet –o, en el otro extremo, de su potencia desigualitaria– suelen reducirse a la cuestión extrínseca de la accesibilidad al sistema, tanto a nivel material como cognitivo. Según estos análisis, una mayor disponibilidad de terminales para que todas las personas, independientemente de su género, nacionalidad y nivel socioeconómico, pudieran conectarse a Internet, junto con una correcta alfabetización digital, comportaría una mayor accesibilidad a la infraestructura hegemónica, lo que se traduciría finalmente en una reducción de las desigualdades.



Sin embargo, los análisis de ese tipo tienden a pasar por alto la desigualdad intrínseca del sistema Internet, del nuevo régimen que, como ya es evidente hoy, no ha podido cumplir con sus promesas de redistribución. Si asumimos que existe esta desigualdad intrínseca en el sistema, entonces no está garantizado que una mayor accesibilidad a esta infraestructura devenida hegemónica se traduzca en una reducción de las desigualdades, por lo menos si su despliegue no va acompañado de políticas reguladoras (con base comunal o socialdemócrata, más o menos redistributiva) que logren compensar los efectos de la concentración simbólica y económica del sistema.

Las dos clases de desigualdad sistémica que aquí denominamos extrínseca e intrínseca entrañan en apariencia una contradicción que es preciso dilucidar, una contradicción aparente que en realidad cruza a cualquier análisis sistémico de Internet y que proviene de una confusión entre dos escalas o lugares en los que puede situarse el observador: a nivel individual o a nivel sistémico. En suma, la contradicción puede condensarse en la siguiente pre-

Millonarios 2.0

Principales multimillonarios en el mundo

● Vinculados con Internet

		Nombre	Fortuna en millones de dólares	Empresa
1	●	Jeff Bezos	183.300	Amazon
2		Bernard Arnault y familia	145.600	LVMH
3	●	Elon Musk	140.500	Tesla, SpaceX
4	●	Bill Gates	118.700	Microsoft
5	●	Mark Zuckerberg	102.600	Facebook
6		Warren Buffett	85.900	Berkshire Hathaway
7	●	Larry Ellison	81.300	Software
8	●	Larry Page	79.300	Google
9		Mukesh Ambani	77.800	Diversificado
10	●	Sergey Brin	76.900	Google

Fuente: Lista correspondiente a diciembre de 2020. https://www.forbes.com/real-time-billionaires/#352428523d78

gunta: ¿cómo puede una red estructuralmente descentralizada ser fuente de concentraciones?

Desde un punto de vista internodal, el sistema Internet ofrece las mismas oportunidades a cualquier agente que disponga de una terminal de acceso –independientemente de su herencia socioeconómica– de devenir receptor o emisor de información transfigurable en mercancía, es decir, en fuente de riqueza material y simbólica. Ya no es preciso hacer transitar la información por canales de distribución jerarquizados y con derecho de admisión, sino que, al contrario, la emisión de servicios y productos –así como su recepción– se dirige inmediatamente, sin necesidad de mediación, hacia el resto de los nodos que conforman el sistema. Sin embargo, analizada esta misma operación desde una óptica transnodal, desde una visión en conjunto del sistema, nos hallamos con un efecto inverso: la hiperaccesibilidad generalizada comporta una proliferación exponencial de los servicios y productos, ofrecidos como mercancías desde cada nodo individual, que se topan de nuevo, y con mayor gravedad, ante el problema de la distribución. ¿Cómo tornar visible lo que en principio se prometió ofrecer de forma inmediata a todo el sistema, ahora que éste se halla saturado? Paradójicamente, a través del despliegue de un dispositivo de hipermediación, un aparato que se sustenta o bien por el capital previo, empleando un importante dispendio de recursos, o bien por un extendido ejercicio de autoexplotación. Es fácil ver que esta doble operación se traduce en una polarización de las desigualdades preexistentes: quienes deseen posicionarse en el nuevo régimen, utilizarán y exprimirán su concentración patrimonial de capital simbólico y económico –perpetuando su privilegio heredado de clase, género y procedencia–; quienes aspiren a ello pero carezcan de capital heredado, se emplazarán a sí mismos, mediante un grave movimiento autodisciplinario, a un estado de mayor precariedad y vulnerabilidad.

Para ilustrar la aparente paradoja que surge entre la situación internodal y transnodal del observador, tomemos las denominaciones empleadas en la mecánica newtoniana para describir dos fuerzas aparentemente contradictorias: un cuerpo que orbita sobre un eje siente, desde su posición restringida, una fuerza centrífuga que lo empuja hacia fuera del centro de rotación; esta fuerza, sin embargo, es ficticia, relativa a la elección de un punto de observación, puesto que el examen del sistema completo muestra que la fuerza real involucrada en la rotación es de sentido contrario, una fuerza centrípeta que dirige el cuerpo hacia el centro orbital. En Internet, la inmediación distributiva que siente el agente emisor al actuar desde un nodo concreto es ilusoria; un análisis del sistema completo muestra que los movimientos ahí involucrados responden en realidad a fuerzas centrípetas que atraen cada uno de estos agentes hacia contados ejes de rotación, unos pocos nodos que, aun integrados en una infraestructura arquitectónicamente no jerárquica, logran el rédito de concentrar en sí todo el potencial simbólico y económico del sistema.

Estos nodos gravitacionales, unidos, son los que conforman la estructura oligopólica del sistema Internet. Los más visibles son los que han venido a conocerse por el acrónimo FAANG (Facebook, Amazon, Apple, Netflix, Google), que en el año 2020 han alcanzado una cuarta parte del Standard & Poor's 500, el índice bursátil más representativo de la situación real del mercado. Pero estas cinco compañías no son las únicas que se ven beneficiadas por las concentraciones que ocasiona la distribución centrípeta del sistema Internet. La propia legislación interna del estado actual de la red, formalizada a través de algoritmos, torna más visible lo más visto, más vendible lo más vendido, más viral lo más viralizado. La proliferación descentralizada de terminales-usuarios conectados se traduce, por las leyes que regulan su conexión, en una creciente polarización en términos adquisitivos y de poder. Preguntarse por qué obedecen los algoritmos a esta lógica y no generan, al contrario, una dinámica de difusión distributiva e igualitaria es equivalente a preguntarse por qué no ocurre esto fuera de Internet, retrocediendo hasta el misterio de la acumulación primitiva. Si bien el sistema Internet es disruptivo en muchos aspectos, no lo es en términos de distribución, desjerarquización ni descentralización. No es, en suma, la utopía igualitaria que se prometió. A medida que se despliegan sus tentáculos, tornando menos resistentes las alternativas basadas en otros sistemas, pasa a ser más y más urgente desmontar ese mito fundacional. Fuera de Internet, las desigualdades brotan de raíces históricas, de clase, de género, territoriales. En Internet, a pesar de su estructura, de los mismos sustratos heredados crecen y se reproducen otros nódulos de poder, incluso mejor desarrollados por una hipermediación encubierta, camuflada durante años como distribución inmediata, descentralización no mediada. Conocer las desigualdades intrínsecas del sistema Internet, comprender que son el efecto irremediable de su distribución centrípeta –y no una contingencia–, es la primera condición para abrir la posibilidad de emergencias contrahegemónicas, políticas, sociales e individuales, que persigan un anhelado estado de mayor equidad en el sistema.

Durante estos años, millones de empleos han desaparecido globalmente por la automatización digital y millones de vidas han visto más precarizada su existencia.

Argentina

DESIGUALDADES.COM

La desigualdad en el acceso a Internet suele asociarse con el acceso diferencial a otros servicios y recursos esenciales haciendo cada vez más rígida la movilidad en la escala social.

Mariela Baladron

Doctoranda en Ciencias Sociales (UBA), Magíster en Industrias Culturales (UNQ) y Licenciada en Comunicación Social (UBA). Docente e investigadora del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe (IEALC) y del Observatorio DERCOM de la Facultad de Ciencias Sociales (UBA).

Las brechas digitales son geográficas ya que se verifican tanto entre países como fronteras adentro, en zonas rurales y dentro de los aglomerados urbanos en villas y asentamientos. También responden a otras desigualdades y diferencias socioeconómicas, de género, etarias, étnicas, de estatus migratorio o discapacidades. Una vez lograda la conectividad (la disponibilidad de infraestructura y servicios a precios asequibles), el uso y la apropiación de tecnologías dependen de variables como acceso a dispositivos y las prácticas sociales que permiten incorporar a las tecnologías de la información y la comunicación como herramienta en los proyectos de vida de las personas.

Argentina es el segundo país, detrás de Chile, en promedio de personas que más utilizan Internet en la región latinoamericana. Según el INDEC, 80 de cada 100 personas utilizan Internet y 84 de cada 100 teléfono celular. El 90% de los accesos a telefonía móvil, de acuerdo a ENACOM, corresponde a prepagos aunque otras estimaciones calculan que la relación es de 59% prepagos y 41% pospagos.

La desagregación de esta información permite echar luz sobre algunas cuestiones que no expresan las cifras: la falta de datos sobre conectividad en zonas rurales; muchas de las personas que acceden a Internet lo hacen a través de Wi-Fi en lugares públicos; y la mayoría de los usuarios utiliza el servicio según su capacidad de pago, lo que implica que sus necesidades de información y comunicación no siempre están satisfechas. A su vez, los servicios prepagos son más onerosos si consideramos el costo promedio por datos y llamadas en comparación con los planes pospagos.

Al considerar los hogares con banda ancha en Argentina, durante el primer trimestre de 2020 la tasa de penetración nacional de banda ancha fija era de 62,86 accesos cada 100 hogares. En este caso, la desigualdad geográfica muestra marcadas diferencias entre provincias y regiones: de las 24 provincias, 17 se encuentran debajo de la media nacional y 5 de las 7 provincias que la superan se aglutinan en la Región Centro del país –Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires (CABA), Córdoba, La Pampa y Santa Fe –. La región con el promedio más bajo de accesos a banda ancha fija es el Noreste (NEA) con 40,31 accesos cada 100 hogares, lo que implica una brecha de más de 30 puntos porcentuales respecto de la Región Centro.

La concentración del mayor número de accesos coincide con los aglomerados urbanos más poblados, donde las empresas de cable y telecomunicaciones han focalizado sus tendidos de infraestructura. Por esta razón, en 2010 se lanzó el Plan Argentina Conectada, cuyo principal eje fue el tendido de una red troncal federal de fibra óptica de 35.000 km para llevar infraestructura mayorista a las zonas desatendidas. Parte de esas obras es el corredor Norte-Sur, en paralelo a la Ruta Nacional 40.

Dentro del universo de los hogares con banda ancha fija, existen a su vez desigualdades en las velocidades y tecnologías disponibles, lo cual también impacta en los usos y prácticas, ya que algunas actividades como el streaming de video y las videollamadas se dificultan. Las diferencias son notables: el 59,14% de los accesos a banda ancha fija en la provincia de Buenos Aires y CABA son iguales o superiores a los 20 Mbps de velocidad, mientras que en el resto del país solo el 27,62% de los accesos corresponde a esa velocidad y la mayoría son de entre 1 y 6 Mbps.

La región con el promedio más bajo de accesos a banda ancha fija es el Noreste con 40,31 accesos cada 100 hogares, lo que implica una brecha de más de 30 puntos porcentuales respecto de la Región Centro.

Un derecho humano

Según el RENABAP, en Argentina existen 4.416 barrios populares donde viven aproximadamente 4 millones de personas (es decir, 10% de la población del país). El 84% corresponde a asentamientos y el 16% a villas, de las cuales el 50% están localizadas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Las desigualdades de los barrios populares se traducen no sólo en vulnerabilidad laboral y acceso deficiente a servicios públicos, sino que trae aparejada otras desigualdades como la falta de acceso a Internet, tanto por cobertura como por asequibilidad.

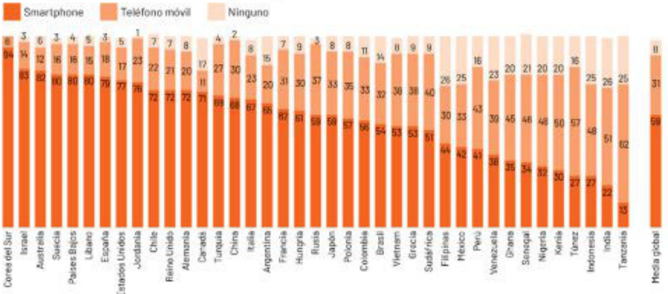
Las desigualdades en el acceso a Internet son tan relevantes que repercuten en la integración económica, social y educativa e ingresaron en los últimos tiempos en la agenda pública del país. Es deseable que sean complementadas y continuadas con otras medidas específicas para garantizar este derecho humano, tal como fue reconocido por las Naciones Unidas.

Jamás sin mi smartphone

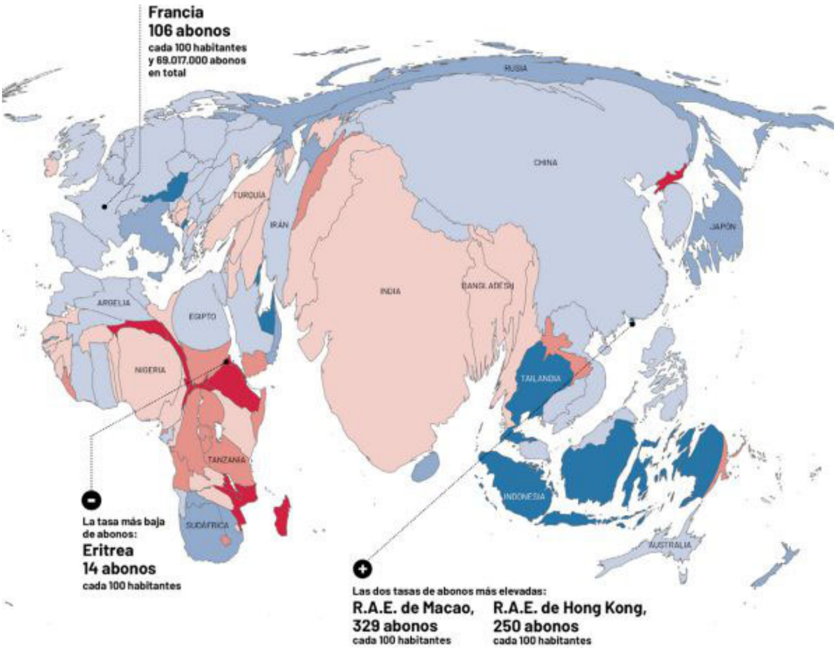
En 2017, había en África Subsahariana 444 millones de abonados a servicios móviles, es decir una tasa de penetración del 44%. "El promedio mundial es del 66%, pero en países como Sudáfrica y Nigeria, donde casi nueve de cada diez personas cuentan con un abono, los celulares son tan comunes como en Estados Unidos", señala *Financial Times*. De hecho, la generalización de los smartphones, que representan un tercio de los teléfonos móviles en África, derivó en verdaderos progresos. En Costa de Marfil, la compañía británica Standard Chartered lanzó su primer banco minorista exclusivamente en línea. Pretende utilizar ese país como un laboratorio de los servicios digitales que ofrecerá en el mundo entero. "El impacto es aun mayor en las zonas rurales, donde viven seis de cada diez africanos", continúa el diario económico británico. El avance del dinero móvil, utilizado actualmente por unos 690 millones de personas en el mundo –la mitad de ellas en África– constituye la espina dorsal de otros múltiples servicios. Así, en los campos, se propagó rápidamente la energía solar prepaga: la gente puede comprar electricidad con dinero móvil a partir de 50 centavos diarios, y los paneles solares son desactivados a distancia en caso de falta de pago. Sin embargo, los pobres rendimientos agrícolas, la esporádica presencia de personal de salud o incluso la pobreza no tienen respuesta en las aplicaciones.

La brecha móvil

Adultos que poseen un dispositivo móvil, en porcentaje, 2018



Fuente: Pew Research Center, "Social Media Use Continues to Rise in Developing Countries but Plateaus across Developed Ones", Washington, D.C., 19-6-18.



Cómo leer este mapa:

El color de los países indica la tasa de equipamiento, es decir el número de abonos a un servicio de telefonía móvil cada 100 habitantes (por país, 2017).

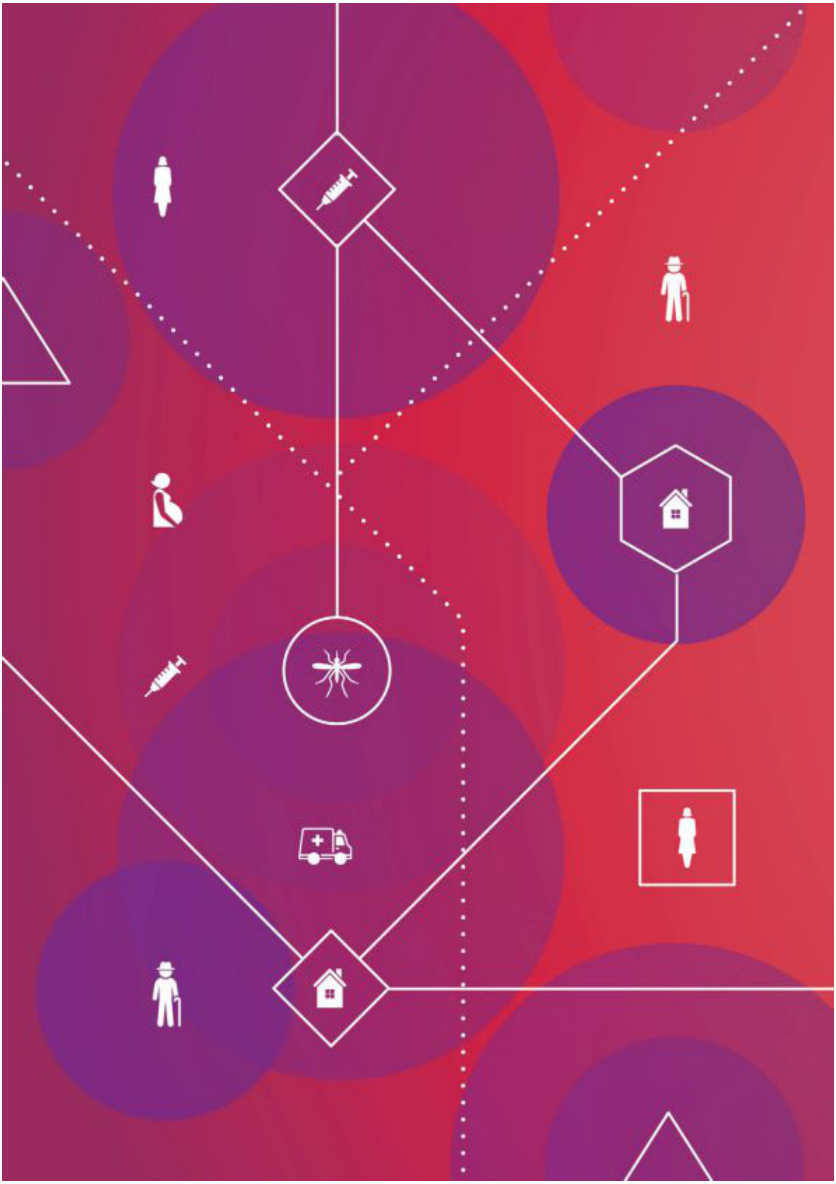
- Más de 164
- Entre 134 y 163,9
- Entre 104 y 133,9
- 104 — Promedio mundial
- Entre 73 y 103,9
- Entre 43 y 72,9
- Entre 13 y 42,9

La forma de los países fue modificada en función del número total de abonos a un servicio de telefonía móvil (un número más elevado implica una ampliación de la superficie real de los Estados mientras que los números más bajos derivan en una superficie más reducida).

Australia, muy poco poblada, tiene lógicamente un número de abonos bajo (27,5 millones) en relación con su superficie: por lo tanto, ésta fue reducida.

Japón, muy poblado, tiene un número de abonos elevado (173 millones) en relación con su superficie: por lo tanto, ésta fue ampliada.

Fuente: Unión internacional de telecomunicaciones (itu.int), institución especializada de las Naciones Unidas para las tecnologías de la información y de la comunicación. © Courrier international



3. SALUD

Brechas endémicas

El acceso a la salud es quizás el ámbito donde se manifiestan las desigualdades más dolorosas de la humanidad. En Sierra Leona, los habitantes viven treinta y dos años menos que en Hong Kong. Pero esta diferencia en los años de vida no sólo se produce entre países desarrollados y en vías de desarrollo sino también al interior mismo de todos los Estados del mundo. Se calcula que los pobres viven entre 10 y 20 años menos que los ricos. Y, en las áreas urbanas, se concentra la mayor cantidad de médicos y camas hospitalarias, como también los recursos tecnológicos de avanzada y las mejores infraestructuras sanitarias. Males de la salud que cuestan la vida.

Hábitos de vida y atención sanitaria

EL DINERO HACE LA LONGEVIDAD

La salud se juega en muchos ámbitos, y prácticamente todos ellos se ven atravesados por la desigualdad. Las personas más desfavorecidas –en ingresos, nivel educativo, género, edad, grupo étnico– muestran, también en cuestiones de salud, mayores vulnerabilidades. Desigualdades que incluso persisten en países desarrollados con sistemas sanitarios fuertes.

Javier Padilla Bernáldez

Médico. Magister en Economía de la Salud y del Medicamento y en Salud Pública y Gestión Sanitaria. Co-coordinador de *Salubrismo o Barbarie* **(Atrapasueños, 2017), autor de** *¿A quién vamos a dejar morir?* **(Capitán Swing, 2019) y co-autor de** *Epidemiocracia* **(Capitán Swing, 2020). Miembro del Colectivo Silesia.**

Las mujeres viven más años que los hombres. Los hombres viven con mejor calidad de vida que las mujeres. Los jóvenes comen menos frutas y verduras que las personas mayores. Los desempleados fuman más que las personas con trabajo. En España la esperanza de vida es una de las más altas del mundo; sin embargo, el número de años de vida saludable a partir de los 65 años es mucho menor en comparación con otros países de Europa. Si uno les pregunta a una mujer y a un hombre cómo consideran que es su salud, es dos veces más probable que la mujer diga que es mala o muy mala. Si esta misma pregunta uno se la hace a gente con diferente nivel de ingresos, las personas del 10% de la población con más dinero es mucho menos probable que digan que tienen mala salud que las personas del 10% de menos dinero.

La desigualdad en salud tiene muchas formas de mostrarse, y estas son sólo algunas de ellas. La salud se juega en muchos ámbitos, y prácticamente todos ellos se ven atravesados por la desigualdad, repercutiendo de forma negativa en la vida de las personas más desfavorecidas en cuestión de ingresos, nivel educativo, género, edad, grupo étnico o, principalmente, la intersección de varios de estos aspectos. Incluso en países con sistemas sanitarios fuertes y que prestan asistencia a la gran mayoría de la población, estas desigualdades persisten.

En el caso de España, donde el acceso a la sanidad pública es mayormente universal (aún con bolsas de población que permanecen excluidas), podemos observar desigualdades en salud muy notables que hacen que haya diferencias de más de seis años en la esperanza de vida según el barrio de Madrid en el que uno viva, o de más de 12 años entre las personas de rentas más altas y más bajas de Cataluña.

A pesar de cierto discurso muy presente en el imaginario colectivo que afirma que la salud es un asunto principalmente basado en decisiones individuales y para cuya mejora se ha de actuar con medidas que incidan sobre los hábitos de vida, si analizamos dichos hábitos podemos observar cómo se distribuyen de manera desigual en función de la renta, la edad o el nivel educativo.

Pobres con malos hábitos

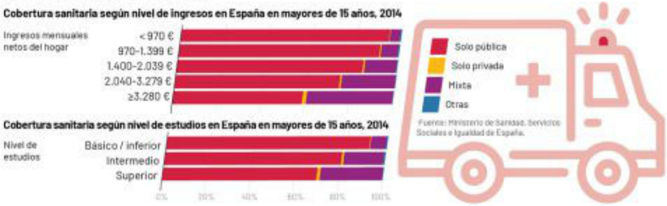
Comer fruta y verdura todos los días, hacer actividad física al menos 30 minutos 5 días a la semana, no consumir bebidas azucaradas, no fumar..., todos esos hábitos de vida se distribuyen de forma desigual; esa disparidad no afecta sólo a las diferencias entre pobres y ricos, sino que impregna toda la escala social, de forma que según se vaya ascendiendo en los intervalos de renta o nivel educativo, se puede observar una distribución más favorable de los hábitos que condicionan tener una mejor salud.

Un ejemplo de cómo los malos hábitos de vida se ven atravesados por las desigualdades es el consumo diario de bebidas azucaradas. Mientras en las clases sociales más privilegiadas tan solo un 6-6,5% de las personas las consumen a diario, este porcentaje sube al 13,5% en las personas de clase social más desfavorecida en España. Este porcentaje, además, va incrementándose, desde ese 6% hasta el 13% de forma progresiva en las clases sociales intermedias del país. Ese patrón de distribución de los hábitos de vida se repite con todo aquello que consideramos saludable.

Las personas desempleadas consumen tabaco a diario en mayor porcentaje que las que tienen un empleo. Las

La enfermedad es un estratificador social, e igualmente estratificados se distribuyen los que llamamos "hábitos de vida saludables".

Protección diferenciada



mujeres son más sedentarias que los hombres, y además, las personas de clase social más desfavorecida hacen ejercicio físico en menor porcentaje que las de clase social más privilegiada.

Esto es un patrón generalizado en todo el mundo, siendo más acusado cuanto más desigual es la sociedad en cuestión. La enfermedad es un estratificador social, e igualmente estratificados se distribuyen los que llamamos "hábitos de vida saludables".

Más allá de la visión individualista

Los sistemas sanitarios pueden suponer un factor de generación de desigualdades en dos ámbitos: en el acceso al sistema sanitario y en la propia práctica asistencial. En relación con el primero, la forma en la que se otorga el derecho a asistencia sanitaria suele suponer una desigualdad de entrada, al quedar los grupos de población más vulnerables fuera del derecho a dicha asistencia (en el caso de España, los migrantes indocumentados son el grupo con mayores dificultades de acceso); además, una vez obtenido el derecho a la asistencia, siguen existiendo barreras para acceder a un sistema que resuelva las necesidades en salud. Según los datos de la muestra española de la última Encuesta Europea de Salud, el impacto de las listas de espera como barrera para acceder al sistema sanitario también presenta un componente social; la demora excesiva o inaccesibilidad a la asistencia médica por lista de espera en los últimos 12 meses es superior en las clases sociales más bajas que en las más altas (en torno al 10% en las clases más privilegiadas y un 13% en las más desfavorecidas), siendo en todas las clases sociales las mujeres las que presentan mayores problemas de acceso. En relación a la práctica asistencial, todos los estudios al respecto muestran que los profesionales sanitarios tienden a explorar mejor, desarrollar una consulta menos paternalista e incluir más en los procesos de toma de decisiones a las personas según sea mayor su nivel educativo. Es decir, las consultas, en muchas ocasiones, son lugares donde se reproducen las desigualdades existentes.

La clase social es un determinante clave del exceso de peso en el caso de las mujeres españolas

Muchos autores, especialmente aquellos encuadrados dentro del liberalismo igualitario, defienden que uno de los papeles fundamentales de los servicios de salud (especialmente de los sistemas sanitarios públicos) es ayudar a garantizar la igualdad de oportunidades; esto es, el sistema sanitario sería el lugar de puesta a punto para que la población pudiera competir en igualdad de condiciones, igualando el aspecto más fundamental de todos: la salud. Sin embargo, hay una objeción que plantear a esta visión: la sanidad y, en general, las políticas de salud, es cierto que pueden ayudar a estrechar la grieta social que se genera en otros ámbitos (económico, social, de participación pública...) pero dado que las desigualdades en salud tienen origen fuera del sistema sanitario y del lugar de actuación de la mayoría de las políticas de salud, en muchas ocasiones éste sólo sirve como maquillaje temporal, reproduciéndose las mismas desigualdades.

Si consideramos que el derecho a la salud es algo de lo que debemos hacernos cargo, la igualdad en esperanza de vida, en hábitos de vida saludable o en acceso al sistema sanitario no puede ser vista como un medio para la obtención de una condición de igualdad de cara a la competición en la sociedad de mercado, sino como un elemento fundamental, un objetivo colectivo, a perseguir por sí mismo.

Más allá de la visión individualista que nos señala que lo que tenemos que hacer es mantenernos activos, aprender a controlar el estrés, alimentarnos de forma saludable o no fumar, David Gordon, profesor de la Universidad de Bristol, ofrece una perspectiva alternativa que plantea que los elementos centrales por los que tenemos que luchar para tener una vida saludable deben orientarse a actuar sobre las condiciones de vida que hacen que las personas no puedan desarrollar esos hábitos, como la pobreza, los trabajos inseguros y mal pagados, la soledad, la falta de educación y del goce de otros derechos centrales para la salud. Obviamente, se trata de aspectos irrealizables desde la óptica individual, pero cuya mejora, por pequeña que sea, tendrá un impacto mucho mayor en las desigualdades en salud y la construcción de una sociedad saludable que el empeño en dejar esas cosas al albur de las decisiones individuales.

¿Cuántos años de vida?

El lugar en el que nacemos determina el tiempo que podemos esperar vivir. No a escala individual, pero sí a escala de una nación. Esta desigualdad primera, fundamental, se asemeja a un precipicio.

Sus causas son múltiples. El nivel de vida, la tasa de mortalidad infantil y los estragos del Sida en África, en una población joven, explican en parte la baja esperanza de vida en Sierra Leona y en ciertos lugares de África Subsahariana. En los países occidentales, la situación es distinta: la esperanza de vida, ya muy alta, parecía aumentar regularmente en las últimas décadas, pero tanto Europa como Estados Unidos sufrieron "accidentes" en los últimos años.

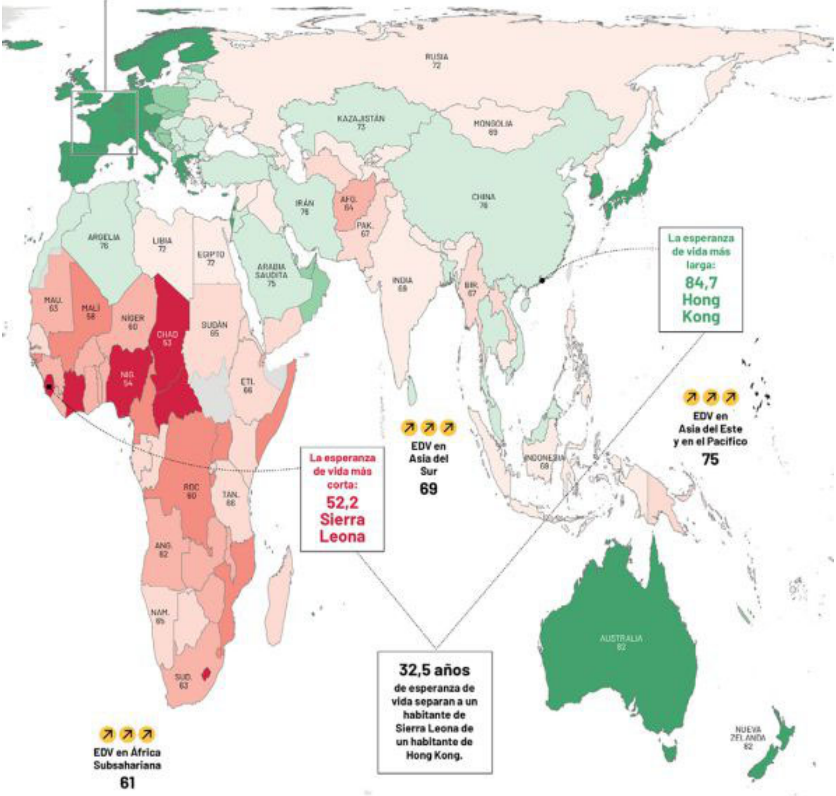
Por primera vez, una cepa de la gripe (H3N5) aumentó notablemente la mortalidad de los mayores de 85 años, particularmente en 2015. Y, en 2020, se sumaron los efectos negativos del COVID-19. En Estados Unidos, además, se sienten los efectos de la crisis de los opiáceos que causa estragos entre los más jóvenes: la esperanza de vida está en baja desde hace tres años, por primera vez desde la gripe española de 1918.

Esperanza de vida al nacer (EDV)
Cantidad de años, por país, 2017

EDV en la UE-28
81

EDV en Francia
82,5

Como en muchos países europeos*, la EDV retrocedió en Francia en 2015, por primera vez desde los años 1960. Luego volvió a crecer en 2016, para estancarse en 2017 en 82,5.



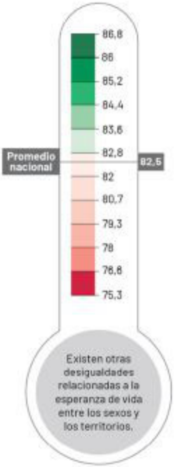
EDV en África Subsahariana
61

Cartografía: Proyección de Gall-Peters.
Fuente: Banco Mundial.
© Courrier International

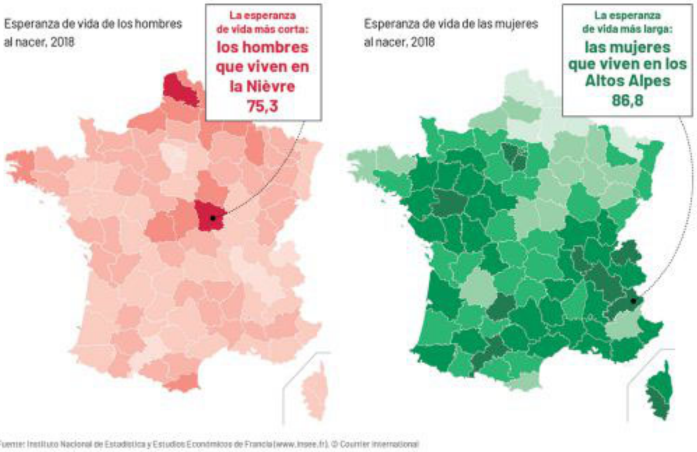
*Alemania, Austria, Bélgica, Grecia, Hungría, Italia, Lituania, Malta, Países Bajos, Polonia, Eslovaquia, Eslovenia, Suecia, Suiza.

¿Cómo vivir más?

Dentro de un mismo país, bajo las mismas leyes, con el mismo sistema de salud, no todos viven la misma vida. Así, en Francia la brecha entre la esperanza de vida de los hombres y la de las mujeres sigue siendo importante. Cualquiera sea la región o el departamento, las francesas tienen una esperanza de vida superior al promedio nacional, mientras que los franceses siguen por debajo del mismo. Sin embargo, el factor más influyente sigue siendo el dinero: los hombres más ricos viven en promedio trece años más que los más pobres. Entre los pobres los ingresos cumplen un papel esencial: "En un nivel de vida que ronda los 1.000 euros mensuales, 100 euros suplementarios pueden significar 0,9 años más de esperanza de vida para los hombres y 0,7 para las mujeres", según el Instituto Nacional de Estadística y Estudios Económicos de Francia (INSEE).



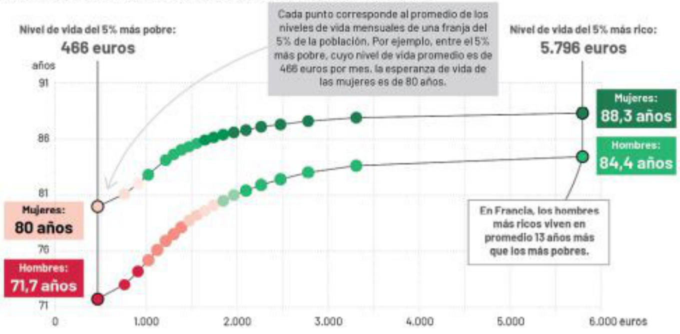
Francia: la ley del género y del territorio



Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Estudios Económicos de Francia (www.insee.fr). © Courrier International

Más ingreso, más sobrevida

Esperanza de vida al nacer en Francia, por sexo y nivel de vida mensual, 2012-2016



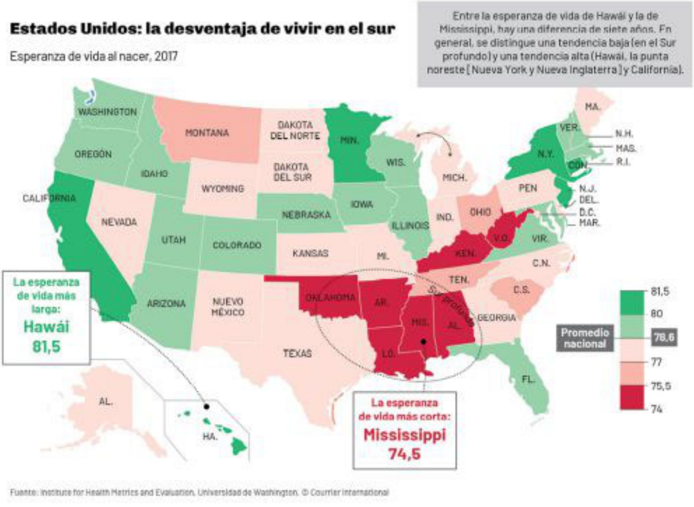
*Excluida Mayotte.

Fuente: INSEE-DGFIP-CNAF-CNAV-CCMSA, Échantillon Démographique Permanent. © Courrier International

En Estados Unidos se observa la misma relación: Mississippi es el estado donde la esperanza de vida es la más corta, y es también el estado con el mayor índice de pobreza, que alcanza al 20% de la población.

Estados Unidos: la desventaja de vivir en el sur

Esperanza de vida al nacer, 2017



Fuente: Institute for Health Metrics and Evaluation, Universidad de Washington. © Courrier International

Envejecimiento poblacional

MÁS ANCIANOS QUE NIÑOS

En 2050, según Naciones Unidas, una de cada seis personas en el mundo tendrá más de 65 años. Sin embargo, no se puede hablar de una única vejez, dadas las profundas disparidades entre países como al interior mismo de las fronteras nacionales. La vulnerabilidad socioeconómica de las personas constituye un fuerte condicionante que juega en desmedro de la esperanza de vida y de un envejecimiento digno.

María Julieta Oddone
Licenciada en Sociología de la Universidad de Buenos Aires, Magíster en Gerontología de la Universidad Nacional de Córdoba y Doctora de la Universidad de Buenos Aires, mención en Antropología.

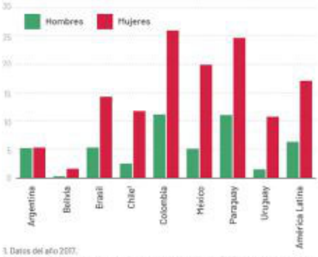
Por primera vez en la historia, las personas de 65 años o más superaron hoy a los niños menores de 5 años. Y se espera que el número de personas de 80 años o más se triplique, pasando de 143 millones a 426 millones en 2050. A nivel regional, se prevé que el grupo de personas mayores de 65 años se duplique entre 2019 y 2050 en África Septentrional, Asia Occidental, Asia Central y Meridional, Asia Oriental y Sudoriental y América Latina y el Caribe. En 2050, una de cada cuatro personas de Europa y América del Norte podría alcanzar los 65 años de edad o más.

El envejecimiento poblacional cuenta entre una de sus causas a la mayor esperanza de vida de la población (1). En efecto, en el mundo la esperanza de vida al nacer pasó de 64,2 años en 1990 a 72,6 años en 2019 y se proyecta que en el año 2050 sea de 77,1 años. Sin embargo, existen grandes diferencias entre países. En 2019, la esperanza de vida al nacer en los países más pobres era 7,4 años menos que el promedio mundial.

Aunque la diversidad en el proceso de envejecimiento se debe en parte a la herencia genética, al género, la etnia, la familia de origen o las cargas de trabajo que se han desarrollado en el curso de la vida, el impacto de los entornos físicos y sociales influye también en forma directa en la salud o indirectamente a causa de barreras en su acceso que generan inequidad. Las capacidades diferenciales en la vejez muy posiblemente se originen en la acumulación de estas inequidades en el curso vital.

Abuelos desamparados

Personas de 60 años o más que viven en áreas urbanas y no reciben ingresos propios, por sexo, promedio ponderado, en %



1. Datos del año 2017.
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de CEPALSTAT, 2014.

Transición demográfica

El cambio poblacional comenzó en Europa hace 200 años con la baja de los índices de mortalidad y ha seguido disminuyendo tanto en los países considerados ricos como en los pobres. Algunos especialistas creen que la esperanza de vida podría sobrepasar los 100 años a finales de este siglo y, de hecho, se observan enclaves como "zonas azules" donde los centenarios se visibilizan. Al mismo tiempo, se advierte que la mayor frecuencia del sida, las variedades de ciertas enfermedades resistentes a los medicamentos como la malaria y la tuberculosis, la frecuencia de obesidad y diabetes además de nuevas enfermedades como el Covid-19 y ciertas condiciones socioeconómicas y ambientales pueden revertir en algunas zonas geográfi-

La esperanza de vida es uno de los indicadores que mejor ilustran las desigualdades entre países en cuanto al desarrollo de sus políticas sanitarias y sociales.

El futuro de América Latina y el Caribe

(2030-2060)

- Sociedad juvenil
- Sociedad adulta joven
- Sociedad adulta
- Sociedad envejecida

Fuente: Naciones Unidas, "World Population Prospects: The 2015 Revision, Key Findings and Advance Tables", Working Paper, N° 241, Nueva York, División de Población, 2015, http://esa.un.org/unpd/wpp.

cas los logros alcanzados en la esperanza de vida. Esto ya ocurrió y ocurre por ejemplo en Rusia, Europa Oriental y África Subsahariana y en ciertos grupos de poblacionales de otros países.

Corresponde señalar que mientras la mayoría de las discusiones en torno al problema del envejecimiento se centra en el mundo desarrollado, una transición demográfica paralela está ocurriendo en los países en desarrollo. Dentro de cada país, por otra parte, las consecuencias del envejecimiento son diferentes para unas y otras personas y grupos dependiendo, por ejemplo, de su condición socioeconómica.

Si comparamos los países con mayor esperanza de vida con aquellos que tienen la menor, entre los primeros podemos citar, por ejemplo, a Japón con 83,98 años o Suiza con 82,90 años, y entre los segundos a la República Centroafricana cuya esperanza de vida es 52,17 años o Chad 52,9 años. Podemos fácilmente observar que la brecha de años por vivir entre unos y otros es de treinta años.

Oportunidades y desafíos

En 1947, los hombres japoneses tenían una esperanza de vida de 50,06 años y las mujeres de 53,96 años. En la década del sesenta, Japón emprendió una política de bienestar integral, introdujo cuidados universales de salud, una pensión social universal y un plan para redistribución de ingresos, tasas bajas de desempleo e impuestos progresivos. Según el Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar de Japón, en 2018 la esperanza de vida era de 81,25 años para los hombres y de 87,32 años para las mujeres, ambos máximos históricos. El cambio en la tasa de mortalidad del cáncer, padecimientos cardíacos, accidentes cerebrovasculares y neumonía, entre otras enfermedades, ha fortalecido la tendencia al aumento de la esperanza de vida tanto para hombres como para mujeres.

En contraposición, la República Centroafricana situada en una de las regiones más inestables del mundo, muestra una degradación constante de las condiciones de vida de la población con crecientes dificultades para acceder a la atención sanitaria. En este contexto, las tasas de mortalidad son elevadas producto de la prevalencia de enfermedades como la malaria, diarreicas o las infecciones respiratorias. La malaria o paludismo es la primera causa de mortalidad infantil y el principal problema de salud pública. La epidemia del sida afecta de forma generalizada a la población adulta. Este país se encuentra entre los cuatro focos remanentes de enfermedad del sueño (tripanosomiasis humana africana) en África Subsahariana. Además en la República Centroafricana existen una serie de conflictos que permanecen desde el año 2003 e impactan sobre la situación sanitaria, la escolaridad de los niños, la producción agrícola, el acceso a los mercados y la degradación de las infraestructuras de base como las carreteras. En las zonas rurales, la distancia hasta el centro de salud más cercano se estima que es de unos 10 kilómetros aproximadamente.

De este modo, la condición económica y social de los Estados, la tecnología (alimentaria y médica, por ejemplo), la organización de la producción y distribución de recursos, así como las especificaciones socioculturales, son factores condicionantes en los años por vivir. Las vacunas, antibióticos y otras mejoras sanitarias pueden alargar la vida de muchas personas en el marco de Estados que tienen dificultades para garantizar la percepción de pensiones, la asistencia sanitaria y otras prestaciones dirigidas a las personas de mayor edad.

En síntesis, pequeñas mejoras en la renta de los países más pobres suponen grandes mejoras en la esperanza de vida, lo que trae consigo un envejecimiento demográfico significativo de sus poblaciones. En los países más ricos, sin embargo, no parece que una mayor ampliación de la esperanza de vida pueda relacionarse ya con incrementos en la renta sino, con nuevos avances en cuanto a tecnología médico-sanitaria.

En los países en desarrollo las poblaciones están envejeciendo a una velocidad sin precedentes mientras que la mayoría de sus habitantes siguen en la pobreza. La esperanza de vida al nacer es uno de los indicadores que mejor ilustran las desigualdades entre países en cuanto al desarrollo de sus políticas sanitarias y sociales y, por lo tanto, en cuanto a salud y bienestar de sus habitantes. El crecimiento en la esperanza de vida ofrece nuevas oportunidades pero también provoca retos para el futuro en pos de una distribución equitativa de los recursos que permita nivelar las condiciones de vida de las poblaciones. ▢

1. La esperanza de vida es el número promedio de años que cabe esperar que viva un recién nacido sujeto a la tasa de mortalidad específica por edad en un período determinado.

En los países en desarrollo las poblaciones están envejeciendo a una velocidad sin precedentes mientras que la mayoría de sus habitantes siguen en la pobreza.

América Latina y el Caribe

LA ENFERMEDAD DE LA EXCLUSIÓN

El nuevo milenio marcó importantes avances en salud en América Latina y el Caribe, coronados por el logro de 16 años más de vida en los últimos 45 años para sus habitantes. Pero este progreso oculta que el mayor gasto invertido en salud en los últimos años tiene cada vez menos impacto en la mejora de los indicadores, que las brechas aumentan y que perduran núcleos de alta vulnerabilidad.

Gabriela Benza y Gabriel Kessler

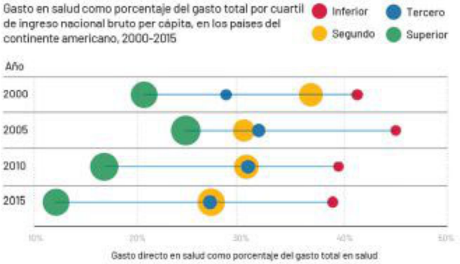
Respectivamente, doctora en Ciencias Sociales, investigadora del Centro de Investigación en Políticas Sociales Urbanas de la UNTREF y docente de grado y posgrado en la UNTREF y la UNSAM y doctor en Sociología por la École des Hautes Études en Sciences Sociales, investigador principal del CONICET y profesor titular en la UNLP y en el Idaes-UNSAM.

En América Latina y el Caribe se ha incrementado el gasto en salud en relación con el porcentaje del PIB en el nuevo milenio. Durante estos años continuó el proceso de caída de la mortalidad iniciado a mediados del siglo XX. La OPS señala que la esperanza de vida aumentó a casi 75 años en el quinquenio 2010-2015. América Latina y el Caribe obtuvieron importantes avances en mortalidad infantil y en el logro de una vida más larga y saludable en sus habitantes. En términos generales, la población de las Américas ha ganado 16 años de vida como promedio en los últimos 45 años, es decir, casi 2 años por quinquenio. También ha disminuido la mortalidad materna en casi un 15% y la mortalidad infantil en un 24% entre el período 2002-2005 y 2010-2013, y la inmunización por vacunación es alta en toda la región. Los países lograron el 67% de reducción de la tasa de mortalidad de menores de 5 años de 1990 a 2015. Han disminuido también las defunciones ligadas al sida, en un 67% entre 2005 y 2015, por los tratamientos tempranos con antirretroviral, aunque se estima que en 2015 había 2 millones de personas infectadas en la región (1).

Los indicadores anteriores pueden ocultar que el gasto en salud tiene cada vez menos impacto en la mejora de los indicadores, que las brechas aumentan y que perduran núcleos de alta exclusión: por ejemplo, distintos estudios señalan que en general los Objetivos del Milenio no se han alcanzado para los pueblos indígenas (2). Los rendimientos son decrecientes en gran medida debido al aumento del costo de la salud y porque no es fácil una buena coordinación entre los servicios. Un informe de Unicef (2016) revela la persistencia de grandes desigualdades entre países, regiones dentro de ellos, clases sociales y grupos como los indígenas, en el acceso a anticonceptivos, contagio de VIH, acceso a aborto seguro, prevención del cáncer y mortalidad y morbilidad

Que paguen los pobres

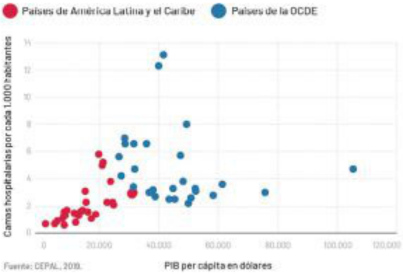
Gasto en salud como porcentaje del gasto total por cuartil de ingreso nacional bruto per cápita, en los países del continente americano, 2000-2015



Fuente: "Tendencias de salud en las Américas", OPS, 2019.

Carencias estructurales

Camas hospitalarias cada 1.000 habitantes y PIB per cápita en dólares (en paridad del poder adquisitivo) en países de América Latina y el Caribe y en la OCDE, 2019



Fuente: CEPAL, 2019.

materna. Respecto de esto último, el índice de concentración de mortalidad materna muestra un porcentaje desproporcionado en los países más pobres de América Latina y el Caribe. En 2015, estos países agrupaban el 11,7% de los nacidos vivos y el 41% de todas las muertes maternas, mientras que los más ricos, el 10,6% de los nacidos vivos y el 8% de muertes maternas. En rigor, el indicador de mortalidad materna mejoró en términos absolutos, pero empeoró en términos relativos de 2000 a 2015, porque hubo una mejora mayor en los países más ricos y en los segmentos más aventajados de cada país que en los grupos y países más pobres.

Nuevos y viejos padecimientos

La heterogeneidad social de la región también se expresa en las denominadas enfermedades emergentes, en muchos casos que se consideraban erradicadas y vinculadas a la pobreza y exclusión extrema, como la influenza y el cólera que se han detectado en Cuba, Haití, México y República Dominicana. También se han intensificado las llamadas enfermedades de la pobreza, como la chikunguña y el zika (más de 700.000 casos en 2015-2016), y había 14 países donde la fiebre amarilla era considerada endémica; también el dengue muestra un aumento de su incidencia. Entre las enfermedades desatendidas, sin duda una de las más importantes es el Chagas; la OPS calcula que en la región viven 6 millones de personas con dicha enfermedad. Todas estas enfermedades de la pobreza cuentan con políticas insuficientes y, en muchos casos, con medicamentos muy caros(3).

Entre las enfermedades no transmisibles responsables cada año de cuatro de cada cinco muertes, las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, las enfermedades respiratorias y la diabetes son, en la actualidad, las cuatro principales causas de muerte en la región latinoamericana. En efecto, de todas las muertes causadas por estas enfermedades, el 35% se registró de manera prematura en personas de 30 a 70 años de edad (el cáncer y las dolencias cardiovasculares totalizaron el 65% de estas defunciones prematuras). Su prevalencia exige modificar la atención a la salud para poner énfasis en el cuidado de los factores de riesgo. A fin de cuentas, los principales factores de estas enfermedades son una alimentación poco saludable, la actividad física insuficiente, el consumo de tabaco y el consumo nocivo de alcohol. Y está claro que dichos factores tienen mayor incidencia a medida que se desciende en la escala social.

Crisis paradigmática

¿Qué continuidades y qué cambios se observan en América Latina durante el giro posneoliberal? En relación con el gasto público en salud, si bien hay mucha variabilidad entre países, se han producido en general aumentos de la inversión. Veintidós países de la región aumentaron sus gastos relativos al PIB entre 2010 y 2014, pero con un incremento inferior al lustro anterior, excepto Bolivia, Paraguay y Perú (4). Sin embargo, el gasto público es todavía insuficiente: Costa Rica, Cuba y Uruguay son los únicos países que asignan más del 6% de su PIB al gasto público en salud (mientras países como Francia, Suiza o Suecia destinan más del 11%). Y el tema es aún más acuciante en la actualidad, ya que el contexto económico presente resulta menos favorable que el de aquel entonces. En rigor, los expertos coinciden en que hemos alcanzado altos grados de aseguramiento en salud que no se han traducido en niveles elevados de utilización de los servicios preventivos, o en la reducción de barreras de acceso para los pobres. En términos más generales, según la OPS, entre 2013 y 2014 si hubiesen existido servicios de acceso se habrían evitado 1.200.000 muertes en el continente. Un factor adicional es que algunos países deben afrontar no solo la falta de personal de salud, sino también una alta concentración de profesionales en los grandes centros urbanos y pocos en las áreas más desfavorecidas, en zonas rurales y en comunidades indígenas (OPS, 2017). En salud se ensaya una suerte de crisis paradigmática, en tanto no hay claros lineamientos programáticos ni liderazgos a nivel latinoamericano.

> Según la OPS, entre 2013 y 2014 si hubiesen existido servicios de acceso a la salud para pobres se habrían evitado 1.200.000 muertes en el continente americano.

1. OPS, 2017.
2. *Indigenous peoples, poverty and human development* (Gillette Hall y Harry Anthony Patrinos eds.), Palgrave-Macmillan, Londres, 2006.
3. OPS, 2017.
4. *Ibidem.*

Este texto, extraído de *La ¿nueva? estructura social de América Latina* (Siglo XXI editores, 2020) fue gentilmente cedido por los autores y la editorial.

Falencias esenciales

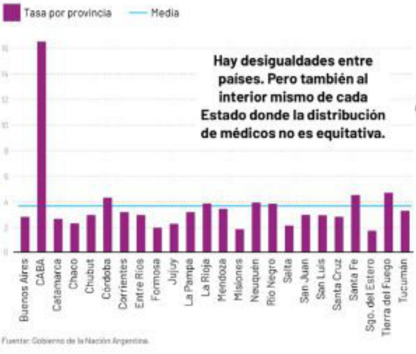
¿Cómo esperar vivir más tiempo y con buena salud si no tenemos acceso a la atención de nuestras necesidades médicas? Según la OMS, 57 países, ubicados principalmente en África y en Asia, enfrentan graves carencias de personal de salud. África Subsahariana es la región que tiene las más grandes dificultades: concentra el 11% de la población mundial, el 24% de la carga mundial de morbilidad –la pérdida de vidas o actividades humanas a causa de muertes precoces, enfermedades y discapacidades– y sólo ejerce allí el 3% del personal de salud. La situación es crítica también en 36 países que cuentan con menos de 2,3 médicos, enfermeros y parteras cada 1.000 habitantes.
Estos países no pueden atender sus necesidades básicas más indispensables: una cobertura del 80% de la vacunación contra la rubeola o garantizar un profesional calificado en todas las áreas. Si estas medidas no son atendidas rápidamente, la situación será catastrófica.

Cuba
82
médicos cada 10.000 habitantes

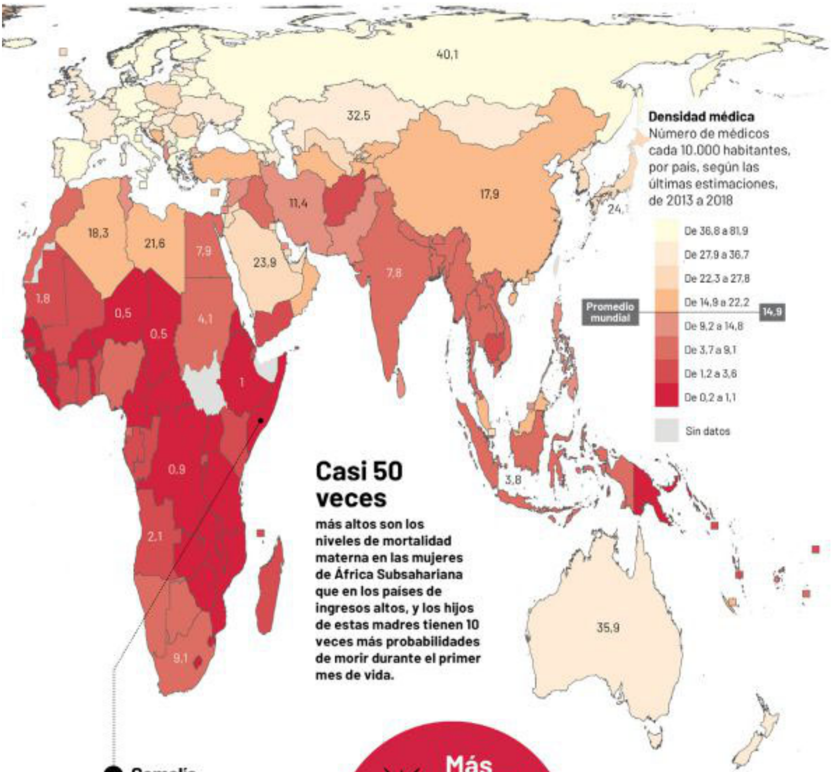
La medicina en Cuba, gran prioridad del gobierno desde la Revolución, es una referencia mundial: tiene la tasa más alta de médicos por habitante, más de una veintena de facultades y una enorme infraestructura hospitalaria y de policlínicas.
Cuba también es una influencia regional considerable, con la conformación de la ELAM (Escuela Latinoamericana de Medicina) de futuros médicos en beneficio de los países menos desarrollados.

Argentina: la distribución asimétrica

Tasa de médicos cada 1.000 habitantes, 2019



Fuente: Gobierno de la Nación Argentina.



Casi 50 veces

más altos son los niveles de mortalidad materna en las mujeres de África Subsahariana que en los países de ingresos altos, y los hijos de estas madres tienen 10 veces más probabilidades de morir durante el primer mes de vida.

Somalía 0,2

médicos cada 10.000 habitantes

La guerra civil, la falta de infraestructuras y la tasa más baja de médicos por habitante explican que Somalia tenga una de las tasas más altas del mundo de mortalidad materno-infantil.

Más del 90%

de los casos de paludismo que hay en el mundo cada año se producen en África, principalmente en niños menores de cinco años, según la OMS.

Cartografía: Proyección de Gall-Peters.
Fuente: The World Fact Book (cia.gov), Banco Mundial (data.worldbank.org), Insee (insee.fr).
© Courrier international

Argentina

DISPARIDADES PERPETUAS

Pese a ser universal, el sistema de salud argentino está lejos de ser equitativo. Su carácter fragmentado y dividido por ramas de actividad termina promoviendo distintos niveles de acceso a recursos humanos y tecnológicos como a la atención sanitaria e infraestructura hospitalaria. Desde el lugar de residencia hasta los niveles de ingreso, las desigualdades marcan los límites.

Verónica Ocvirk
Periodista.

Suele machacarse con que Argentina es un país con un "perfil epidemiológico dual": sufre, por un lado, los problemas de salud típicos de países en desarrollo (como mortalidad infantil y materna, enfermedades transmisibles, lesiones por accidentes de tránsito); pero por otro tiene una alta prevalencia de cánceres, enfermedades cardiovasculares y otras no transmisibles, un panorama más parecido al de los países desarrollados. En esa misma línea existen enfermedades –tuberculosis, Chagas, sífilis, hidatidosis, leishmaniasis, leptospirosis, hantavirus– que se ensañan particularmente con la pobreza. "Pero de esas no se habla por el mismo motivo de siempre: porque afectan sobre todo a sectores que no son considerados actores sociales", señala Hugo Spinelli, director del Instituto de Salud Colectiva de la Universidad Nacional de Lanús. El médico advierte que el tema de la desigualdad en salud no debe analizarse sólo por las estadísticas (porque si están muy aglutinadas pueden ocultar cosas), ni tampoco por la geografía política (porque si hacemos *zoom* al interior de cada jurisdicción podemos encontrar a la provincia de Jujuy en la provincia de Buenos Aires, o a la provincia de Buenos Aires en la provincia de Jujuy). "Hay que mirar distribuciones espaciales para comprender la desigualdad en toda su complejidad –explica–. Si no, estamos diciendo lo mismo de siempre".

Un sistema fragmentado

Argentina cuenta con una cobertura de salud implícita universal que brinda el subsistema público. Cualquier persona puede ser atendida gratuitamente en un hospital público, centro de atención sanitaria u otros efectores, un beneficio social que en parte es mérito de Ramón Carrillo, neurocirujano y primer ministro de Salud de la Nación que durante el gobierno de Juan Domingo Perón construyó 21 hospitales con una capacidad de 22.000 camas.

Ahora bien: universal y todo –porque como derecho humano y social de primer orden la salud está avalada en Argentina por la Constitución– ese acceso está lejos de ser equitativo. No podemos considerar al solo acceso como un concepto cerrado sin observar qué es lo que en la práctica sucede con la calidad del servicio y con la seguridad de los pacientes.

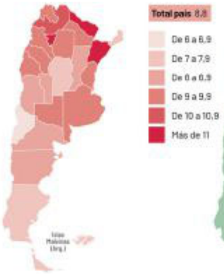
> La solución a la desigualdad en salud no pasaría tanto por nuevos hospitales como por un reparto más equitativo de la riqueza.

No es (sólo) un tema de dinero. Argentina gasta mucho en salud, cerca de un 10% del PIB de acuerdo con estimaciones recientes. Pero ese número tan abultado tiene por lo menos dos problemas: uno, que el grueso del gasto en la atención médica del sector público se financia con recursos provinciales (y en menor medida, municipales), y dos, que dentro de él aparecen también los gastos privados directos o "gastos de bolsillo" como copagos, medicamentos y estudios. El Estado Nacional no tiene entonces tanto poder como para generar políticas que apunten a alcanzar la equidad en salud con ese 10% del PIB.

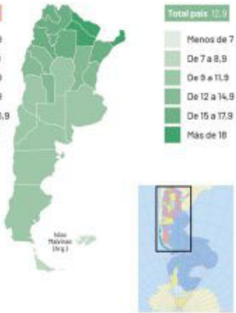
"Argentina tiene uno de los sistemas de atención más fragmentados que existen en el mundo, con un sistema público dividido en 24 jurisdicciones en las que en algunos casos se da una nueva división en municipios; y obviamen-

Razón de mortalidad materna
Cada 100.000 nacidos vivos, 2018

Tasa de mortalidad infantil
Cada 1.000 nacidos vivos, 2018



Nacidos vivos en mujeres menores de 20 años
En porcentaje, 2018



Fuente: Ministerio de Salud de la Nación, 2018.

te no van a ser iguales los recursos humanos, tecnológicos y de infraestructura que pueda tener un hospital municipal en un barrio rico como San Isidro que en otro de menores recursos como Florencio Varela. Tenemos salud pública, pero no un sistema nacional de salud", afirma Pablo Vinocur, sociólogo, director del Posgrado en Desarrollo Humano de FLACSO e integrante del Grupo PAIS (Pacto Argentino por la Inclusión en Salud). "A eso se agrega que Argentina es el único país del mundo en el que la seguridad social está organizada por ramas de actividad, y sabemos que las diferentes ramas implican diferentes ingresos para los trabajadores, en algunos casos incluso separados por jerarquías dentro de cada sector, por ejemplo en 'personal de dirección' y 'supervisores'. Entonces surge otra inequidad que se traslada a los recursos de los que cada obra social dispone para financiar las prestaciones a sus afiliados. Sumado al sistema privado, por definición fragmentado, todo implica una enorme debilidad de gobernanza del sistema en su conjunto", reflexiona.

Una visión integral

"Es un error asimilar salud con medicina, es como confundir abogado con justicia. Los médicos somos un taller mecánico que arregla las cosas, y eso a veces. Pero la salud pasa por otro lado", señala Spinelli. Sin ir más lejos: en Argentina 7 millones de personas no tienen servicio de agua potable, y casi 20 millones no cuentan con cloacas.

A principios de 2005 y dirigida por el epidemiólogo y sanitarista británico Michael Marmot la Comisión de Determinantes Sociales de la Salud de la OMS se dispuso a recoger y analizar la información disponible acerca de cómo factores como el empleo, la globalización, los servicios sanitarios, el género y el ambiente estaban forjando las desigualdades en salud. Y en 2008 publicó un informe (1) en el que entre otras cosas revela que las causas de la desigualdad no se deben tanto a factores biológicos o genéticos, además de que los llamados "estilos de vida" no estarían tan ligados a conductas personales y libres cuando tres cuartas partes de la humanidad no tienen demasiadas chances de elegir qué comer, ni cómo vestirse, ni en qué tipo de casa vivir ni con cuánta gente, y eso sin mencionar la oportunidad de tener un trabajo gratificante y que no enferme. Salud no tiene quien quiere, sino quien puede.

Así la solución a la desigualdad en salud no pasaría tanto por nuevos hospitales como por un reparto más equitativo de la riqueza; no por más médicos, sino por una mejora en las condiciones de empleo, trabajo, vivienda, educación y servicios sanitarios. "La historia nos ayuda a entender que la aparición de la desigualdad en salud no es fija ni inevitable", advierte el médico catalán Joan Benach (2), director del Grupo de Investigación en Desigualdades de Salud de la Universidad Pompeu Fabra. El investigador destaca que los principales determinantes de la mejora en la esperanza de vida que tuvo lugar durante el siglo XX hay que buscarlos en el desarrollo económico, en la mejora en las condiciones de vida y en la puesta en práctica de medidas de salud pública. "No caben excusas –concluye–, se nos va en ello nuestra salud".

1. *Closing the gap in a generation: Health equity through action on the social determinants of health*, www.who.int/social_determinants/final_report/csdh_finalreport_2008.pdf

2. Joan Benach, Montse Vergara y Carles Muntaner, "Desigualdades en salud: la mayor epidemia del siglo XXI", www.fuhem.es/papeles_articulo/desigualdad-en-salud-la-mayor-epidemia-del-siglo-xxi.

4. LIBERTADES

Derechos exclusivos

La democratización de los procesos políticos nacionales e internacionales, el reconocimiento de derechos fundamentales inalienables para las personas y la creación significativa de marcos legales y organizacionales que velan especialmente para su cumplimiento contrastan hoy con el retroceso que sufren varias democracias ya establecidas en el mundo. A la restricción de libertades ya adquiridas y la vulneración de los derechos de los ciudadanos se suman exclusiones anacrónicas que marginan aun más a sectores desfavorecidos de la sociedad.

Participación política

EL SUFRAGIO ¿UNIVERSAL?

Si bien desde el establecimiento del sufragio universal los procesos de democratización de la participación política han avanzado en todo el mundo, aún subsisten exclusiones graves. A los extranjeros y los menores de dieciocho años en muchos países no les reconocen el derecho al voto al tiempo que les imponen obligaciones cívicas.

Miguel Ángel Presno Linera

Catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Oviedo. Autor, entre otros, de *El derecho de voto. Un derecho político fundamental*, **Porrúa, 2012.**

La participación política y, en especial, la que se desenvuelve a través del derecho de voto está reconocida en los tratados internacionales sobre derechos humanos, tanto los de carácter global (Declaración Universal de Derechos Humanos, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos) como en los de ámbito regional (Convenio Europeo de Derechos Humanos, Convención Americana de Derechos Humanos-Pacto de San José, Carta Africana de Derechos Humanos, Carta Asiática de Derechos Humanos). En el ámbito estatal, el carácter universal de la participación política que suelen garantizar las constituciones a los nacionales tendría que implicar la exclusión de cualquier circunstancia personal, social, cultural, económica o política, para delimitar la condición de titular del derecho de participación, aunque es evidente que esta abstracción no es absoluta puesto que, por citar el ejemplo más gráfico, no pueden votar todas las personas nacionales: no pueden hacerlo los menores de edad ni tampoco, en numerosos ordenamientos o en algunos procesos electorales, las personas con determinadas discapacidades psíquicas o, en algunos países, como en Estados Unidos, las personas encarceladas.

Una ampliación con reservas

Uno de los hitos históricos en el proceso de universalización del sufragio fue el que estableció la incorporación de un colectivo que representa en la práctica la mitad, o más, de la población y que permanecía excluido: las mujeres. El cambio empezó legalmente en Nueva Zelanda (1893) y en los estados estadounidenses de Wyoming (1889), Colorado (1893) y Utah (1895) aunque no empezó a expandirse hasta los últimos años de la segunda década del siglo XX (Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, de 1917; Constitución del Reich alemán, de 1919; Enmienda Diecinueve a la Constitución de los Estados Unidos, de 1919) y primeros años de la década de los treinta (Constitución española de 1931). No deja de resultar sorprendente que el reconocimiento del sufragio femenino se retrasase en Francia hasta 1945 y en Suiza hasta 1971. Con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial el sufragio activo femenino aparece reconocido en los tratados internacionales relativos a los derechos de las personas y, en la actualidad, se da por existente.

Una segunda matización que es imprescindible realizar tiene que ver con el hecho de que en la mayor parte de los Estados los procesos de democratización de la participación política se han movido dentro de la esfera de la nacionalidad, de manera que esa expansión no ha alcanzado con plenitud a los extranjeros. Uno de los motivos tradicionales de este rechazo ha sido el temor al menoscabo que podría sufrir la soberanía nacional con la intervención en la toma de sus decisiones políticas de los nacionales de otro Estado. En la actualidad no se ha conseguido superar del todo esta prevención y, salvo algunos casos aislados, como mucho la abstracción de la condición de extranjero para el ejercicio de la participación electoral sólo se ha admitido en los comicios y, precisamente, por entender que en este caso no se adopta una decisión política que tenga que ver con el ejercicio de las funciones soberanas, reservadas a los nacionales. Algunos Estados reconocen la posibilidad de que ciertos extranjeros procedentes de países con pasado colonial común o con similitudes culturales participen en todos o la mayoría de los procesos electorales; es lo que sucede en Gran Bretaña con los nacionales de países de la Commonwealth y los irlandeses; en Irlanda y Australia con los británicos y en Portugal con los brasileños con "estatuto político especial".

La democratización de los procesos políticos, la globalización incontenible y el flujo constante de personas reclaman una ciudadanía más dinámica y abierta.

Finalmente, una minoría de Estados otorga plenos derechos políticos a los extranjeros: Nueva Zelanda lo hizo ya en 1975 aunque en 1993 se modificó la legislación para atribuirlo solo a los residentes permanentes que hayan vivido allí más de dos años. En América, lo contemplan Chile, Uruguay y Ecuador. Pero en muchos sistemas constitucionales el sufragio en todo tipo de elecciones está reservado a los nacionales y los propios tratados internacionales de ámbito universal insisten en la vinculación del sufragio a la nacionalidad.

Inclusiones pendientes

Pues bien, la democratización de los procesos políticos nacionales e internacionales, la globalización incontenible y el flujo constante de personas de unos países a otros convierten en anacrónicas estas exclusiones y reclaman la extensión de los derechos políticos a los no nacionales; en suma, una caracterización de la ciudadanía más dinámica y abierta porque en un Estado democrático los ciudadanos lo son por su relación jurídica con el Estado, por el conjunto de derechos y obligaciones que integran dicha relación, que no es la consecuencia sino el presupuesto de la ciudadanía. Y esta democracia basada en la igualdad formal, en tanto permite una mayor aproximación entre gobernados y gobernantes, debe convertirse en un modelo a emplear en todas las esferas de poder político del Estado, con lo que el reconocimiento de los derechos consustanciales a la ciudadanía política, y de modo especial el voto, ha de ponerse en conexión con el sometimiento de la persona a un ordenamiento determinado.

En tercer lugar, es necesario detenerse en la participación política de las personas menores de edad. Es sabido que existe una mayoría de edad general, que suele oscilar entre 18 y 21 años, y también una mayoría de edad electoral, entre 16 y 21 años, que, a su vez, conviven con numerosas disposiciones que habilitan a los menores, dependiendo de su edad y grado de madurez, a ejercer diversos derechos del máximo nivel: expresarse con libertad, asociarse, manifestarse, trabajar, agremiarse, participar en una huelga, contraer matrimonio, otorgar testamento, tomar decisiones sobre su salud; asimismo, están sujetos, en su caso, al pago de tributos, a responsabilidad penal siendo menores... Por estos motivos, parece conveniente reflexionar sobre una eventual reducción de la edad electoral por debajo de los 18 años, como ya ocurre en algunos países –Argentina, Austria, Brasil y Ecuador– y como solicitó la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, que instó, el 23 de junio de 2011, a todos los Estados a "estudiar la posibilidad de rebajar la edad para votar a los 16 años en todos los países y en todo tipo de elecciones". Pero, desafortunadamente, no basta con rebajar la edad para votar sino que el Estado también debe fomentar la participación de dicho grupo etario estableciendo espacios de aprendizaje y participación ciudadana.

Resulta oportuno cuestionarse finalmente si la participación debe ser exclusivamente un derecho o puede ser también un deber y aquí es llamativa la diferencia entre América y Europa: mientras en América en la mayoría de los Estados (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Perú y Uruguay) el sufragio ha tenido carácter obligatorio ya desde las primeras décadas del siglo XX, eso no ha ocurrido en la mayoría de los países europeos, salvo en Bélgica, Grecia y Austria.

La existencia del voto obligatorio no implica en sí un menoscabo del carácter libre del sufragio, pues la posibilidad de decantarse por una u otra opción política permanece incólume, al tiempo que también cabe no decidirse por alguna fórmula determinada, mediante el voto en blanco o el voto nulo. No obstante, y como principio, resulta más acertado que no se imponga el sufragio como un acto obligatorio, pues de esta manera la autodeterminación política de los ciudadanos se extiende también al hecho mismo de emitir o no el voto, y en este derecho fundamental alcanza mayor valor su dimensión como derecho subjetivo de los individuos que la de función pública al servicio del Estado.

Democracias declinantes

Países con democracias establecidas* que sufrieron retrocesos democráticos en los últimos años en:

Funcionamiento gubernamental
Funcionarios de gobierno elegidos, fuertes salvaguardas contra la corrupción, apertura y transparencia.

Libertad de expresión y creencias
Libertad de los medios, religiosa, académica y personal.

Justicia
Independencia judicial, debido proceso, seguridad física e igualdad ante la ley.

25 democracias sufrieron graves retrocesos

- Estados Unidos
- Gran Bretaña
- España
- Bélgica
- Suiza
- Israel
- Luxemburgo
- Alemania
- Austria
- Islandia
- Botsuana
- Barbados
- Irlanda
- Nauru
- México
- Portugal
- Francia
- Chipre
- Dinamarca
- Belice
- San Cristóbal y Nieves
- Tuvalu
- Costa Rica
- Mauricio
- Bahamas

*Según el Freedom House, por democracias establecidas se entiende aquellos países que han tenido durante 20 años consecutivos un estatus libre previo al inicio de los catorce años de retrocesos democráticos.
Fuente: Informe del Freedom in the World 2020, www.freedomhouse.org.

Periodismo y democracia

EL VIRUS DE LA DESINFORMACIÓN

Los ataques sin tregua contra la inalienable libertad de informar ya no se limitan a los regímenes totalitarios, se extienden a países en los que, hasta hace poco, era impensable que los periodistas se enfrentasen a serias amenazas contra la libertad de expresión. Un deterioro que atenta a fin de cuentas contra la sociedad en su conjunto porque sin periodismo libre no hay democracia posible.

Edith Rodríguez Cachera
Vicepresidenta de Reporteros Sin Fronteras, España.

El libre ejercicio del periodismo lleva años sufriendo un fuerte desgaste en todo el mundo que ha causado estragos en la libertad de los reporteros para informar sin trabas, así como en la libertad de los ciudadanos para ser informados, ambas consagradas en el Artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Con una experiencia de décadas observando la libertad de prensa en todo el planeta, Reporteros Sin Fronteras (RSF) constata con preocupación que cada vez son menos los países en los que el ejercicio del periodismo goza de buena salud: solo el 20% disfruta de condiciones buenas o muy buenas para la libertad de información.

La creciente expansión y agresividad de regímenes y líderes autoritarios; la extrema polarización de la política y su impacto en los medios de comunicación; la crisis de confianza de los ciudadanos en la prensa y los periodistas, merced a un auge sin precedentes de la desinformación y las *fake news*; la precariedad laboral y la concentración extrema de los medios, y la extensión de sistemas tecnológicos de vigilancia y control son las principales amenazas que colocan a la libertad de prensa en una situación crítica a nivel mundial y que exigen respuestas tan urgentes como contundentes. La pandemia de coronavirus no ha hecho más que agravar este deterioro, pues ha sido la coartada perfecta para que todos los gobiernos del mundo, de los más autoritarios a los más democráticos, endurezcan sus leyes y sus prácticas cotidianas contra los periodistas.

La enconada hostilidad contra la inalienable libertad de informar ya no se limita a los regímenes totalitarios, sino que se extiende a países en los que, hasta hace poco, era impensable que los periodistas se enfrentasen a discursos de odio e intimidaciones, hoy desgraciadamente normalizados. Los depredadores de la libertad de prensa, señalados repetidamente como tales por RSF, ya no solo habitan en las dictaduras, sino que aprovechan toda la grandeza de la democracia para acabar, desde adentro, con uno de sus pilares más sagrados.

Voces silenciadas

Periodistas y miembros de los medios de prensa asesinados en el mundo, 2019

Fuente: Federación Internacional de Periodistas, 2019.

Persecución, violencia y censura

La extrema polarización política, de la que no han sabido aislarse correctamente muchos medios de comunicación, unida al señalamiento que muchos líderes populistas hacen constantemente contra la prensa han creado un clima de odio y hostilidad contra el periodista que se plasma en agresiones a pie de calle, cada vez que equi-

Informar bajo amenaza

Grados de libertad de prensa en el mundo, 2020

Fuente: Reporteros Sin Fronteras, 2020.

pos de televisión van a hacer coberturas de protestas populares. Junto con el periodismo de manifestaciones, el de investigación se ha transformado en uno de los más arriesgados para la prensa, ya que ha costado la vida a varios periodistas en los últimos años, como la maltesa Daphne Caruana o el eslovaco Jan Kuciak, asesinados en suelo europeo: un hecho insólito.

La figura del corresponsal comienza a tornarse en un lujo y, en consecuencia, se multiplican los "agujeros negros" informativos.

Si las democracias occidentales se están contagiando de un caldo de cultivo contrario a la libertad de información y hostil al periodismo, en los países con baja calidad democrática la situación es alarmante: China, Arabia Saudita, Egipto o Turquía se mantienen como las mayores cárceles de reporteros del mundo, mientras que Irán ostenta el triste récord de ser el país que más periodistas condena a muerte. En África, las condiciones de los periodistas presos son tan dramáticas que RSF ha tenido que hacer un llamamiento especial para la liberación de todos, por los enormes riesgos para la salud que estaban corriendo con la pandemia de Covid-19. India, por su parte, sigue siendo uno de los países que más persigue a la prensa y en el que más se asesina a periodistas.

Entre los países de habla hispana, preocupa especialmente México –con más de 130 periodistas asesinados en los últimos 10 años– que se ha consolidado como el país sin conflicto bélico más mortífero para la prensa. Las condiciones de persecución, violencia y censura son también alarmantes en Centroamérica, donde los periodistas de El Salvador, Honduras, Nicaragua y Guatemala tienen que hacer cada vez más gestas heroicas para trabajar de forma independiente.

> Cada vez son menos los países en los que el ejercicio del periodismo goza de buena salud: solo el 20% disfruta de condiciones buenas o muy buenas para la libertad de información.

México

lidera el listado de países más peligrosos para la prensa con diez asesinatos de periodistas en 2019. Todos ellos trabajaban en investigación sobre corrupción y organizaciones del narcotráfico.

Un arma de doble filo

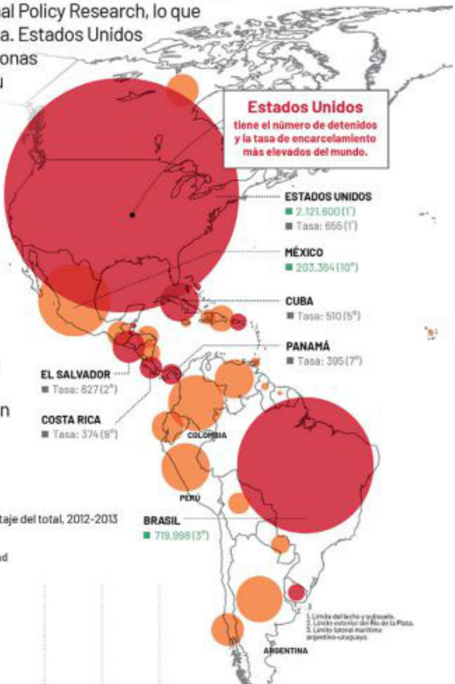
La desinformación, que ha alcanzado dimensiones insospechadas, se ha transformado en un arma de doble filo, pues no sólo torna sospechoso al periodismo serio a ojos del lector, sino que es utilizada maliciosamente por los regímenes autoritarios para perseguir la información veraz, so pretexto de que no lo es.

En este contexto, al que se añaden la concentración extrema de los medios de comunicación y la precariedad de un sector lastrado severamente por las sucesivas crisis económicas, numerosas zonas y conflictos del mundo quedan sin cubrir, la figura del corresponsal comienza a tornarse en un lujo y, en consecuencia, se multiplican los "agujeros negros" informativos, esos lugares del mundo sobre los que nadie informa.

La confluencia de todas estas amenazas y la certeza de que este deterioro está lejos de mejorar lleva a llamar más que nunca la atención sobre la urgente necesidad de proteger la libertad de prensa, en serio peligro en la mayor parte del mundo, así como enfatizar la urgencia de que sea incluida como prioridad absoluta en las agendas políticas de los gobernantes democráticos ya que sin periodismo libre, no hay democracia.

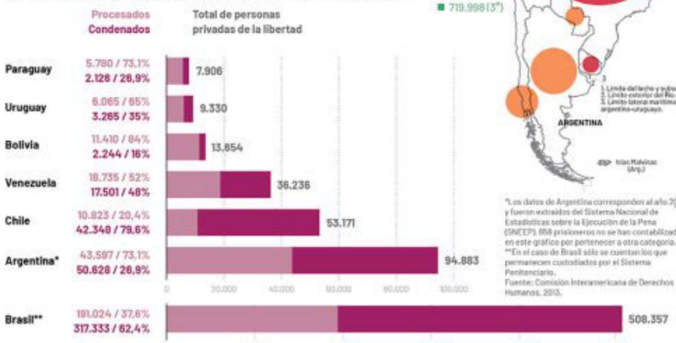
Encarcelamiento

Más de 11 millones de personas están en este momento en prisión en alguna parte del mundo, según el World Prison Brief, la base de datos en línea del Institute for Criminal Policy Research, lo que equivale en cifras a la población belga. Estados Unidos concentra cerca del 20% de las personas encarceladas del mundo mientras su población no representa más que el 5% de la global. Es el país con mayor población carcelaria y la tasa más elevada de encarcelamiento. Este triste récord se explica por la "guerra contra las drogas" y una política represiva establecida en el país en los años 70. En Tailandia se repite un escenario similar: cuarto en tasa de encarcelamiento, en este país el 70% de los detenidos cumple una pena vinculada a los estupefacientes, según la Federación Internacional para los Derechos Humanos.

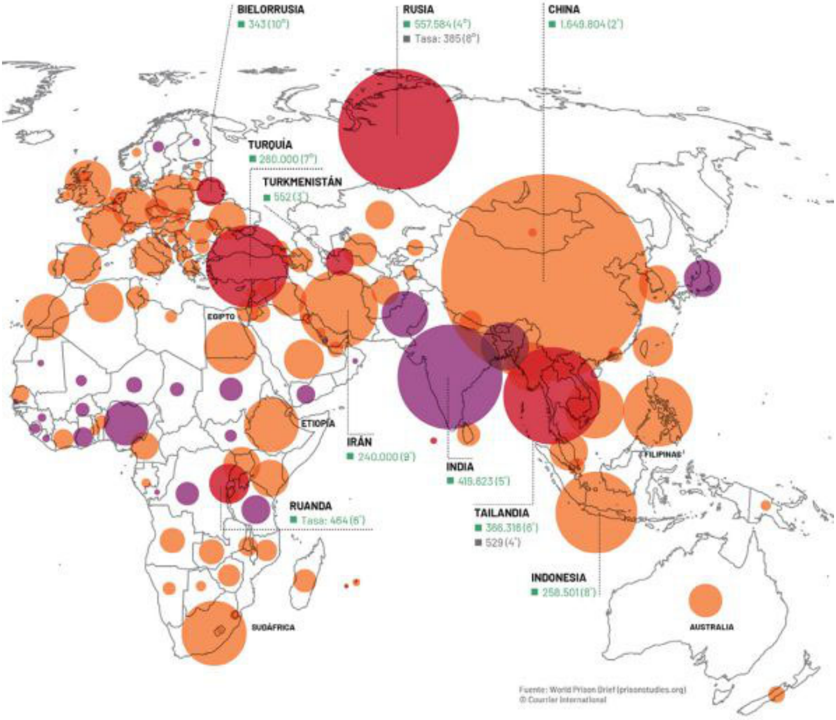


Presos en América Latina

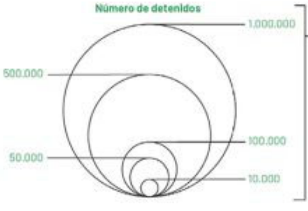
Personas en prisión preventiva y condenados, en porcentaje del total, 2012-2013



*Los datos de Argentina corresponden al año 2016 y fueron extraídos del Sistema Nacional de Estadísticas sobre la Ejecución de la Pena (SNEEP). 658 prisioneros no se han contabilizado en este gráfico por pertenecer a otra categoría.
**En el caso de Brasil sólo se cuentan los que permanecen custodiados por el Sistema Penitenciario.
Fuente: Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2013.



Fuente: World Prison Brief (prisonstudies.org)
© Courrier International



Cómo leer este mapa:

■ El tamaño de los círculos representa el número de detenidos (por país).
Sólo figuran las cifras de los 10 países de población carcelaria más grande del mundo.

■ El color de los círculos indica **la tasa de encarcelamiento** (por país y para 100.000 habitantes).
Sólo figuran las cifras de los 10 países con la tasa más elevada del mundo (los Estados de menos de 500.000 habitantes no se han tenido en cuenta).

Tasa de encarcelamiento

- Más de 300
- De 60 a 299
- Menos de 60

Discriminación penal y policial

PRISIONEROS DEL PREJUICIO

Estados Unidos concentra la cuarta parte de los presos del mundo. La gran mayoría pertenece a los sectores más desfavorecidos del país. Según la Oficina de Estadísticas de Justicia, la probabilidad de que un blanco vaya a prisión es seis veces menor que la de un afrodescendiente y casi tres veces menor que la de un latino. En el pabellón de la muerte, se reproduce el mismo fenómeno.

Mariela Belski
Directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.

En 185 días, diez hombres condenados a muerte fueron ejecutados en distintas cárceles de Estados Unidos, la mayoría de ellos mediante una inyección letal. Se ejecutó uno cada 26 días. La pena de muerte es legal en veintiocho estados de la gran potencia. Desde 1976, cuando la Corte Suprema estadounidense restableció la pena capital, hasta el 17 de julio de 2019, 1.515 personas fueron ejecutadas y otras 170 condenadas a muerte resultaron absueltas, aunque en algunos casos la sentencia favorable llegó tarde, después de haber sido ejecutadas. A nivel mundial, Estados Unidos es el sexto entre los trece países que llevaron a cabo ejecuciones de forma ininterrumpida entre 2015 y 2019, según el último informe de Amnistía Internacional (1). Durante 2019 aplicó la pena capital en 22 ocasiones, situándose detrás de China, Irán, Arabia Saudita, Irak y Egipto, en ese orden, aunque disminuyó el número de ejecuciones (de 25 a 22) y las condenas a muerte (de 45 a 35) con respecto a 2018 (2).

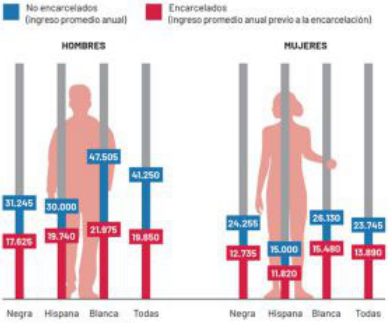
Amnistía Internacional calcula que en el mundo hay 10.000.000 de personas en prisión, de las cuales 3.200.000 no han sido aún juzgadas.

Según el Centro para la Información sobre la Pena de Muerte (Death Penalty Information Center), el 55,9% de las personas ejecutadas desde 1976 en Estados Unidos eran blancas, el 34% afroamericanas, el 8,5% latinas y el 1,6% de otro origen. La Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color (NAACP, por su sigla en inglés) destacó que al 1 de enero de 2019 había 2.620 personas condenadas a muerte en Estados Unidos. Sin embargo, en el 96% de los estados en los cuales se investigó el origen de la condena, se halló un patrón de discriminación vinculado al origen de la víctima, del acusado o de ambos. En el llamado pabellón de la muerte, a la espera de su ejecución, había hasta octubre de 2018 en las cárceles estadounidenses un 42% de blancos, un 41,5% de afroamericanos, un 13,4% de latinos y un 2,9% de otros orígenes. C. Loury, profesor de la Universidad de Brown, consideró que el "sistema penitenciario de Estados Unidos es un Leviatán sin parangón en la historia de la humanidad", porque "nunca antes un país supuestamente libre ha negado la libertad básica a tantos de sus ciudadanos" (3). Para respaldar esta opinión, la Organización no Gubernamental The Sentencing Project indicó que en 2016 había aproximadamente 2.200.000 detenidos en los casi 5.000 centros penitenciarios y cárceles del país, el equivalente a casi la cuarta parte de los presos del mundo. Amnistía Internacional calcula que en el mundo hay 10.000.000 de personas en prisión, de las cuales 3.200.000 no han sido aún juzgadas. En 2018 la tasa de encarcelamiento de Estados Unidos ascendía a 698 presos por cada 100.000 habitantes, seis veces superior a la de su vecino Canadá, siete veces más que Francia y doce veces más que Japón. Así, Estados Unidos lidera el índice de países con un mayor porcentaje de sus ciudadanos cumpliendo una pena de prisión.

Para The Sentencing Project, uno de los factores que más contribuyen al aumento de detenidos es el endurecimiento de las condenas por reincidencia. En 2012, según el Departamento de Justicia, esa cifra alcanzaba a casi 160.000 personas cuando en 1984 no llegaban a ser 35.000. Las estadísticas oficiales indican que un tercio de los detenidos en las cárceles estatales son delincuentes violentos, condenados por

Pobres y encarcelados

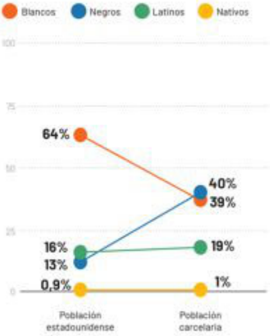
Ingresos promedio anuales anteriores al encarcelamiento de personas entre 27 y 42 años en prisiones estatales estadounidenses, comparados con los ingresos de personas de la misma edad no encarceladas, por raza, etnia y género, en dólares, 2014



Fuente: Prison Policy Iniciative, 2014.

Detrás de las barreras: disparidades étnico-raciales

Cantidad de prisioneros por raza y etnia en el total de la población carcelaria estadounidense, 2010



Fuente: Prison Policy Iniciative, 2010.

asesinato, violación o robos, pero los restantes cometieron delitos contra la propiedad y vinculados a las drogas.

En 2000, 3 de cada 200 jóvenes blancos estaban en prisión, mientras que entre los afrodescendientes la proporción era 1 de cada 9. Según el Centro de Investigación Pew en 2018 la población carcelaria era en un 33% afroamericana y en un 30% blanca. Sin embargo, los blancos representan el 60% de la población adulta del país y los afroamericanos, el 13%.

La gran mayoría de los presos en cárceles del país provienen de los sectores más desfavorecidos, que en una importante proporción son de la comunidad afroamericana. El Pew publicó en 2018 que uno de cada 20 jóvenes afroamericanos, de alrededor de 30 años, estaba preso en una cárcel estadual o federal de Estados Unidos. Según la tasa de encarcelamiento publicada por la Oficina de Estadísticas de Justicia (4), la probabilidad de que un blanco vaya a prisión es seis veces menor que la de un afrodescendiente y casi tres veces menor que la de un latino. "El fervor de Estados Unidos por la disciplina social relega a estos hombres a una casta inferior de por vida", aseguró Loury. Según el Pew, los afrodescendientes tienen el doble de probabilidades de ser pobres o de no tener empleo que los blancos, y en términos de patrimonio neto, los hogares blancos son por lo menos 10 veces más ricos que los afroamericanos, de acuerdo a las estadísticas de 2017 de la Reserva Federal de Estados Unidos.

George Floyd y el #BlackLivesMatter

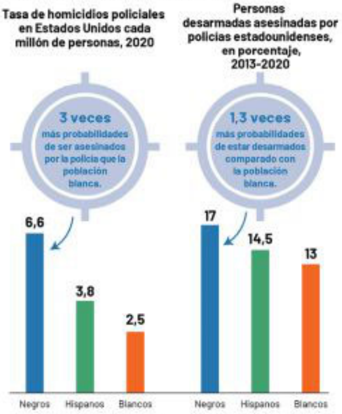
"No puedo respirar" fueron las palabras que pronunció George Floyd, un afroamericano de 46 años, mientras moría asfixiado el 25 de mayo de 2020, en una calle de Minneapolis, bajo la rodilla de un agente de policía en Estados Unidos que lo había arrestado por, supuestamente, intentar hacer una compra con un billete de 20 dólares falsos.

La frase se convirtió desde ese día en un grito de millones de personas de diversos orígenes, aunque principalmente afroamericanas, en reclamo de justicia y la exigencia de reformas policiales tanto en el país como en el resto del mundo. Las mismas tres palabras ya habían provocado un levantamiento social similar cuando las dijo Eric Garner antes de que la policía lo asesinara en Nueva York el 17 de julio de 2014 después de estrangularlo en medio de un operativo de detención.

En el 96% de los estados en Estados Unidos en los cuales se investigó el origen de la condena, se halló un patrón de discriminación vinculado al origen de la víctima, del acusado o de ambos.

El homicidio de George Floyd derivó en una muestra de solidaridad sin parangón desde los tiempos del Movimiento por los Derechos Civiles de Estados Unidos. #BlackLivesMatter ("La vida de las personas negras importa"), un sím-

Afroamericanos en la mira



Fuente: https://mappingpoliceviolence.org

ple llamado a la igualdad social, se convirtió en un renovado lema para clamar por una revisión de la actuación policial, algo que apoyan dos tercios de la población estadounidense. La respuesta a las protestas llevadas a cabo en Estados Unidos para poner fin a la violencia policial consistió, sin embargo, en más violencia por parte de las fuerzas policiales (5).

Pero pese a la violenta reacción policial, las movilizaciones populares lograron algunos avances en comparación con casos anteriores, como, por ejemplo, que los agentes implicados en el operativo que terminó con la vida de Floyd hayan sido acusados formalmente. Derek Chauvin, el policía que puso su rodilla sobre el cuello de la víctima durante más de ocho minutos provocando su muerte, fue separado de la fuerza y detenido bajo el cargo de homicidio. Fuera de Minneapolis, la ciudad donde Floyd fue asesinado, las autoridades de Los Ángeles, Boston y Seattle plantearon un recorte en el presupuesto policial, mientras que en Denver, Houston, Austin, Washington D.C., Chicago y Phoenix prohibieron el uso de técnicas de inmovilización por el cuello como la aplicada a Floyd. Inclusive el presidente Donald Trump dictó una orden relativa a impedir esta acción, una medida positiva pero insuficiente.

En Estados Unidos, como en todo el mundo, los manifestantes exigieron que la comunidad afroamericana sea tratada igualitariamente y que la policía rinda cuentas por su actuación. Para sostener el reclamo basta destacar que casi 1.000 personas murieron en 2019 a causa de disparos de armas de fuego de agentes encargados de hacer cumplir la ley. Los datos recabados por Amnistía Internacional indicaron que las personas afroamericanas sufrieron de forma desproporcionada el uso de medios letales por parte de la policía, tanto que representan el 24% de las víctimas mortales pese a constituir el 13% de la población, según la ONG Mapping Police Violence.

Pero el problema lejos está de solucionarse. Luego de las protestas, se conocieron otros casos como por ejemplo el de Jacob Blake, un afroestadounidense que fue baleado por la espalda por la policía delante de sus hijos. "Nadie debería levantarse por la mañana preguntándose si ese será el día en que un policía acabe con su vida, pero las personas negras viven con esa dolorosa y traumática realidad", aseguró Kristina Roth, responsable superior de Programas de Justicia Penal de Amnistía Internacional Estados Unidos.

El uso de la fuerza letal por parte de la policía suscita una gran preocupación en materia de derechos humanos. El derecho internacional permite a la policía utilizar la fuerza letal sólo como último recurso para protegerse a sí mismos o a otros de la muerte o de lesiones graves. Además, exige que únicamente se pueda recurrir a la fuerza cuando no hubiera otros medios para alcanzar el objetivo legítimo. Si el uso de la fuerza es inevitable, no debe ser más del necesario y debe ser proporcionado. El castigo infligido a Floyd fue claramente innecesario y desproporcionado.

Rivales que se igualan

Pese a las históricas diferencias políticas y diplomáticas entre Estados Unidos y Rusia, el poco respeto por los derechos humanos de algunos sectores los iguala. La administración estadounidense de Donald Trump adoptó en 2019 políticas y prácticas que constituyeron ataques discriminatorios contra los derechos humanos de las personas y comunidades más vulnerables del país. A nivel nacional e internacional, procuró reducir las protecciones a los derechos sexuales y reproductivos, como también el resguardo de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI) frente a actos de discrimina-

Gatillo fácil

Cantidad de muertes perpetradas por la policía estadounidense, 2015-2020

La medición fue tomada del 1 de enero al 30 de junio de cada año.

Fuente: https://mappingpoliceviolence.org

ción. En la frontera con México, infringiendo las leyes nacionales y el derecho internacional, las autoridades estadounidenses detuvieron, maltrataron y rechazaron a decenas de miles de solicitantes de asilo que pedían la protección internacional. Niños, niñas y adolescentes no acompañados, familias, integrantes del colectivo LGBTI y otras personas sufrieron abusos al quedar bloqueadas en el norte mexicano, así como alojadas en centros de detención de inmigrantes en Estados Unidos.

Por su parte, en la Federación Rusa el historial en materia de derechos humanos continuó deteriorándose en 2019, el año en que se cumplieron dos décadas de liderazgo de Vladimir Putin al frente del país. Uno de los aspectos en los que más se reflejó esta situación fue en la restricción sistemática del derecho a la libertad de expresión, de asociación y de reunión pacífica, tanto en la ley como en la práctica. Quienes intentan ejercer este derecho se exponen a sufrir represalias en forma de hostigamiento y malos tratos policiales, detenciones arbitrarias, fuertes multas y, en algunos casos, procesamiento y cárcel. Cientos de miembros de los Testigos de Jehová fueron perseguidos por su fe y otras minorías vulnerables también afrontaron situaciones de discriminación y persecución. Además, la tortura continuó siendo generalizada, al igual que la impunidad de sus autores. La violencia contra las mujeres sigue estando muy extendida y no se aborda debidamente. En tanto, la discriminación y el hostigamiento a personas del colectivo LGBTI siguieron prevaleciendo, como también el uso reiterado de la homófoba "ley sobre propaganda gay" para reprimir su libertad de expresión. Las amenazas contra activistas de los derechos LGBTI son habituales y sus autores gozan de impunidad. Las crecientes pruebas de tortura, secuestro y asesinato de gays a manos de las autoridades de la región de Chechenia fueron ignoradas sistemáticamente por las autoridades federales. A fines de 2019, por ejemplo, la activista LGBTI Yulia Tsvetkova, de la región de Komsomolsk del Amur, en el extremo oriental de Rusia, fue acusada de producir y distribuir material pornográfico –un delito que conlleva hasta seis años de prisión– y sometida a un arresto domiciliario, levantado recién cinco meses después, por publicar en Internet sus ilustraciones de genitales femeninos que reafirmaban la positividad del cuerpo.

El complejo camino hacia la abolición

La aplicación de la pena de muerte en el mundo durante 2019 mostró que el impulso hacia la abolición sigue su curso a pesar de que algunos países, tanto desarrollados como en vías de desarrollo, van en contra de esta tendencia. El mismo número que en 2018, aunque la cantidad de muertes disminuyó un 5% (de 690 a 657) en comparación con 2018 hasta descender a la cifra más baja registrada en al menos 10 años, un camino descendente que comenzó en 2015 (6). Hubo reducciones significativas del número de ejecuciones en Egipto, Japón y Singapur, que son firmes partidarios de la pena de muerte. Además, Irán, que es el segundo país del mundo en número de ejecuciones, aplicó esta pena en menos ocasiones.

Policías sin castigo

Cantidad de policías estadounidenses sin proceso judicial por las muertes perpetradas en ejercicio, en porcentaje. 2013-2020

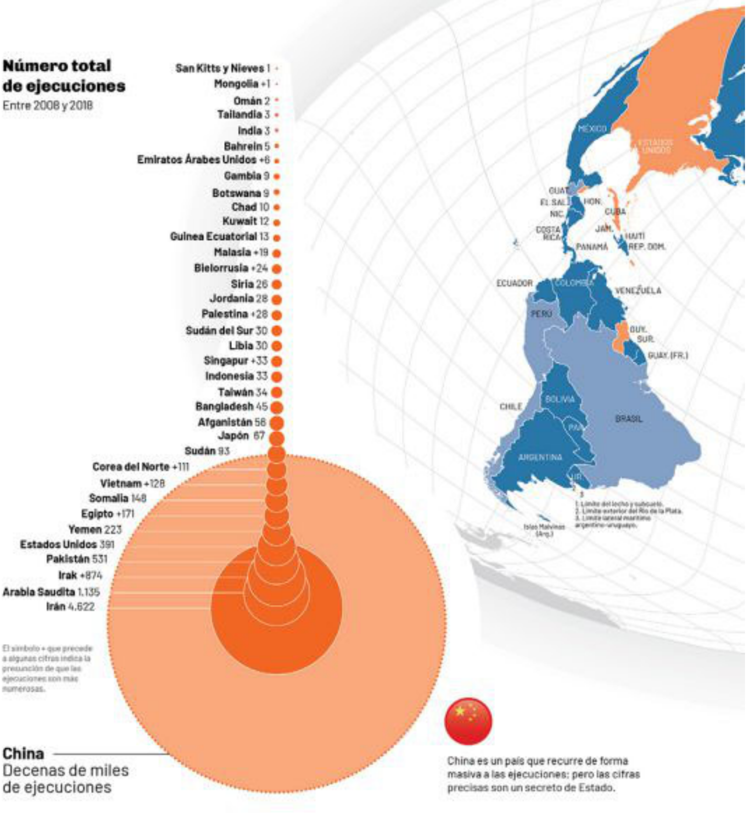
Fuente: https://mappingpoliceviolence.org

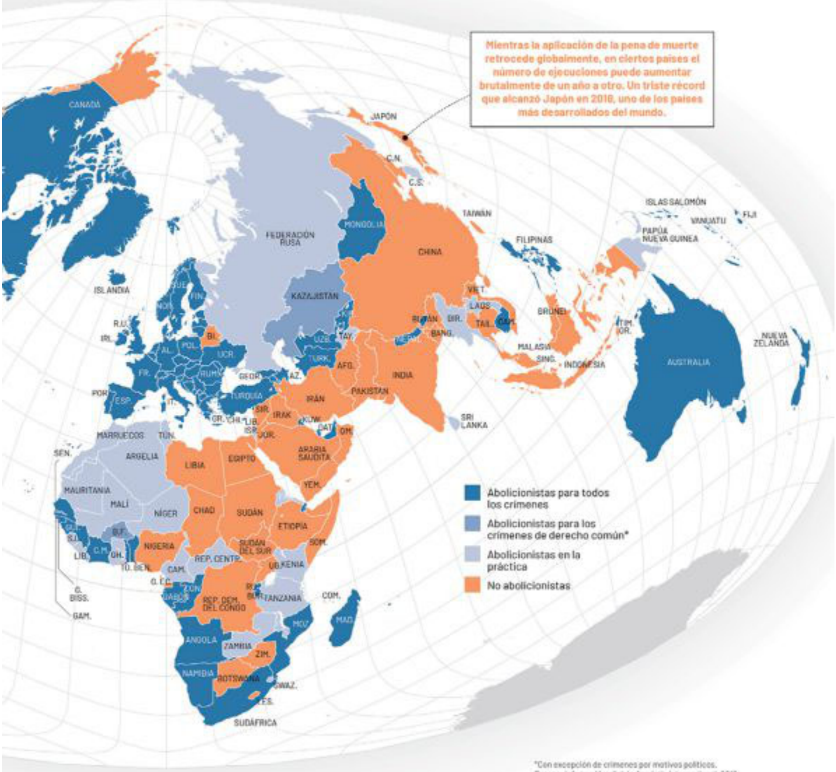
Sin embargo, algunas otras naciones se resisten a la abolición total: Arabia Saudita, Irak, Sudán del Sur y Yemen incrementaron las ejecuciones con relación a 2018, y Bahrein y Bangladesh, por su parte, las reanudaron tras un año de interrupción. La falta de transparencia de varios países dificultó, por ejemplo, hacer una valoración completa del uso de la pena capital en el mundo. Las principales naciones que llevan a cabo ejecuciones, como China, Corea del Norte y Vietnam, restringen el acceso a la información y ocultan el alcance de su uso. En 2019 China volvió a condenar a muerte y ejecutar a miles de personas, por lo que es el principal verdugo del mundo. Pero las cifras sobre la pena de muerte continúan clasificadas como secreto de Estado, por lo que es imposible llevar a cabo una evaluación independiente y verificar las tendencias y las afirmaciones de sus autoridades sobre la limitación del castigo a un pequeño número de casos. ▢

1. https://amnistia.org.ar/wp-content/uploads/delightful-downloads/2020/04/Pena-de-muerte-2019.pdf
2. *Ibídem.*
3. https://www.un.org/es/chronicle/article/los-nuevos-intocables-crimen-castigo-y-raza-en-los-estados-unidos
4. https://www.bjs.gov/content/pub/pdf/p17.pdf
5. Amnistía Internacional identificó más de 125 casos en los que los agentes utilizaron gases lacrimógenos, balas de goma, proyectiles de gas pimienta y bastones contra manifestantes
6. Según datos de Amnistía Internacional.

Pena de muerte

Según Amnistía Internacional, 54 países aplicaron la pena de muerte en 2018. Pero al año siguiente, el porcentaje de ejecuciones cayó un 31% hasta alcanzar un total de 690 ejecuciones en 20 países, la cifra más baja registrada desde hacía diez años. Un balance que no tiene en cuenta a China, donde las cifras constituyen todavía un secreto de Estado.





*Con excepción de crímenes por motivos políticos.
Fuente: Informe Mundial de Amnistía Internacional, 2019.
© Courrier International

Delito e infancia

CONDENADOS A LA MARGINALIDAD

La incursión en el delito de menores de edad de los sectores más vulnerables es una realidad compartida por gran parte del mundo. Pero la situación se agrava cuando el área legislativa y judicial adolece de serias falencias para abordar un tema tan delicado. Es el caso de Argentina, que en 2013 fue condenada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por aplicar penas de prisión perpetua a adolescentes.

Claudia Cesaroni

Abogada, magister en Criminología. Autora, entre otros, de *La vida como castigo. Los casos de adolescentes condenados a prisión perpetua en la Argentina* (Norma, 2010) y de *Masacre en el Pabellón Séptimo* (Tren en movimiento, 2013).

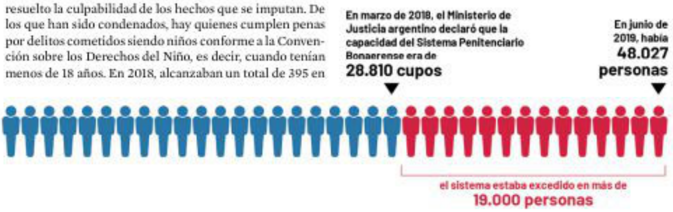
En Argentina, la situación en las cárceles evidencia un marcado sesgo de injusticia social. Según datos de la Procuración Penitenciaria de la Nación, cerca de 100.000 personas se encontraban, a fines de 2020, privadas de la libertad y la tasa de encarcelamiento, que alcanzaba los 213 cada 100.000 habitantes, ubicaba al país en una situación notablemente más grave que la de otros Estados de la región como Paraguay, Venezuela o México.

Las cárceles no están llenas de violadores y asesinos, sino mayormente de personas acusadas por cometer delitos contra la propiedad –asociados en la inmensa mayoría de los casos a las condiciones de inequidad social– y de transgresiones a las leyes que reprimen el consumo de drogas y su venta minorista. La mayor parte de ellos son varones, argentinos, jóvenes, solteros, urbanos, pobres con baja formación educativa o con trabajos precarizados. La mitad de los mismos son jurídicamente inocentes, es decir, han sido procesados con prisión "preventiva", un modo de anticipar el castigo penal cuando todavía no se ha resuelto la culpabilidad de los hechos que se imputan. De los que han sido condenados, hay quienes cumplen penas por delitos cometidos siendo niños conforme a la Convención sobre los Derechos del Niño, es decir, cuando tenían menos de 18 años. En 2018, alcanzaban un total de 395 en todo el país (1). De ellos, 58 cumplían condenas superiores a los diez años de cárcel.

Penas ilegales

Argentina fue denunciada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en marzo de 2002 por aplicar penas de prisión perpetua a niños, es decir, a personas que al momento de cometer delitos tenían menos de 18 años de edad. Los casos denunciados tenían patrones comunes: condenas impuestas desde 1999 a adolescentes que vivían en barrios muy humildes, incorporados desde muy pequeños por sus hermanos o compañeros mayores a la comisión de delitos contra la propiedad, en el marco de una situación socioeconómica que sumergía a la mitad de la población de niñas, niños y adolescentes en la pobreza (2). Las penas impuestas a un puñado de adolescentes que participaron en hechos graves, en ese contexto, fueron las que entonces se denominaban "prisión perpetua". Un tipo de pena que permitía obtener libertad condicional recién a los veinte años de transcurrida. Si por algún motivo, esa libertad condicional no se obtenía, el límite temporal eran los veinticinco años de prisión efectiva.

Esas condenas fueron denunciadas porque se aplicaron a adolescentes del mismo modo que a los adultos. En Ar-



gentina, los adolescentes son juzgados con un régimen penal especial, distinto al que se aplica a partir de los 18 años, cuando adquieren la mayoría de edad. A las personas que tienen menos de 18 años al momento de cometer el delito que se les imputa se les aplica el Régimen Penal de la Minoridad, Ley N° 22.278. Y un problema que todavía no se ha resuelto es que esa ley la escribieron en los años ochenta, bajo la última dictadura militar argentina. Esta ley dice expresamente que, al momento de analizar qué decisión tomar con respecto a una persona menor de 18 años que ha cometido delitos, y luego de un año de tratamiento tutelar, conforme a los resultados de ese tratamiento, los jueces podrán: absolver (no importando el delito cometido), aplicar la pena prevista para la tentativa del delito de que se trate (es decir, una pena notablemente menor, como si el delito no se hubiera cometido) o aplicarla misma pena que a un adulto. Aunque sea una ley de la dictadura, tiene algunos aspectos que les permiten a los jueces actuar de un modo que no agrave la situación de los adolescentes al darles la opción de absolver o de imponer "la pena prevista para la tentativa", es decir, una pena reducida.

Ahora bien, desde 1994 la Convención sobre los Derechos del Niño tiene jerarquía constitucional en Argentina. Es decir, tiene preeminencia sobre cualquier otra ley. Y la Convención, entre muchas otras cosas, dice que siempre, en todos los casos, si se decide aplicar pena de prisión a un adolescente, debe ser el último recurso y por el menor plazo que proceda. Y eso es lo que los jueces "de menores" de Argentina, desde 1999 hasta la fecha no hicieron.

En 2002, los casos fueron denunciados ante la CIDH y en 2010 ésta recomendó solucionar la situación de los jóvenes condenados a prisión perpetua en nuestro país. Como el Estado no lo hizo, se elevó el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que emitió una sentencia condenatoria contra Argentina el 14 de mayo de 2013. Mientras las burocracias locales e interamericanas tomaban decisiones, Ricardo David Videla Fernández, uno de los jóvenes condenados, apareció colgado en una celda de la Penitenciaría de Mendoza, provincia en la que se habían aplicado tres de estas penas ilegales, un cuarto del total de las impuestas en todo el país para esa fecha.

Reformas extremas

En marzo de 2004, un grupo de jóvenes secuestró en la provincia de Buenos Aires a Axel Blumberg, de 23 años, para pedir rescate por su vida. En medio de las negociaciones con su padre, y en el marco de una pésima actuación judicial y policial, Axel fue asesinado por sus captores. En el grupo había mayores y menores de 18 años. Uno de esos jóvenes, Carlos Saúl Díaz, tenía 17 años cuando sucedió el hecho. Desde entonces se le han negado sus derechos a obtener salidas transitorias y la libertad condicional. Su caso está denunciado por la Defensoría General de la Nación ante la CIDH por el tipo de condena impuesta y ante el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas por su defensa particular por el modo en que se ejecuta.

Hay situaciones aun más graves, en cuanto al monto de la pena. En 2004, Juan Carlos Blumberg (el padre de Axel) encabezó movilizaciones acompañado por sectores de la derecha y logró que se aprobaran reformas legislativas que llevaron el máximo de pena aplicable en nuestro país a 50 años de cárcel y que se comenzaran a limitar los derechos para acceder a salidas transitorias o condicionales a las personas que cumplían determinada cantidad de tiempo privadas de libertad. Esos derechos, vigentes en la Ley de Ejecución Penal desde 1996, fueron sucesivamente negados desde 2004 para categorías enteras de personas. Es decir, se arrasó con el principio de progresividad en la ejecución de la pena; de reinserción social y de tratamiento individualizado, y se resolvió que todas las personas que cometen determinado tipo de delitos, por más que cambien su conducta durante el tiempo de cárcel, por más esfuerzos que hagan o logros que alcancen, deben cumplir la pena de prisión de principio a fin. Esas reformas, en cuanto al monto de pena, han impactado también en algunos casos de adolescentes autores de delitos graves. Es el caso, entre otros, de Víctor Hugo Valdez, un adolescente que vivía en una villa miseria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, condenado a 34 años de prisión por delitos cometidos cuando tenía 17 años, condenado con una pena más alta que la que cualquier autor de delitos de lesa humanidad haya recibido en nuestro país.

El daño solo será reparado cuando nosotros, los adultos, construyamos un modo de acercarnos a los adolescentes que se encuentran involucrados en situaciones que culminan con la comisión de delitos, entendiendo que éstos, de los que deben hacerse responsables, no pueden determinar el resto de sus vidas, ni etiquetarlos para siempre como delincuentes incorregibles y carne de cárcel y muerte. ▢

Vidas de castigo

Perfil de la población carcelaria argentina, en %, 2018

Fuente: Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena (SNEEP), 2018.

La mayor parte de la población carcelaria son varones, argentinos, jóvenes, solteros, urbanos, pobres con baja formación educativa o con trabajos precarizados.

1. Este dato, aproximado, fue construido por Juan Martín Rival, sobre la base de la información publicada por el Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena (SNEEP).

2. www.cippec.org/wp-content/uploads/2019/07/El-desafio-de-la-pobreza-en-Argentina.pdf

Educación

ASIGNATURAS PENDIENTES

En 2018, 303 millones de niños no estaban escolarizados en el mundo. Según Unicef, los más pobres tienen cuatro veces más probabilidades de no asistir a clases que los más ricos. El abandono escolar termina perpetuando la pobreza y la exclusión, como sucede en España, donde pese a los avances en el ámbito educativo, los estudiantes de menores recursos siguen siendo los más afectados.

Leire Salazar
Doctora en Sociología por la Universidad de Oxford y experta en desigualdad social. Es profesora en el Departamento de Sociología II de la UNED.

España ha experimentado un espectacular cambio social que incluye una intensa urbanización, la transformación sectorial de la economía, la caída de la fecundidad y la incorporación de las mujeres al empleo. En el ámbito educativo se destacan el aumento de las dotaciones de formación de las sucesivas promociones y la progresiva expansión de las oportunidades de adquirir formación a niños de entornos socioeconómicos cada vez más diversos, así como a las niñas. Sin embargo, el sistema educativo español adolece de un bajo rendimiento en aspectos cruciales que desembocan en la exclusión de la institución escolar de una proporción sustancial de estudiantes: bajo nivel de aprendizaje, repetición de curso y abandono escolar temprano (AET). En estos tres indicadores, España ocupa posiciones sorprendentemente pobres, que no se corresponden con su nivel de desarrollo económico y social.

Una gran proporción de estudiantes no logra niveles de aprendizaje deseables en competencias clave. De acuerdo con PISA 2018, más de un quinto de los estudiantes de 15 años no supera el nivel requerido en ciencias y casi un cuarto no lo hace en matemáticas (1). No hay datos disponibles en lectura para ese año, pero en ediciones anteriores la cifra de estudiantes con bajo rendimiento oscilaba entre el 25,7% en 2006 y el 16,2% en 2015. Aunque hay gran variabilidad entre países (Países Bajos, Finlandia y Dinamarca registraban el 15% de bajo rendimiento en matemáticas, el 44% en Bulgaria y el 36% en Grecia en 2018), en España hay un evidente margen de mejora.

La tasa de repetición de curso en España es una de las mayores de los países ricos. Para la media de países de la OCDE un 11,4% de los estudiantes había repetido el curso a los 15 años en 2018; en España esta cifra llegaba prácticamente al 29%; el territorio con menor repetición en esa edición (País Vasco) casi duplicaba la media de la OCDE. La tasa española en 2018 está muy por encima de las de países con PIB per cápita similar y solamente Colombia, Luxemburgo y Bélgica tienen tasas superiores al 30%.

En 2019, sólo un 4% de los hijos de madres con estudios universitarios abandonaba, frente al 42% de los hijos de madres con estudios primarios o inferiores.

España tiene también el dudoso honor, según datos de Eurostat de 2019, de ser el país de la UE con una tasa mayor de AET, un 17,3% de la población entre 18 y 24 años. Al inicio de la Gran Recesión, un 38% de los chicos y un 25,1% de las chicas había abandonado la educación prematuramente. Las escasas oportunidades laborales para los trabajadores no calificados fue uno de los correlatos más claros de la caída. Aunque su AET ha disminuido, España está muy lejos del objetivo que había marcado la UE para 2020 (el 10%) y está mucho más cercano a países como Malta, Rumania y Bulgaria que a países con niveles de riqueza similares.

Este progresivo desenganche del sistema educativo es, además, un fenómeno "clasista". Quienes proce-

Para la media de países de la OCDE un 11,4% de los estudiantes había repetido el curso a los 15 años en 2018; en España esta cifra llegaba prácticamente al 29%.

Más formación, más salario

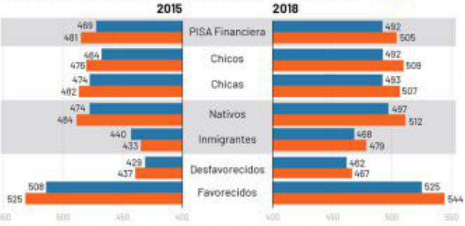
Salario medio en euros en España según nivel educativo, 2017

Con estudios inferiores a E. Secundaria Obligatoria	Con Licenciatura Universitaria y Máster
8.277 euros	**24.074** euros

Analfabetismo intergeneracional

Rendimiento medio de los alumnos de 15 años en competencia financiera (PISA), según variables sociodemográficas y económicas, 2015 y 2018

España / Media OCDE



Fuente: "Sistema Estatal de Indicadores de la Educación 2020", Ministerio de Educación y Formación Profesional del Gobierno de España, 2020.

den de familias con pocos recursos aprenden menos. En indicadores correspondientes al año 2018, del nivel material aparece un elemento obvio: en matemáticas los estudiantes inmigrantes obtenían 39 puntos menos, los que estudiaban en centros públicos 28 puntos menos, los que no disponían de computadora o de internet 49 puntos menos, el equivalente al aprendizaje de un curso. En los marcadores de capital cultural las brechas son aun mayores: los estudiantes cuyos padres tenían educación primaria lograban 61 puntos menos que sus pares hijos de universitarios; los que apenas disponían de libros obtenían hasta 108 puntos menos que los que contaban con cientos (2). Pese a la universalización de la educación obligatoria, la trayectoria escolar supone una carrera de obstáculos para las familias con menores recursos.

Además, los estudiantes de familias de limitados recursos que tienen el mismo nivel de aprendizaje presentan tasas de repetición de curso hasta 4 veces mayores que los de más altos recursos, una diferencia muy superior a la de la OCDE. Esta brecha es solamente superada, en 2018, por Eslovaquia. Las diferencias en la probabilidad de repetir entre estudiantes de origen inmigrante y nativos son mucho más reducidas (1,3 veces) y se encuentran por debajo de la media de la OCDE y no lejos de la que registran países con niveles de riqueza equiparables a España (3).

Círculo vicioso

El AET tampoco se distribuye de manera homogénea. En 2019 solo un 4% de los hijos de madres con estudios universitarios abandonaba, frente al 42% de los hijos de madres con estudios de primaria o inferiores (4). Aunque la brecha se ha ido cerrando, las diferencias son alarmantes. Las familias con pocos recursos encuentran serias dificultades para retener a sus hijos en la escuela, para negociar con ésta la trayectoria escolar posible de los hijos, para detectar y fomentar su potencial académico al margen del rendimiento en un momento concreto o para ofrecer segundas oportunidades ante un imprevisto o una mala racha puntual.

El bajo aprendizaje es un correlato de la repetición y esta no genera una mejora de las competencias ni actitudes favorables a la escuela (5). La repetición fomenta el abandono y quienes lo hacen tienen menores participación laboral, seguridad en el empleo y salarios (6). Las consecuencias para el bienestar económico-social de la población y para la calidad del empleo y la productividad de la economía son evidentes. Estos procesos afectan desproporcionadamente a los estudiantes con menores recursos y así perpetúan la desigualdad de oportunidades, la transmisión intergeneracional de desventajas y la cronificación de pobreza y exclusión. El diagnóstico es nítido; las intervenciones pasan por un refuerzo de las competencias en los primeros años, la apuesta sería por programas de refuerzo a los estudiantes con bajo rendimiento y menos recursos, un replanteamiento no clasista de las condiciones para repetir y la oferta de segundas oportunidades capacitadoras a los expulsados de escuela (7). ▢

1. Salvo indicación en contrario, las cifras corresponden a PISA 2018.
2. "Sistema estatal de indicadores de la educación 2020", Ministerio de Educación y Formación Profesional, 2020.
3. Save the Children, 2019.
4. "Sistema estatal de indicadores de la educación 2020", *op. cit.*
5. Véase José Ignacio García-Pérez, Marisa Hidalgo-Hidalgo y Antonio Robles-Zurita, "Does grade retention affect students' achievement? Some evidence from Spain", 2014 y Miyako Ikeda y Emma García, "Grade repetition: A comparative study of academic and non-academic consequences", *OECD Journal: Economic Studies*, Vol. 2013/1, 2014.
6. Brian Jacob y Lars Lefgren, "The effect of grade retention on high school completion", *American Economic Journal: Applied Economics*, 2009, www.aeaweb.org/articles?id=10.1257/app.1.3.33; Laura Hernández, Lorenzo Serrano y Ángel Soler, "El abandono educativo temprano: análisis del caso español", Documento de Trabajo, INEE, Madrid, 2013, http://web2016.ivie.es/wp-content/uploads/2017/06/Informe_Abandono_Educativo_Temprano.pdf
7. Héctor Cebolla-Boado, Jonas Radl y Leire Salazar, "Aprendizaje y ciclo vital. La desigualdad de oportunidades desde la educación preescolar hasta la edad adulta", Colección Estudios Sociales, 2014.

Los países con mayor número esperado de años de escolarización son Suecia y Finlandia, seguidos por Irlanda, Dinamarca, Países Bajos, Lituania, Letonia, Grecia y Bélgica.

5. GÉNERO

Una revolución incompleta

A pesar de los grandes avances en la lucha por la paridad de género y de una mayor conciencia colectiva, aún subsisten desigualdades brutales que atraviesan todos los ámbitos de la vida política, económica y social. Desde las barreras en el acceso a los altos puestos de poder, pasando por las dificultades que sufren las madres trabajadoras, hasta la ausencia de una soberanía plena sobre sus propios cuerpos, las mujeres, trans y las personas género diversas siguen sometidas en plena modernidad a tradiciones patriarcales que no se resignan a morir.

Acceso a puestos de poder

UNA INCLUSIÓN EXCLUYENTE

La relación desigual entre hombres y mujeres atraviesa a todas las áreas de la vida económica, política y social. A la brecha existente en el acceso a altos cargos y la consecuente desventaja salarial por cuestiones de género, se suma la segregación horizontal, que relega el acceso de las mujeres a ciertas áreas fundamentalmente de cuidados y servicios, ancladas en viejos estereotipos de lo femenino.

Virginia García Beaudoux

Investigadora del CONICET-IIGG. Consultora de IDEA, OEA, PNUD y otros. Autora de once libros, el más reciente, *¿Quién teme el poder de las mujeres?* (Grupo 5, Madrid, 2017). Profesora de la UBA y UB. Creadora del Blog #LiderarConTacones. En los últimos años ha realizado también consultorías para ONU Mujeres en América Latina y el Caribe.

Las mujeres en el mundo público corren dos carreras: la que corren todas las personas sin importar su género para ganar experiencia, méritos y credenciales para progresar, y una carrera de obstáculos. En las corporaciones, las ciencias, la academia, la política y todos los ámbitos de actividad, encuentran poderosas arquitecturas sociales que impiden su desarrollo profesional.

Fuente: ONU Mujeres, 2019.

No hay leyes o códigos explícitos de exclusión. Son normas y prejuicios implícitos, no escritos, sutiles y difíciles de detectar. Pero los resultados son claros.

La barrera invisible más conocida es la de los "techos de cristal" que enfrentan las mujeres que aspiran a ejercer altos cargos en igualdad de condiciones y salario en organizaciones de todo tipo: corporativas, gubernamentales, partidarias o educativas. Es una barrera organizacional, vertical, transparente y efectiva, que hace que, aunque ellas cuenten con preparación y experiencia, se estanquen y sólo logren llegar hasta los niveles medios.

No se trata ya de los "muros de cemento" visibles que impedían a las mujeres el acceso a los mismos derechos que a los hombres, como votar o asistir a la universidad, sino de barreras imperceptibles. No hay leyes o códigos explícitos de exclusión. Son normas y prejuicios implícitos, no escritos, sutiles y difíciles de detectar. Pero los resultados son claros. Sólo uno de cada cinco de los máximos ejecutivos de los países del G7 son mujeres. Son hombres el 74,7% de los presidentes y miembros de consejo de las principales compañías que cotizan en las bolsas europeas. En 2018 las mujeres fueron el 21% de los participantes del Foro Económico Mundial de Davos, lo que se considera un logro por ser la cifra más alta alcanzada en sus 48 años de existencia. En 2017 las muje-

res representaban el 21,2% de los miembros de las mesas directivas y el 5,2% de los CEO según el índice Standard & Poor's. Para decirlo con claridad: sólo 27 mujeres estaban al frente de las primeras 500 compañías que cotizan en la Bolsa de Nueva York.

Las remuneraciones constituyen una forma de discriminación adicional. Los datos de ONU Mujeres muestran que perciben un salario 24% inferior al de los hombres. En Argentina, las cifras del INDEC de 2017 evidencian que las mujeres que logran romper los techos de cristal en las empresas y ascender a puestos de alta responsabilidad lo hacen con menores remuneraciones, que la brecha salarial es de 23,5% y que llega a 35% en el mercado informal. Confirman además que las mujeres se sitúan mayoritariamente en los sectores de menores ingresos, que el 90% trabaja en el sector servicios y que la ocupación más frecuente de las mujeres es el servicio doméstico (19,6%). Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la disparidad en función del género en algunos países llega al 45% y existe en todas las esferas de actividad. En Gran Bretaña, las académicas con dedicación full time cobran en promedio 11,3% menos que sus colegas hombres. En Italia, la retribución de las investigadoras es 33,3% menor que la de sus compañeros.

Límites invisibles

Como señala la OIT, los grandes progresos educativos realizados por las mujeres en las últimas décadas no se han traducido en una mejora proporcional en el mercado laboral. La mayor parte del personal docente de las universidades está conformado por mujeres, pero los decanos y los rectores son hombres. A la Universidad de Oxford le tomó más de 800 años nombrar una rectora, hecho que ocurrió en 2015.

Según el Índice Global de Brecha de Género que el Foro Económico Mundial de Davos elabora desde 2006, la diferencia entre los géneros aumentó en 2017 por segundo año consecutivo, y al ritmo actual llevaría 217 años eliminarla. Ello, a pesar de que la paridad sumaría 250.000 millones de dólares al PIB del Reino Unido, 320.000 millones al de Francia, 310.000 millones al de Alemania y 1,7 billones de dólares a la economía de Estados Unidos.

Legislar sin paridad

Mujeres parlamentarias en el mundo, 1997-2020

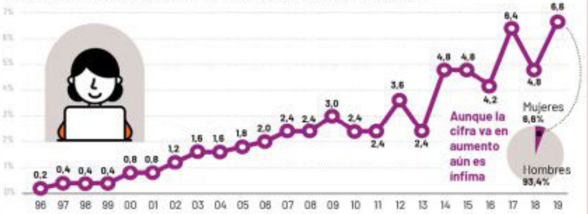
Fuente: Banco Mundial, 2020.

Entre 1901 y 2017 recibieron el Premio Nobel en cualquier categoría 847 varones y 49 mujeres (menos del 5%).

También hay techos de cristal en la política. En 2020 sólo el 6% de los jefes de Estado o de Gobierno del mundo eran mujeres, el 75% de las bancas de los Parlamentos estaban ocupadas por varones, y el 21% de las carteras

Un liderazgo empresarial sesgado

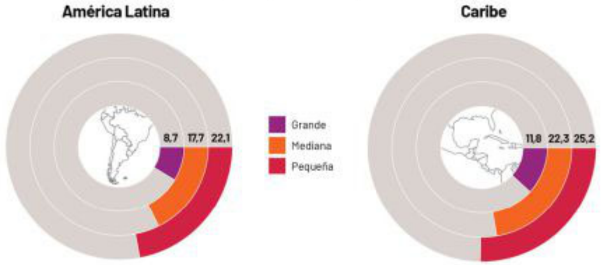
Mujeres directoras generales según la lista Fortune 500, en porcentaje, 1995-2019



Fuente: ONU Mujeres, 2020.

América Latina y el Caribe no son la excepción

Firmas que cuentan con gerente general mujer en 18 países de América Latina y 13 del Caribe*, según tamaño de empresas, en porcentaje, último año disponible



Fuente: Iliana Vaca Trigo, "Oportunidades y desafíos para la autonomía de las mujeres en el futuro escenario del trabajo", CEPAL, 2019.
*Las estimaciones corresponden a los siguientes países de América Latina: Argentina (2017), Bolivia (2017), Brasil (2009), Chile (2010), Colombia (2017), Costa Rica (2010), República Dominicana (2016), Ecuador (2017), Guatemala (2017), Honduras (2016), México (2010), Nicaragua (2016), Panamá (2010), Perú (2017), Paraguay (2017), El Salvador (2016), Uruguay (2017) y Venezuela (2010). Y de los siguientes países del Caribe: Antigua y Barbuda (2010), Bahamas (2010), Belice (2010), Barbados (2010), Dominica (2010), Granada (2010), Guyana (2010), Jamaica (2010), Saint Kitts y Nevis (2010), Santa Lucía (2010), Surinam (2010), Trinidad y Tobago (2010) y San Vicente y las Granadinas (2010).

ministeriales por mujeres. En Argentina, de 20 carteras ministeriales –21 con la Jefatura de Gabinete– [que hubo hasta la reducción del Gabinete en agosto de 2018] apenas dos estaban ocupadas por mujeres. En cuanto a los sindicatos, las mujeres rara vez ocupan las secretarías o subsecretarías, y muy pocos cumplen con el cupo establecido por ley del 30% en sus comisiones directivas. La Federación Universitaria Argentina, principal órgano de representación de los estudiantes universitarios del país, de los cuales el 60% son mujeres, recién en 2016 fue liderado por una mujer... por primera vez en 100 años.

Para las mujeres, la carrera a los puestos más altos no implica sólo romper techos. También supone recorrer "laberintos de cristal", dado que en comparación con los hombres deben sortear muchos más obstáculos. Las promociones y ascensos requieren considerablemente más tiempo para ellas, así como caminos más complejos y extensos, a pesar de contar con formación y experiencia laboral similares. Minnie debutó en las pantallas al mismo tiempo que Mickey en 1928, entretuvo a millones de espectadores durante décadas, protagonizó más de 70 películas, es un personaje central en los parques temáticos de Disney... y tuvo que esperar 40 años más que

Mickey para obtener una estrella en el Paseo de la Fama en Hollywood.

Ministerios feminizados

A los techos y laberintos los acompaña una última pieza de cristalería: las "paredes de cristal", la segregación horizontal, que limita el acceso de las mujeres a ciertas áreas. No sólo existe un techo de cristal en la ocupación de carteras ministeriales, sino que cuando llegan a ministras la mayoría está a cargo de áreas identificadas con tareas de cuidado y estereotipos de lo femenino: educación, bienestar social, medioambiente y familia. De modo que pocas mujeres ocupan puestos en áreas como obras públicas, defensa, ciencia y tecnología.

El fenómeno es global y atraviesa todos los campos del quehacer humano. Según la UNESCO, las mujeres constituyen el 28% de los investigadores científicos del planeta. Un escaso 12% de los miembros de las academias de ciencias del mundo son mujeres. En Italia, el 51,7% de los doctores de investigación son mujeres, pero ellas representan el 18% en los niveles avanzados de la carrera, y en el sector técnico-científico, menos de uno de cada diez profesores es mujer.

Entre 1901 y 2017 recibieron el Premio Nobel en cualquier categoría 847 varones y 49 mujeres (menos del 5%). En 2016 y 2017 ninguna mujer obtuvo el galardón en ninguna categoría. Sólo 16 fueron premiadas en Ciencias; las demás, en Literatura, Economía y la Paz. Y únicamente 8 mujeres fueron invitadas a pronunciar un discurso en el banquete del Nobel.

Las remuneraciones constituyen una forma de discriminación adicional. Los datos de ONU Mujeres muestran que perciben un salario 24% inferior al de los hombres.

La conclusión es que la relación poder-mujer es constante e inversamente proporcional: a más poder, menos mujeres. Sin embargo, nunca antes hubo tanta conciencia colectiva de la desigualdad, ni tantas exigencias para eliminarla. El movimiento #MeToo, la sanción de leyes de paridad, las propuestas para que las empresas informen sus sueldos por género son apenas algunos indicadores de una revolución social irreversible.

El cambio llegó y es fruto del trabajo diario de tantas mujeres y hombres que asumen el compromiso de escribir y conjugar esta etapa de la historia en presente, femenino y plural. ▢

Empleos preconcebidos

Población ocupada por actividad económica, promedio ponderado en 16 países de América Latina y el Caribe*, en porcentaje

*Nota: Los datos corresponden al año 2018 para Argentina, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Honduras, México, Panamá, Perú y Uruguay; al año 2015 para Bolivia, Brasil, Chile, y 2014 para Guatemala, Nicaragua y Venezuela.
Fuente: Iliana Vaca Trigo, "Oportunidades y desafíos para la autonomía de las mujeres en el futuro escenario del trabajo", CEPAL, 2019.

Protección laboral

CÓMO MATERNAR EN PRECARIEDAD

El énfasis en el rol social de la mujer de los discursos políticos de izquierdas y de derechas no evita que tener hijos o estar en capacidad de tenerlos siga siendo una desventaja a la hora de firmar un contrato laboral en la mayoría de los países del mundo. El gran desafío sigue pasando por alcanzar grados aceptables de paridad.

Nancy Giampaolo
Periodista, guionista y docente.

"Por ese tiempo, una terrible hambruna había devastado China y me contaron que cuando ella escuchó la noticia, lloró. Estas lágrimas motivaron mi respeto, mucho más que sus dotes como filósofa. Envidiaba un corazón capaz de latir a través del universo entero", dijo Simone de Beauvoir sobre su menos célebre compatriota Simone Weil. Y añadió que, aunque intentó refutarla argumentando que el problema no era dar de comer a la humanidad, sino otorgar un sentido a la existencia, Weil la hizo callar diciendo: "Bien se ve que nunca has pasado hambre". La anécdota ilustra un problema que sigue teniendo lugar en el presente: la experiencia directa, en contraposición al plano teórico. Actualmente, hay alrededor de 3.800 millones de mujeres en el mundo, pertenecientes a distintas etnias, culturas, clases sociales y religiones. Esta diversidad jaquea la noción, fundamentalmente acuñada en algunos idearios que se exportan desde Estados Unidos y Europa, de un movimiento de género global capaz de llevar adelante la representación de todas por igual. Pero incluso con la proliferación de feminismos periféricos (islámicos, negros, aborígenes) que buscan soluciones acordes a sus economías e identidades culturales, las desigualdades se profundizan. Un alza de la precarización laboral a nivel planetario y la dramática consolidación de la pobreza estructural de los países del Tercer Mundo, dejan sin futuro a madres trabajadoras de África, parte de Asia y América Latina. El énfasis en el rol social de la mujer de los discursos políticos de izquierdas y derechas, no evita que tener hijos o estar en capacidad de tenerlos siga siendo una desventaja a la hora de firmar un contrato, excepto en un puñado de países. La pensadora anarcofeminista española María del Prado Esteban aseguraba, en este sentido, que "la alienación femenina por el ejercicio de la maternidad es un estigma del mundo moderno, y más en concreto, de la formidable afirmación del patriarcado que hace la revolución liberal". En maternidad y trabajo resta mucho por hacer.

Según la OIT, en 2014 la mayor parte de las trabajadoras autónomas, migrantes y domésticas no contaban con derechos de protección de la maternidad.

Según el último informe completo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), publicado en 2014, sólo el 29% de las mujeres que tenían empleo en el mundo, accedían a prestaciones monetarias al momento de ser madres. La mayor parte de las trabajadoras autónomas, migrantes y domésticas no contaban con derechos de protección de la maternidad, en tanto las trabajadoras agrícolas estaban excluidas de las licencias por maternidad en 27 países. En dos zonas rurales de Senegal, por ejemplo, el 26% de las agricultoras trabajaban hasta el día del parto, práctica también usual en países asiáticos, como Nepal. Pero la exclusión de las mujeres que tienen un empleo atípico no era privativa de los países en desarrollo: en Japón y Canadá, la ley no cubría prestaciones por maternidad a trabajadoras de medio turno. El informe señala, además, que alrededor de 830 millones de trabajadoras de países del Tercer Mundo esperaban que la legislación vigente se cumpliera en la práctica. Las duraciones de la licencia por maternidad más prolongadas se registraban en Europa Oriental y Asia Central (casi 27 semanas), y la media regional más corta en Medio Oriente (9,2 semanas). El Convenio 183 elaborado por este organismo internacional dice que la prestación pecuniaria pagada durante la licencia de maternidad debe ser equivalente a dos tercios de las ganancias anteriores de la mujer –o una cantidad comparable si se utilizan otros métodos para determinar las prestaciones en efectivo– y prolongarse como mínimo durante 14 semanas, en tanto deja a criterio de cada Estado la normativa relacionada

Las licencias del patriarcado

Países que otorgan licencia por maternidad
Por duración, 2013
(185 países y territorios)

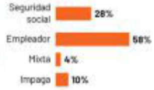
- Menos de 12 semanas
- De 12 a 13 semanas
- De 14 a 17 semanas
- De 18 semanas a más
- Sin datos

Beneficios durante la licencia por maternidad
En 167 países, 2013, en porcentaje

Países que otorgan licencia por paternidad
Por duración, 2013 (167 países)

- De 1 a 6 días
- De 7 a 10 días
- De 11 a 15 días
- De 16 días a más
- Sin licencia por paternidad
- Sin datos

Origen de los fondos para la licencia por paternidad
En 79 países, 2013, en porcentaje



con la lactancia y así es como varios países de África, Asia y el Caribe aún carecen de disposiciones que garanticen ese derecho a los recién nacidos. A fines de 2018, el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), también recomendó un mínimo de 14 semanas de licencia remunerada y realizó un desglose del tiempo que da cada país de licencia por maternidad remunerada para corroborar que una buena parte no cumple, mientras otros como Estados Unidos, Surinam y Papúa Nueva Guinea ni siquiera otorgan alguna clase de licencia paga. Entre los países que dan menos de 14 semanas aparecen Argentina, Haití, México, Paraguay y Perú; entre los que dan entre 14 y 25,9 semanas Brasil, Colombia, China y España; entre los que dan 26 y 51,9 semanas están Chile, Francia, Italia y Portugal, y entre los que dan más de 52 semanas, Alemania, Canadá, Japón y Mongolia.

Injusticias que se eternizan

En cuanto a la distribución del trabajo durante los dos últimos siglos, en las etapas previas al capitalismo industrial, mujeres, hombres y niños trabajaban casi a la par porque la familia era vista como una unidad productiva. En 1892, Paul Lafargue, diputado del Partido Obrero Francés, sentó un precedente al proponer la licencia por maternidad para las trabajadoras de su país, argumentando que el capitalismo empujaba "a mujeres y niños fuera de la esfera doméstica para transformarlos en instrumentos de producción". Durante la primera parte del siglo XX, la opresión sobre la clase trabajadora (mujeres incluidas) seguía siendo una práctica corriente como testimonia Weil, obrera en Alsthom y Renault a mediados de los años 30, en escritos de este tenor: "He sacado, en suma, dos lecciones de mi experiencia. La primera, la más amarga y la más imprevista es que la opresión, a partir de un cierto grado de intensidad, genera no una tendencia a la rebelión sino una tendencia casi irresistible a la más completa sumisión. La segunda es que la humanidad se divide en dos categorías, los que cuentan para algo y los que no cuentan para nada [...]. La cuestión, de momento, es saber si, en las condiciones actuales, se puede llegar en el marco de una fábrica a que los obreros cuenten y tengan conciencia de contar para algo". En Argentina, Eva Perón dedicó reflexiones a aquel estado de cosas como cuando dijo, en 1951: "Descubierta por el industrial como fuerza de trabajo que se puede pagar menos, se transforma la mujer en la competidora de su propio hermano varón, realizando las mismas tareas, pero con un salario menor".

Después de la Segunda Guerra Mundial, el aumento de la rentabilidad propició que las mujeres se abocaran masivamente al cuidado de la casa y los hijos, y el modelo de la "mantenida" se estandarizó, hasta que un nuevo cambio de paradigma económico hizo muy difícil que con un único sueldo alcance para alimentar más de una boca. A su vez, los feminismos de los años 60 fomentaron el interés de las mujeres por ingresar al mercado laboral en condiciones menos injustas que las del pasado. Mucho se avanzó en ese rumbo, pero la pobreza estructural de los países periféricos eterniza injusticias aun más acuciantes que el techo de cristal o el, todavía muy lejano a la paridad, acceso a los puestos de poder. El gran desafío sigue pasando por alcanzar aceptables grados de paridad, no sólo de género, sino de posibilidades entre las madres trabajadoras del Primer Mundo y las de las periferias, y entre las asalariadas y las independientes. ▢

29%

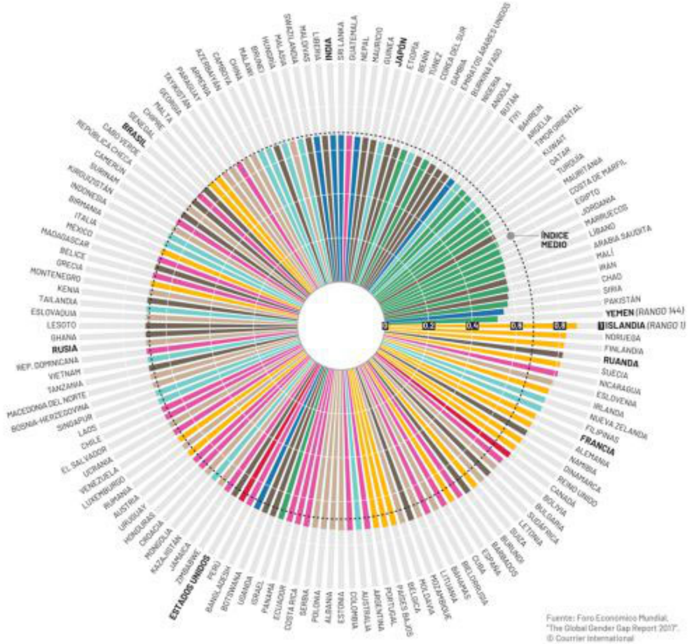
de las mujeres que tenían empleo en el mundo en 2014, accedían a prestaciones monetarias al momento de ser madres, según la OIT.

La carrera perpetua por la paridad

La igualdad entre hombres y mujeres en los distintos ámbitos de la vida política y social sigue siendo una deuda en todos los países del mundo. Incluso en Islandia, un ejemplo en materia de paridad, los salarios de los hombres siguen siendo en promedio más altos que los de las mujeres.

Índice de paridad por país, clasificación por rango

Los 144 países están ordenados según su índice de paridad: cuanto más cerca se encuentra del 1, más larga es la barra de color y más igualitario es el país. Los colores corresponden a las grandes regiones mundiales (véase el gráfico "Regiones").



Fuente: Foro Económico Mundial, "The Global Gender Gap Report 2017".
© Courrier International

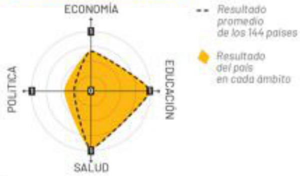
REGIONES

- AMÉRICA DEL NORTE
- AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
- EUROPA OCCIDENTAL
- EUROPA ORIENTAL Y ASIA CENTRAL
- MEDIO ORIENTE Y ÁFRICA DEL NORTE
- ÁFRICA SUBSAHARIANA
- ASIA DEL SUR
- ASIA DEL ESTE Y PACÍFICO

REFERENCIA DE LOS FOCOS

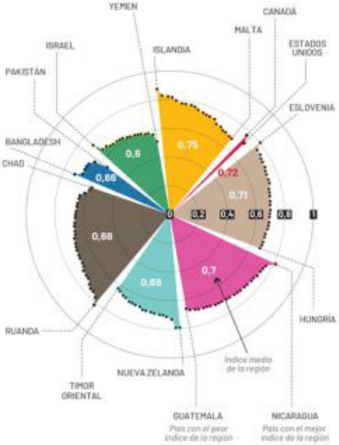
Caso de Francia: *Rango* *Índice*

FRANCIA 11 | 0,778



Índices de los países agrupados por región

Los países están agrupados por región del mundo. Para cada una de ellas, están citados el país más igualitario y el menos igualitario.



Ocho países en foco

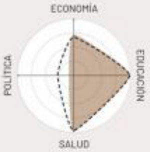
Ámbitos analizados: economía, educación, salud y política.
Cuanto más cerca de 1 esté el resultado, mayor es el respeto de la paridad en ese ámbito por parte del país. **El promedio de los cuatro resultados conforma el índice de paridad.**

ISLANDIA 1 | 0,878

RUANDA 4 | 0,822

ESTADOS UNIDOS 49 | 0,718

RUSIA 71 | 0,696



BRASIL 90 | 0,684

INDIA 108 | 0,669

JAPÓN 114 | 0,657

YEMEN 144 | 0,516

Violencia física y sexual

LAS HUELLAS DE LA OPRESIÓN

La cifra revela un dolor persistente: según la OMS una de cada tres mujeres en el mundo han sufrido violencia física y/o sexual en algún momento de su vida. La violencia de género no es el resultado de actos aleatorios de mala conducta sino que está profundamente arraigada en relaciones estructurales de desigualdad y comprende otros ámbitos como el psicológico, el social y el económico.

Mélany Barragán
Doctora en Estado de Derecho y Gobernanza Global por la Universidad de Salamanca. Profesora e investigadora en la Universidad de Valencia.

Las estimaciones publicadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) indican que alrededor de una de cada tres mujeres (35%) en el mundo han sufrido violencia física y/o sexual de su pareja o violencia sexual por parte de terceros en algún momento de su vida. Este porcentaje disminuye al 23,2% en el caso de los países con ingresos altos (Estados Unidos, Europa Occidental, Australia y Japón) pero se incrementa hasta el 37% en la región del Mediterráneo Oriental, el 36,6% en África y el 37,7% en el Sudeste Asiático. No obstante, resulta difícil conocer el número real de mujeres agredidas. Primero, porque sólo 107 de los 195 países del mundo disponen de datos sobre violencia doméstica y esta cifra desciende a 56 cuando se trata de cifras sobre agresiones a mujeres a manos de terceros. Segundo, porque aun cuando existen datos es muy probable el infrarregistro dado que sólo se computan los casos de los que se da constancia y los expertos calculan que sólo se denuncia una de cada tres agresiones de este tipo.

La violencia de género, sin embargo, no se limita únicamente al ámbito físico y/o sexual. El Convenio de Estambul, texto de referencia de la legislación sobre violencia de género, señala que esta se extiende a ámbitos como el psicológico, el social o el económico. Las mujeres pueden ser víctimas de conductas verbales o no verbales que tienen como objeto infravalorarlas y deteriorar su estabilidad emocional. También pueden padecer que sus parejas las aíslen de su entorno para privarlas de apoyo. En escenarios de dependencia económica, las víctimas de violencia también pueden sufrir la reducción o privación de recursos, perjudicando su bienestar tanto físico como psicológico. Por lo general, estas diferentes manifestaciones de violencia no sólo no son excluyentes, sino que son inherentes unas a otras.

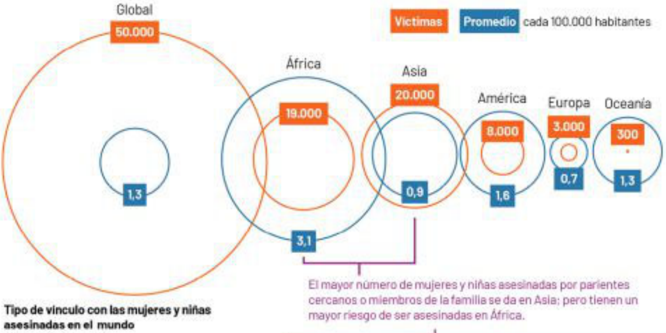
Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la violencia contra las mujeres no es el resultado de actos aleatorios de mala conducta, sino que está profundamente arraigada en relaciones estructurales de desigualdad. En este sentido, la violencia de género se ve reforzada en muchos casos por leyes discriminatorias y normas sociales excluyentes que socavan las oportunidades de mujeres y niñas en materia de educación, ingresos e independencia. Algunos datos proporcionados por ONU Mujeres son elocuentes: en la actualidad, 49 países, incluyendo casos como Bélgica y Canadá, no cuentan con ningún tipo de ley que proteja a las mujeres de la violencia doméstica; en 32 países los procedimientos para conseguir un pasaporte difieren entre hombres y mujeres; en 18 países las mujeres necesitan la aprobación de sus maridos para aceptar un trabajo, y en los países de menor desarrollo humano, aproximadamente el 40% de las mujeres de 20 a 24 años contraen matrimonio antes de alcanzar la mayoría de edad.

En la actualidad, 49 países no cuentan con ningún tipo de ley que proteja a las mujeres de la violencia doméstica.

En el entorno laboral los datos tampoco son optimistas. Pese a que las estimaciones de los informes sobre Desarrollo Humano de los últimos años indican que las

Los golpes de la desigualdad

Cantidad de femicidios y tasa cada 100.000 habitantes, 2017



Tipo de vínculo con las mujeres y niñas asesinadas en el mundo

En porcentaje, 2017

Fuente: UNODC, 2018.

mujeres realizan la mayor parte del trabajo mundial (en torno al 52%), su situación por lo general es más precaria que la de los hombres. Según la fuente citada, realizan tres veces más trabajo no remunerado que los hombres –un 30% frente a un 10%– y cuando su trabajo es remunerado ganan un 24% menos que sus homólogos masculinos. Además, muestran una mayor tendencia a ser víctimas de prácticas como el acoso. Estas condiciones fomentan escenarios de dependencia en el que las mujeres son potencialmente más vulnerables que los hombres a sufrir situaciones de violencia. No obstante, en la última década se han adoptado medidas para revertir la situación. Según el Banco Mundial, en 131 países se han introducido reglamentaciones que favorecen la inclusión económica de la mujer, 22 economías han eliminado restricciones al empleo de las mujeres y 13 países han aprobado leyes que exigen igual remuneración por trabajo de igual valor. La otra cara de la moneda son los 56 países que no han adoptado ningún tipo de reforma al respecto en la última década.

Un fenómeno transversal

La violencia de género se ha convertido en un fenómeno transversal que afecta a mujeres de diferentes áreas geográficas y entornos socioculturales. En la mayoría de regiones del mundo las mujeres se sienten menos seguras que los hombres, aunque los niveles varían significativamente según el país y pueden estar condicionados a su vez por variables como la clase social, la etnia o la religión de la víctima. Empero, incluso los países con mayor desarrollo humano se enfrentan a grandes desafíos en esta materia. A este respecto es interesante subrayar la paradoja de los países nórdicos: a pesar de tener algunas de las leyes más avanzadas en términos de igualdad, cuentan con altos índices de violencia sexual. Así, el 30% de las danesas, suecas y finlandesas han denunciado haber sufrido este tipo de agresiones frente a la media del 22% en toda la Unión Europea. Según un estudio de Amnistía Internacional, las razones de esta paradoja son la persistencia de mitos sobre lo que es o no una violación, ciertas deficiencias en el sistema legal y los estereotipos de género.

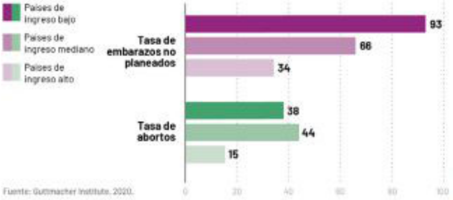
Como principales medidas de prevención, la experiencia de los países con mayor grado de desarrollo humano indica que las iniciativas de sensibilización y prestación de asistencia psicológica, así como las visitas domiciliarias a las víctimas, son eficaces a la hora de reducir la violencia contra la mujer. En el caso de los países con menos recursos, las medidas deben pasar inevitablemente por la emancipación económica y social de la mujer, mediante la microfinanciación y formación en materia de igualdad; la reeducación en las formas de relación interpersonal dentro de la pareja y la comunidad, y la reflexión crítica sobre las relaciones de género y de poder desiguales. Además, para que los cambios sean reales y duraderos, es fundamental la promulgación de leyes y la ejecución de políticas que garanticen la igualdad y la integridad.

Aborto, reaccionarios al ataque

Los avances en el mundo que este mapa muestra en materia de derecho al aborto esconden otra realidad. En varios países el acceso efectivo a la interrupción voluntaria del embarazo está amenazado o en franco retroceso. Es el caso de Polonia, donde la legislación es una de las más restrictivas de Europa. En enero de 2018, un año y medio después de haber intentado convertirlo en ilegal, el Parlamento dominado por los ultraconservadores aceptó evaluar una iniciativa ciudadana en vistas a ilegalizar el aborto en caso de malformación del feto. En ambos momentos, la movilización de una parte de la población hizo retroceder a los parlamentarios. Más recientemente en Estados Unidos, varios estados votaron leyes restrictivas: Alabama, Georgia, Missouri, Kentucky y Ohio. Habrá entonces que observar cuáles serán los avances y retrocesos en el mundo.

Pobreza y maternidad no deseada

Embarazos no planificados y abortos, según grupos de ingresos de los países, cada 1.000 mujeres, 2015-2019



Fuente: Guttmacher Institute, 2020.

Número de países por categoría	Países donde el aborto está:
26	Totalmente prohibido
39	Autorizado en el caso de poner en peligro la vida de la madre
55	Autorizado si la salud de la madre está en peligro, en caso de violación, incesto o malformación del feto
14	Autorizado por criterios socioeconómicos (edad, recursos) y en los casos precedentes
68	Autorizado sin restricción
	Sin datos

↗ Países donde la situación mejoró en los últimos 10 años

⊕ Países donde la situación mejoró desde el año 2018

Situación en julio de 2019 con excepción de Argentina que legalizó el aborto a fines de diciembre de 2020.

Fuente: Center for Reproductive Rights, reproductiverights.org, © Courrier International

Islandia

Aprobó una de las leyes más liberales en materia de aborto en Europa, autorizándolo hasta las 22 semanas de gestación.

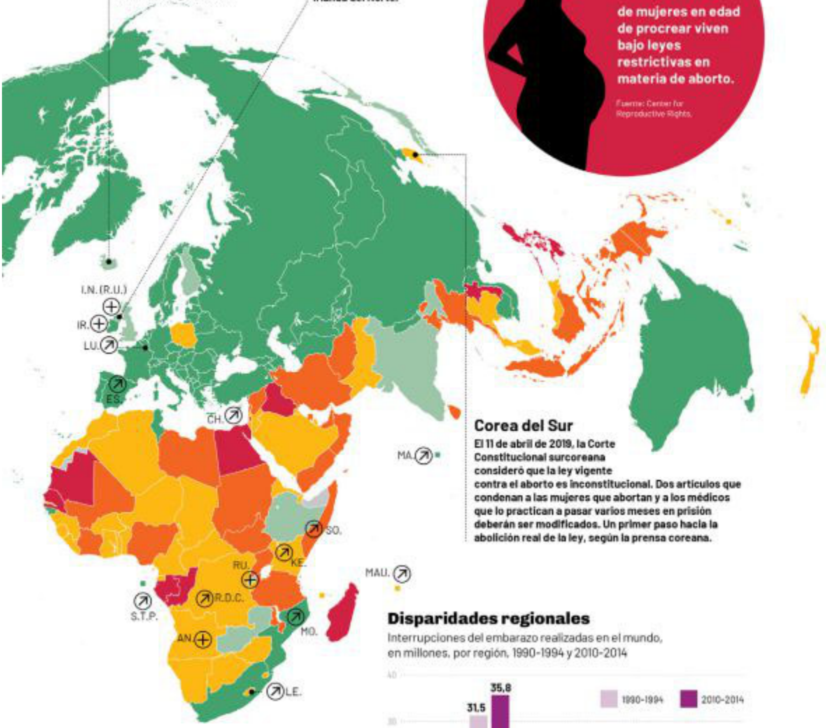
Irlanda del Norte (R.U.)

El 11 de julio de 2019, el Parlamento británico legalizó el aborto en Irlanda del Norte.

690 millones

de mujeres en edad de procrear viven bajo leyes restrictivas en materia de aborto.

Fuente: Center for Reproductive Rights.



Corea del Sur

El 11 de abril de 2019, la Corte Constitucional surcoreana consideró que la ley vigente contra el aborto es inconstitucional. Dos artículos que condenan a las mujeres que abortan y a los médicos que lo practican a pasar varios meses en prisión deberán ser modificados. Un primer paso hacia la abolición real de la ley, según la prensa coreana.

218 millones

de mujeres de las 923 millones que abortaron en países de bajos y medianos ingresos no pudieron acceder a métodos anticonceptivos.

Disparidades regionales

Interrupciones del embarazo realizadas en el mundo, en millones, por región, 1990-1994 y 2010-2014

Fuente: Statista, 2020.

Interrupción del embarazo y mutilación genital femenina

EL DERECHO A TENER DERECHOS

En pleno siglo XXI en la mayoría de los países del mundo las mujeres aún no son plenamente soberanas de sus propios cuerpos. Desde la prohibición de la interrupción del embarazo hasta la mutilación genital femenina, las prácticas arcaicas, tenazmente arraigadas en tradiciones patriarcales, siguen vigentes.

Mabel Bellucci* y Viviana Norman**

*Ensayista, periodista y activista feminista queer. Cofundadora del portal virtual Moléculas Malucas. Archivos y Memorias fuera del margen. Autora de *Historia de una desobediencia. Aborto y Feminismo* (Capital Intelectual, 2020).

**Socióloga feminista. Integrante del Grupo de Estudios de Políticas y Juventudes (GEPOJU-Instituto Gino Germani-Universidad de Buenos Aires).

Cerca del 38% de los países del mundo han tomado decisiones legales en torno al acceso al aborto. Un número aún insuficiente cuando se trata de un tema prioritario sobre la sexualidad de las mujeres heterosexuales, lesbianas, bisexuales y varones trans. En el resto de los países existen diferentes modos de tratamiento ante la práctica abortiva que va desde la prohibición según causales a penas extremas: entre 8 y 40 años de cárcel para toda persona que realice o facilite la concreción del mismo, como en el caso de El Salvador, Guatemala, Nicaragua, República Dominicana, Malta y Ciudad del Vaticano. Otro caso emblemático es Polonia. A partir de 1939, el aborto estaba despenalizado y legalizado. Pero en 1993 la Iglesia logró imponer una ley que acababa con la plena libertad de abortar. En 2017, se llevaron a cabo marchas multitudinarias en el país que se considera regido por una de las legislaciones más restrictivas de Europa.

En Argentina, desde hace más de una década se constituyó la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, conformada por alrededor de 500 organizaciones de todo tipo y procedencias políticas. Sus consignas son: educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. En marzo de 2018, luego de una sostenida lucha del feminismo en el país, comenzó el debate en el Congreso para lograr una Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). El mismo involucró a diversxs referentes sociales, profesionales y expertxs con posiciones a favor y en contra. En agosto, el Senado de la Nación, después de una larga contienda, rechazó el proyecto de despenalización y legalización del aborto. Pero, a fines de 2020, luego de ingresar el proyecto de ley en el Congreso por iniciativa del Poder Ejecutivo, fue aprobado finalmente por ambas Cámaras.

En 2017 se presentaron avances en Chile y en Bolivia. En el primero, durante la presidencia de la socialista Michelle Bachelet, se despenalizó el aborto en tres causales: riesgo de vida de la madre, inviabilidad fetal y violación. En cuanto al segundo, el artículo 153 del nuevo Código Penal, elimina la pena en el caso de estudiantes, mujeres con hijos, discapacitados o mayores a su cargo, antes de la semana 8 de gestación. Igual, se considera la interrupción del embarazo como un delito con penas de hasta tres años de prisión.

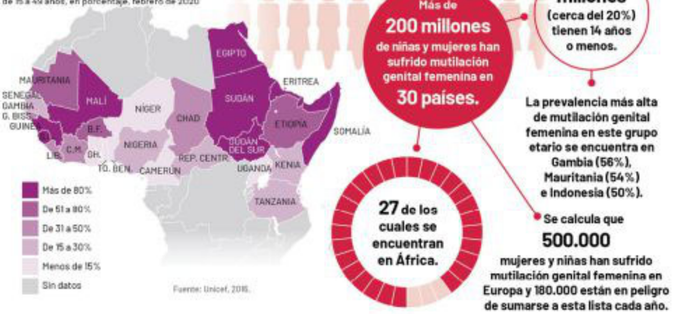
La Organización Mundial de la Salud (OMS) incluyó el misoprostol entre sus medicamentos esenciales, ya que está comprobado que reduce riesgos de muerte en abortos auto-inducidos. Se aplica en África y América Latina (Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Perú y Venezuela). Existen feministas que notifican y contienen a las personas comprometidas en abortar hasta la semana 12 del embarazo y con acompañamiento médico. Así se generan espacios de consejerías y se otorgan las pastillas. Este servicio de aborto médico en línea telefónica (gratuita, confidencial y atendida por mujeres) o por página web ofrece información precisa y segura. En la actualidad, la conquista del aborto voluntario convoca a los feminismos, movimientos de derechos humanos y de la disidencia sexo-genérica que siguen reclamando en torno a la soberanía de sus cuerpos.

El peso de la tradición

A partir de 2007, el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) dirigen el Programa Conjunto sobre mutilación/ablación genital femenina (MGF), a nivel mundial, con "el objetivo de proteger a mujeres y niñas de la mutilación genital femenina mediante un enfoque que tiene en cuenta las diferencias culturales y que está

Prácticas inhumanas

Prevalencia de la mutilación genital en niñas y mujeres de 15 a 49 años, en porcentaje, febrero de 2020



basado en los derechos humanos". El Programa Conjunto también promueve servicios de protección, asistencia sanitaria y legislación. El mismo se basa en una declaración que acordaron diez organismos de Naciones Unidas que luchan a favor de la salud y los derechos de las mujeres, exigiendo eliminar la mutilación en una generación.

La MGF se realiza en niñas desde la infancia a los 15 años con efectos perniciosos en la salud. Los motivos por los que se la practica difieren de una región a otra y también de una época a otra, aunque siempre revelan factores socioculturales vinculados a tradiciones familiares o comunitarias. A menudo responde a la concepción de lo que se considera una conducta sexual aceptable y tiene por objetivo asegurar la virginidad antes del matrimonio y la fidelidad después de él.

Según datos disponibles en 2016, a más de 200 millones de niñas y mujeres con vida se les practicaron mutilación genital en 30 países de África, Medio Oriente y Asia, donde se concentra la MGF. En 2013, el UNFPA publicó un documento que pronosticaba la tendencia futura. Desde 2005 hasta 2010, en África en general, la prevalencia de la MGF cayó un 5%. Si el descenso se mantiene constante, la práctica se reducirá a la mitad en 2074. En cambio, si la tasa sigue estable, debido al aumento de la población, las jóvenes de entre 15 y 19 años víctimas de la mutilación serán 20 millones en 2030 mientras que a finales de 2010 fueron 13,7 millones.

Con todo, hay países que registraron avances: en Benín, la tasa anual de reducción es del 23%; en Nigeria, del 7%; en Egipto, del 6%; en Níger, del 5%; en Kenia, del 4%; en Senegal, del 3%, y en Burkina Faso, del 1%. En el extremo opuesto encontramos países que han experimentado un aumento: Guinea Bissau (2,1%), Malí (0,9%) y Guinea (0,7%).

Brechas que separan

Cada día, más de 1 millón de personas contraen una infección de transmisión sexual (ITS). La OMS identifica alrededor de 30 virus, bacterias y parásitos que se transmiten por contacto sexual; 8 de los cuales son reconocidos como de mayor incidencia en las infecciones de transmisión sexual; 4 de las cuales, son curables: la sífilis, la gonorrea, la clamidiasis y la tricomoniasis. Anualmente, se estima que unos 357 millones de personas las contraen. Las otras restantes son infecciones virales incurables aunque pueden ser tratadas para atenuar o modificar los síntomas o la enfermedad: hepatitis B, virus del herpes simple (HSV o herpes), HIV y virus del papiloma humano (VPH). Este último provoca 528.000 casos de cáncer cervicouterino y 266.000 defunciones y más de 290 millones de mujeres están infectadas. La transmisión es casi siempre por contacto sexual –vaginal, anal y oral– aunque puede darse por transfusiones de sangre o productos sanguíneos. También durante el embarazo o el parto. Estas afecciones tienen un impacto negativo en la salud sexual y (no) reproductiva. De ahí, es imprescindible el uso de preservativos masculinos y femeninos.

No siempre las personas jóvenes sexualmente activos/as reciben una preparación adecuada para llevar una vida personal, social y sexual satisfactoria que contribuya al desarrollo de su identidad. Esta situación las hace potencialmente vulnerables ante la coerción, el abuso, el incesto, la explotación sexual, el embarazo no planificado y las ITS. Por otra parte, llegan a la adultez con mensajes contradictorios y confusos sobre los géneros y las sexualidades de acuerdo a las normas que varían drásticamente entre y dentro de las culturas. Las enormes brechas que separan al Norte del Sur en relación a la obtención de derechos humanos y condiciones de vida dignas para sus poblaciones se expresan en números dramáticos. Resulta un imperativo para que comprendamos que no son tan sólo estadísticas, sino que involucran a personas. □

En Yibuti, Egipto, Guinea y Somalia, la mutilación sigue siendo casi universal: más de 9 de cada 10 niñas y mujeres entre los 15 y 49 años la han padecido.

Mujeres e islam

DESCOLONIZAR EL FEMINISMO

En los países donde el Islam es la religión mayoritaria, las creyentes hace ya largos años que han emprendido una lucha por la igualdad de género, militando por una relectura crítica que desautoriza la secular interpretación machista del mensaje del Profeta Mahoma y el Corán. Un compromiso que se rebela contra los abusos del patriarcado al tiempo que reivindica el reconocimiento de la pluralidad de feminismos.

Zahra Ali

Socióloga y militante feminista, profesora de Sociología en la Universidad de Rutgers en Estados Unidos. Autora de *Women and Gender in Iraq: between Nation-Building and Fragmentation* **(Cambridge University Press, 2018) y compiladora de** *Feminismo e islam* **(Capital Intelectual, 2019).**

El feminismo musulmán cuestiona el feminismo hegemónico reivindicando el reconocimiento de la pluralidad de las modalidades de emancipación femenina. Este argumento se inscribe en la línea de los feminismos críticos e interseccionales que articulan antirracismo y antisexismo, como el Black Feminism (1), el feminismo poscolonial y decolonial. La crítica feminista poscolonial, guiada por el vínculo conceptual racismo-imperialismo-colonialismo, ha criticado severamente la pretensión del feminismo hegemónico de los países del Norte de determinar para las mujeres del Sur las modalidades de su emancipación. La figura más destacada de esta crítica feminista, Chandra Mohanty, ha cuestionado la supuesta universalidad de la categoría "mujer", caracterizada por una conciencia común, más allá de las condiciones sociales, económicas y políticas reales (2). A partir de esta crítica, pone en tela de juicio las modalidades de lucha sugeridas por los feminismos dominantes del Norte e insiste en el hecho de que las prioridades que este fija no son extrapolables a todas las luchas de las mujeres. Del mismo modo, para las feministas negras como Bell Hooks (3) o Audre Lorde (4) el *sisterhood* (la sororidad o solidaridad entre mujeres) se detiene allí donde el mismo movimiento feminista se vuelve racista y donde las diferentes condiciones de vida de las mujeres imponen reivindicaciones divergentes.

A su crítica política del feminismo dominante, muchas feministas musulmanas agregan un cuestionamiento de la presuposición según la cual toda iniciativa de liberación y emancipación de las mujeres supondría un distanciamiento de lo religioso. Estas mujeres reivindican un compromiso que toma su origen en la espiritualidad musulmana. Basándose sobre todo en el concepto fundamental del *Tawhid* (unicidad divina), las feministas musulmanas, como Amina Wadud, afirman la igualdad de todas y todos frente al Creador e insisten en la gravedad de la dominación como apropiación de una autoridad que solo pertenece a Dios. De este modo, si en varios contextos la lucha por la emancipación de las mujeres se ha caracterizado por la secularización, las feministas musulmanas proponen vincular piedad, espiritualidad y emancipación.

Las diferencias que separan a las feministas musulmanas de las demás feministas no constituyen en sí un obstáculo en la lucha en común por las cuestiones fundamentales.

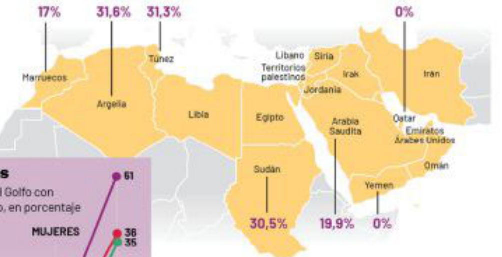
Nueva militancia

La inclusión de las demás formas de dominación que pueden manifestarse entre las mujeres y que tienen por efecto relativizar la universalidad del grupo "mujer" no debilita en absoluto al feminismo, a menos que se lo entienda como homogéneo. La unidad del feminismo, y su no homogeneización, es perfectamente posible, y el reconocimiento de las "líneas de demarcación" y división puede conducir a fortalecerlo (5). La construcción de coaliciones entre feminismos solo es posible y factible si se reconocen las diferencias y divergencias que distinguen a las feministas entre sí, incluida la conflictividad inherente a toda coalición. Las diferencias que separan a las feministas musulmanas de las demás feministas no constituyen en sí un obstáculo en la lucha en común por las cuestiones fundamentales en las que se basa el compromiso por los derechos de la mujer, pero su no reconocimiento podría impedir toda colaboración. Las coaliciones son posibles en la medida en que las agendas y las prioridades de lucha de unxs no se impongan a las de otrxs y se reconozca realmente la pluralidad de las modalidades de lucha por los derechos de la mujer (6).

Empoderamiento político

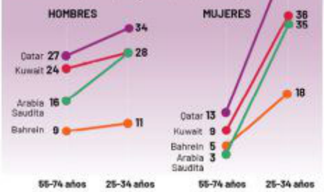
Participación de las mujeres en la política en Medio Oriente y en el Norte de África, en porcentaje

Fuente: Michelsen Institute, 2018.



Construyendo bases

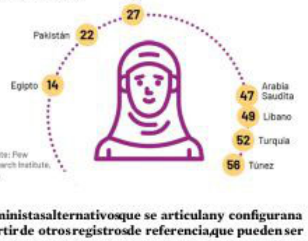
Musulmanes en los Estados del Golfo con educación superior, por género, en porcentaje



Fuente: Pew Research Institute, 2016.

Cómo quieren en los países musulmanes que las mujeres se vistan en público

Cantidad de personas que prefieren que se vistan como ellas desean, en %, 2016



Fuente: Pew Research Institute, 2016.

En Francia, las musulmanas feministas no reconocen jerarquías entre, por un lado, la lucha contra la dominación masculina y el fomento de lecturas del islam de acuerdo a sus convicciones feministas y, por otro, la lucha contra el racismo y la islamofobia que las estigmatiza tanto a ellas como a sus hermanos, al asociarlos con ese Otro, arcaico y oscurantista. Esta articulación entre antisexismo y antirracismo no es una elección sino una postura frente a una doble opresión. Desde esta perspectiva, las musulmanas se reapropian del feminismo, lo redefinen, lo nutren y contribuyen así a su renovación. Esta nueva militancia, nueva por la diversidad de sus componentes (sociales, religiosos, generacionales en términos de recorridos militantes, etc.), permite, en realidad, eliminar las divisiones dentro del feminismo y colocarlo en el centro del debate sobre la desigualdad social, racial y de género.

Las principales cuestiones feministas –como la violación, la violencia doméstica, el acoso sexual, la desigualdad salarial, el reparto desigual de las tareas domésticas, el sexismo del mundo publicitario y de las representaciones normativas e infantilizantes de la mujer, la mercantilización de su cuerpo y la imagen degradante vehiculada por el mundo de la moda (que influye en nuestra manera de vestirnos y de cubrirnos, y cuestiona nuestro modo de consumo)– reúnen a las mujeres entre sí y ocupan un lugar central en su vida cotidiana. La omnipresencia de estos asuntos muestra la urgencia de renovar el feminismo para construir un "feminismo sin fronteras"(7) que incorpore las cuestiones sociales y raciales a su crítica de la dominación masculina. Al reconocer las diferentes formas de ser feminista y la legitimidad de los discursos feministas alternativos que se articulan y configuran a partir de otros registros de referencia, que pueden ser religiosos y procedentes de otras herencias y tradiciones políticas, el feminismo sin duda se verá fortalecido. ▢

Al reconocer las diferentes formas de ser feminista y la legitimidad de los discursos feministas alternativos, el feminismo sin duda se verá fortalecido.

1. El Black Feminismo feminismo negro surgió en Estados Unidos entre los años 1960 y 1970. Manifiesta el punto de vista específico de las mujeres negras dentro del movimiento feminista en Estados Unidos y busca articular las luchas contra el sexismo y el racismo.

2. Chandra Talpade Mohanty, *Feminism Without Borders: Decolonizing Theory, Practicing Solidarity*, **Duke University Press, 2003, y el artículo pionero "Under Wester Eyes: Feminist Scholarship and Colonial Discourses",** *Feminist Review*, **Nº 30, otoño de 1988.**

3. Bell Hooks, *Feminism is for everybody: passionate politics*, **South End Press, 2000; "Sisterhood Political Solidarity between Women",** *Feminist Review*, **Nº 23, pp. 212-235, 1986.**

4. Audre Lorde, *Sister Outsider. Essays and Speeches*, **Ten Speed Press, 1984.**

5. Chandra Talpade Mohanty, *op. cit.*

6. Al respecto, es interesante observar la experiencia del colectivo francés Collectif des Féministes pour l'Égalité.

7. Chandra Talpade Mohanty, *op. cit.*

Este artículo fue extraído de *Feminismo e islam. Las luchas de las mujeres musulmanas contra el patriarcado*, **Zahra Ali (compiladora), Capital Intelectual, Buenos Aires, 2019.**

LGTB, la ley del orgullo

El 28 de junio de 1969, en el corazón del barrio de Greenwich Village policías neoyorquinos realizaron una redada en un bar gay, el Stonewall Inn. Creían que, como de costumbre, los clientes se dispersarían. Pero esa noche nadie se movió. Y estalló una revuelta, marcando el comienzo del levantamiento contra las violencias homofóbicas. Cincuenta años más tarde ¿en qué punto estamos? Es cierto que cada vez más Estados despenalizan las relaciones homosexuales, autorizan el matrimonio entre personas del mismo sexo y, en algunos casos, establecen en su Constitución la protección contra las discriminaciones vinculadas a la orientación sexual, pero para 70 países ser homosexual sigue estando sancionado por ley, muchas veces de forma muy severa. Así, desde el 3 de abril de 2019, un Código Penal inspirado en la *sharia* se encuentra en vigor en el sultanato de Brunei, donde "toda persona considerada culpable de haber tenido relaciones homosexuales o adúlteras será pasible de pena de muerte por lapidación".

Situación a julio de 2019

Protección contra las discriminaciones ligadas a la orientación sexual
- Protección inscripta en la Constitución
- Protección ampliada
- Protección laboral
- Protección limitada / variable

Alguna protección legal o ninguna

Sanción de actos sexuales homosexuales consentidos entre adultos
- Criminalización de facto
- Hasta 8 años de prisión
- De 10 años de prisión a cadena perpetua
- Pena de muerte en vigor / posible

★ Matrimonio o toda otra unión legal para las parejas del mismo sexo

● Leyes que restringen el ejercicio de los derechos LGBT

142 países
ofrecen una protección contra las discriminaciones ligadas a la orientación sexual...

mientras otros
70 países
sancionan los actos sexuales homosexuales.

Fuente: Asociación internacional de lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex (ILGA), www.ilga.org.es
© Courrier international

Polonia

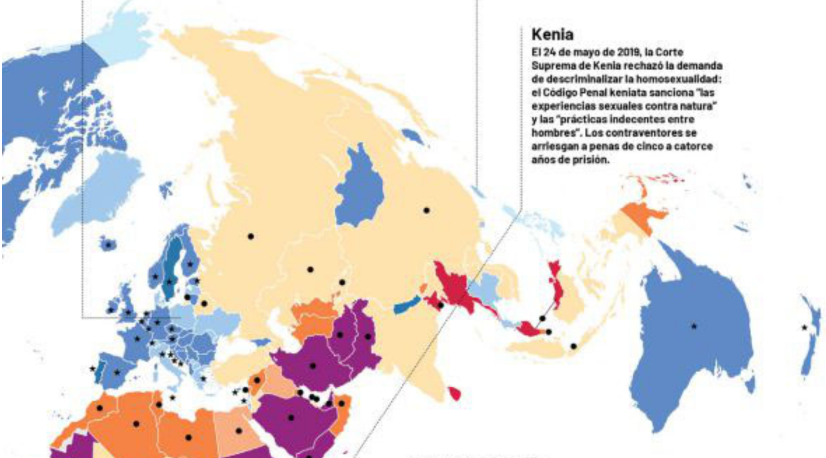
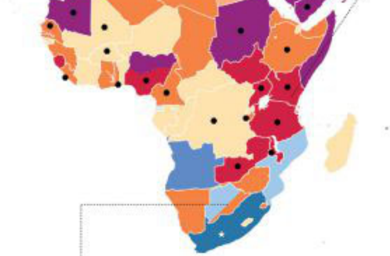
El 26 de junio de 2019, la Corte Constitucional, controlada por el Partido Ley y Justicia (PIS), ultraconservadores de derecha, declaró: "No podemos sancionar a los comerciantes que invocan la cláusula de la conciencia para rechazar la venta de productos o de servicios a los homosexuales. Esta cláusula no existe en la ley más que para los médicos pero hay otras profesiones que la empiezan a reclamar", relata el semanario de izquierda *Polityka*.

Taiwán

El 17 de mayo de 2019, Taiwán se convirtió en el primer país asiático en legislar a favor del matrimonio igualitario. Las primeras uniones fueron celebradas una semana más tarde. Pero la igualdad con las parejas heterosexuales casadas no es total: la adopción no siempre es posible.

Kenia

El 24 de mayo de 2019, la Corte Suprema de Kenia rechazó la demanda de descriminalizar la homosexualidad: el Código Penal keniata sanciona "las experiencias sexuales contra natura" y las "prácticas indecentes entre hombres". Los contraventores se arriesgan a penas de cinco a catorce años de prisión.

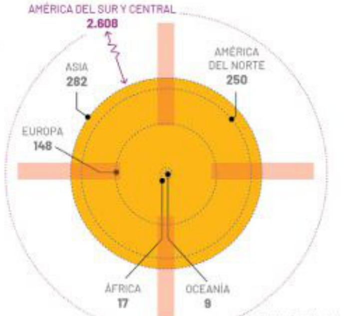



Botswana

El 11 de junio de 2019, la Corte Suprema de Justicia juzgó inconstitucionales las disposiciones del Código Penal, que datan de 1965, que penalizan la homosexualidad. Una pena máxima de siete años de prisión para los individuos del mismo sexo que tienen relaciones homosexuales libremente consentidas.

Crímenes de odio

Total de asesinatos de personas trans y género-diversas, por región, entre el 1 de enero de 2008 y el 30 de septiembre de 2019.



Fuente: Trans Murder Monitoring (TMM), 2019.

6. MEDIOAMBIENTE

La deuda ecológica

Las grandes potencias, que deben su acumulación originaria a la apropiación de las riquezas de los países del Sur, continúan saqueándolos en pleno siglo XXI, con impactos medioambientales enormes para el planeta. Pero la expoliación de los recursos naturales y la utilización gratuita de sus recursos genéticos, son apenas la punta del iceberg. El costo de la crisis climática lo pagan fundamentalmente las sociedades periféricas, que viven en los lugares más castigados por la contaminación, de gran vulnerabilidad a los desastres naturales y donde la basura forma el paisaje de la desigualdad más colosal.

Desarrollo insustentable

EL APARTHEID CLIMÁTICO

La crisis climática, iniciada por las economías desarrolladas, destruye los ecosistemas naturales y las áreas productivas, y amenaza seriamente a las poblaciones de aquellas sociedades que están en peores condiciones para afrontarla. Esta profunda injusticia provoca un apartheid climático que recrudece las desigualdades ya existentes en el mundo.

Antonio Elio Brailovsky

Licenciado en Economía Política, historiador, novelista, investigador, dramaturgo. Ha sido Convencional Constituyente y Defensor del Pueblo Adjunto de la Ciudad de Buenos Aires. Fue nombrado Personalidad Destacada de la Ciudad de Buenos Aires.

Las desigualdades ambientales son una característica de todas las sociedades complejas, a partir de los procesos de sedentarización. En las culturas nómadas (como en muchos de nuestros pueblos originarios antes de la Conquista), todos los integrantes de una comunidad comparten el mismo ambiente. Pero los procesos de división social del trabajo asociados a la agricultura y el sedentarismo primero, y a la vida urbana después, generaron profundas diferencias en las condiciones ambientales de los miembros de una misma sociedad. En la Antigua Roma, los mejores terrenos fueron para los templos y palacios. Los pobres vivieron en las tierras bajas arrasadas por las crecidas del Tíber o hacinados en casas de departamentos sin agua ni letrinas. Y los barrios populares de la Europa medieval fueron los más afectados por la pandemia de peste bubónica de 1348.

Los sucesivos modos de globalización trasladaron ese esquema de desigualdad a la relación entre distintas sociedades. Las grandes potencias deben su acumulación originaria a la apropiación de la riqueza de los países del Sur, incluyendo en muchos casos la esclavización de sus poblaciones. El imperialismo de fines del siglo XIX significó el reparto del mundo entre las grandes potencias y la apropiación de los recursos naturales de las colonias. En esa época se consideraban como recursos naturales solamente a aquellos bienes físicos de la naturaleza que fueran apropiables. El saqueo de esos recursos generó enormes impactos ambientales, muchas de cuyas consecuencias persistieron después, en forma de pasivos ambientales tales como la desertificación de las zonas de cultivos tropicales o los depósitos de residuos industriales y mineros.

La actual percepción de los recursos naturales no incluye sólo bienes físicos sino también funciones del medio natural, que también han sido alteradas por los sectores económicamente más poderosos en perjuicio de las sociedades de la periferia. El clima es un recurso natural de las sociedades humanas (un "bien común", dice el papa Francisco) y ha sido depredado por las grandes potencias con la misma violencia con que fueron depredados los recursos físicos en los siglos XIX y XX.

En la actualidad existen entre 50 y 60 millones de refugiados climáticos, cifra que supera al número de los desplazados por razones políticas, étnicas y religiosas.

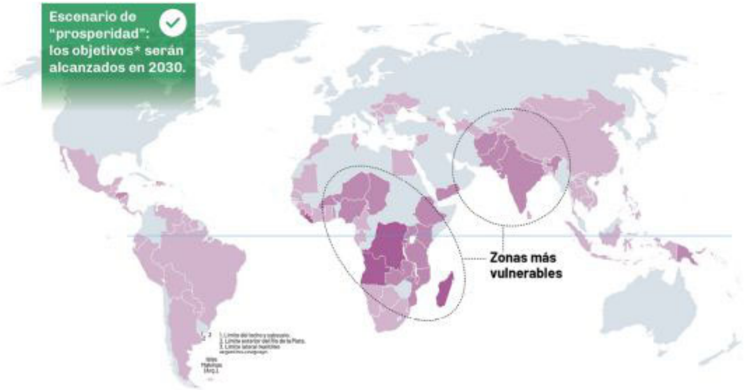
Lo indebidamente apropiado o destruido debería generar una deuda, en este caso, del Norte hacia el Sur. Se puede definir la "deuda ecológica" como "aquella que ha venido siendo acumulada por el Norte, especialmente por los países más industrializados, hacia las naciones del Tercer Mundo, a través de la expoliación de los recursos naturales por su venta subvaluada, la contaminación ambiental, la utilización gratuita de sus recursos genéticos o la libre ocupación de su espacio ambiental para el depósito de los gases de efecto invernadero u otros residuos acumulados y eliminados por los países industrializados" (1). A esta deuda generada por la sobreproducción, el sobreconsumo y

140 millones

es el número de personas que el cambio climático, según Naciones Unidas, puede dejar sin refugio en los países en desarrollo de acá a 2050.

Más calor, más sequía, más pobres

Frente al cambio climático, varios escenarios son considerados por el Banco Mundial. En todos los casos, el número de personas afectadas por la extrema pobreza aumentará en 10 años.



Incremento del número de personas alcanzadas por la extrema pobreza debido al cambio climático, en porcentaje

Entre 6 y 10 · Entre 2 y 6 · Entre 0,01 y 2 · Menos de 0,01 · Sin datos

*Los objetivos del Banco Mundial consisten principalmente en reducir al 3% la proporción de las personas que viven con menos de 1,9 dólares por día para el año 2030. Y en favorecer el crecimiento de los ingresos del 40% más pobre.
Fuente: "Shock waves, managing the impacts of climate change on poverty", Banco Mundial. © Courrier international

la superproducción de desechos actuales y pasados de los países del Norte, debería sumársele la "deuda colonial" por la extracción y usufructo de recursos minerales no reembolsados, como los cientos de toneladas de oro y miles de toneladas de plata que España extrajo de América sin pagar contrapartida alguna.

Los países pobres (o las zonas pobres de todos los países) han sido los más afectados, debiendo hacer frente a un número cada vez mayor de inundaciones, sequías, hambrunas y enfermedades.

"Otro costo no reconocido por los países desarrollados es el de los servicios ambientales. Un ejemplo es el proceso de cambio climático, debido a las emisiones de gases de efecto invernadero hacia la atmósfera, del cual son esencialmente responsables los países desarrollados. Los daños a la producción y economías de todo el mundo, la inestabilidad e incertidumbre sobre sus futuras e impredecibles consecuencias (desertización, inundaciones, daños a la biodiversidad), no son tenidos en cuenta", afirma Walter Pengue (2). Esas deudas deberían aplicarse a paliar estas inequidades ambientales.

La crisis climática iniciada por las economías desarrolladas destruye los ecosistemas naturales y las áreas productivas, y amenaza las poblaciones de aquellas sociedades que están en peores condiciones para hacer frente a esas amenazas. Existe una profunda injusticia en los impactos del cambio climático. Los países ricos han sido quienes causaron el problema tras dos siglos de emisiones de gases de efecto invernadero, que contribuyeron a su enriquecimiento. Los países pobres (o las zonas pobres de todos los países) por su parte, han sido los más afectados, debiendo hacer frente a un número cada vez mayor de inundaciones, sequías, hambrunas y enfermedades, con situaciones de extrema gravedad en las comunidades más vulnerables (3).

Cómo gestionar la asimetría

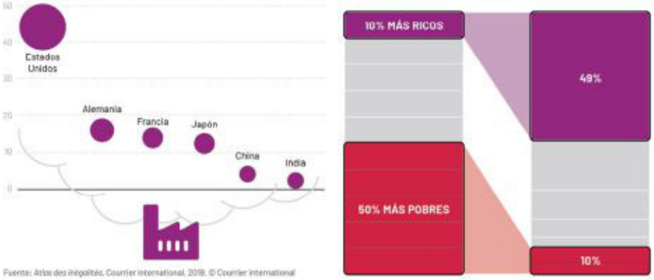
La gestión de la crisis climática tiene habitualmente dos perspectivas diferentes y complementarias. Una es la *mitigación* que implica actuar sobre las causas de origen antrópico (humano) que inciden en los fenómenos, y tratar de reducirlas. Básicamente, apunta a bajar las emisiones de gases de efecto invernadero. Y la otra es la *adaptación* que apunta a actuar sobre las consecuencias, procurando disminuir el daño que los cambios del clima causan en las sociedades (4). Las diferencias entre una y otra aproximación son políticas. *Mitigar* el cambio climático requiere de fondos para cambiar formas de producción y consumo de energía por otras que emitan menor cantidad de gases de efecto invernadero. Los actores sociales del antes y el después suelen ser los mismos (las grandes empresas) y esas inversiones suelen ser subsidiadas, es decir, pagadas por el conjunto de la sociedad. Por el contrario, para *adaptarse* al cambio climático son necesarias medidas mucho más complejas, en las que intervienen diversos actores sociales. Casi siempre requieren de estrategias de ordenamiento territorial, que pueden ser fuertemente resistidas por los intereses creados. Por ejemplo, *adaptarse* puede requerir reforestar már-

¿Quién emite el dióxido de carbono?

Emisiones anuales de CO_2 por habitante del 10% más rico, en toneladas, 2015

Población mundial en función de los ingresos
En deciles

Participación de los deciles en las emisiones de CO_2
En porcentaje



Fuente: Atlas des inégalités, Courrier International, 2018. © Courrier International

Grandes y pequeños contaminantes

Emisiones de CO_2, en megatoneladas, 2018

Fuente: Global Carbon Atlas, 2018.

genes de ríos y arroyos o reconvertir cultivos. Puede requerir limitar o prohibir la urbanización en zonas de riesgos actuales o futuros. En Argentina, muchas ciudades crecen sobre las tierras más bajas y sufrirán inundaciones cada vez más frecuentes. En Brasil, Venezuela o Colombia, las urbanizaciones precarias trepan los cerros hacia zonas geológicamente inestables, allí donde las tormentas cada vez más fuertes pueden causar deslaves de consecuencias trágicas.

Será necesario restringir actividades productivas que consuman o contaminen grandes volúmenes de agua en zonas áridas o semiáridas, como la gran minería en las zonas andinas de Chile y Argentina amenazadas por la sequía. No queda claro *a priori* la decisión política de hacerlo. Pero en todos los casos, intentar *adaptarse* es políticamente más difícil que intentar *mitigar*.

La asimetría de la situación requiere de esfuerzos asimétricos. En los países que más contaminan la atmósfera son necesarias tareas de *mitigación*. Es decir, de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de las que son responsables y que perjudican al conjunto de la humanidad. Por el contrario, en los países y regiones que lo sufren, en las zonas más afectadas por la desigualdad ambiental, es necesario poner el acento en la *adaptación*. Es decir, en reducir los daños provocados por un fenómeno que ya existe y que ellos no causaron. Se trata de minimizarlo antes posible los daños que sufren las víctimas de este proceso. Sin embargo, hay una fuerte postergación de las medidas de *adaptación* y una prioridad de las medidas de *mitigación*, que refuerzan las condiciones de injusticia social.

Los países más ricos han puesto el acento en promover políticas de *mitigación* en sus propios países y en todo el mundo. La mayor parte de las políticas climáticas del mundo están centradas en la *mitigación*. Un estudio sobre Europa revela: "La atención científica y política sobre la *adaptación* se ha desarrollado tardíamente. Ello se ha debido en gran parte a que, siguiendo la tendencia mundial, los esfuerzos realizados para luchar contra el cambio climático en las últimas décadas se han centrado en la *mitigación* de gases de efecto invernadero"(5).

La *adaptación* requiere miles de millones de dólares anuales. Sin embargo, hasta ahora el aporte financiero para hacerlo ha sido muy escaso en todo el mundo. En un informe conjunto (6) sobre financiamiento para el clima, elaborado por los Bancos Multilaterales de Desarrollo (7), se señala que 27.900 millones de dólares, o el 79% del monto total de 2017, se destinó a proyectos de *mitigación* del clima orientados a reducir las emisiones nocivas y disminuir el ritmo de calentamiento de la Tierra. Sólo el 21% restante, es decir 7.400 millones de dólares, del financiamiento destinado a naciones emergentes y en desarrollo se invirtió en proyectos de *adaptación* al clima que ayudan a las economías a abordar los efectos del cambio climático. En otras palabras, cuatro quintas partes del dinero se destinan a financiar las prioridades de los ricos y sólo el quinto restante a las prioridades de los pobres.

En innumerables situaciones, lo único que los afectados pueden hacer es huir de los sitios que han dejado de ser habitables. Sin embargo, a pesar de la retórica de los organismos internacionales, su práctica no disminuye la desigualdad. El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas dictaminó en 2020 que "los refugiados por causas climáticas no pueden ser devueltos (a sus lugares de origen)" (8). Sin embargo, la resolución no es vinculante y no hay indicios de que llegue a serlo. Hasta ahora existen entre 50 y 60 millones de refugiados climáticos. Esta cifra supera al número de los desplazados por razones políticas, étnicas y religiosas. En un contexto mundial de desigualdades crecientes, se espera superen los 100 millones de personas en las próximas décadas, sin apoyo financiero para revertir la situación en sus lugares de origen y sin políticas de acogida fuera de ellos. Es difícil de imaginar la magnitud e intensidad de los conflictos sociales que están generándose sin que se haga nada por evitarlos.

1. Aurora Donoso, "Deuda externa, mecanismo de dominación y saqueo", *Acción Ecológica*, Quito, 2000.
2. Walter Pengue, "Deuda externa, deuda ecológica y sobreexplotación humana y natural: donde pierde la vida y gana el dinero", *Lavaca*, 6-7-18.
3. "Adaptarse al cambio climático: quién necesita dos países pobres y quién debería pagarlo", https://oxfamilibrary.openrepository.com/bitstream/handle/10546/114075/bp104-adapting-to-climate-change-290507-es.pdf?sequence=4&isAllowed=y
4. Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), "Climate Change 2001: Impacts, Adaptation and Vulnerability. Third Assessment Report", *Cambridge University Press*, Cambridge, 2001, p. 981.
5. Beatriz Pérez de las Heras, "La adaptación al cambio climático en la Unión Europea: límites y potencialidades de una política multinivel", *Revista Electrónica de Estudios Internacionales*, 2015.
6. https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2018/06/13/mdb-climate-finance-hit-record-high-of-us352-billion-in-2017
7. Los bancos multilaterales de desarrollo son instituciones que proporcionan apoyo financiero y asesoramiento profesional para actividades orientadas al progreso económico y social en los países en desarrollo. La expresión "Bancos Multilaterales de Desarrollo (BMD)" generalmente designa al Grupo del Banco Mundial y a cuatro bancos regionales de desarrollo: Banco Africano de Desarrollo, Banco Asiático de Desarrollo, Banco Europeo de Reconstrucción y Fomento, y Banco Interamericano de Desarrollo.
8. www.elagoradiario.com/clima-y-energia/onu-abre-puerta-refugiados-climaticos

800 millones

de personas viven actualmente en villas costeras en riesgo de inundarse si el nivel del mar se eleva 0,5 metros de acá a 2050, según el informe "L'avenir dont nous ne voulons pas", febrero de 2018.

Contaminación atmosférica

POR FAVOR, TOSA

La calidad del aire mejora en las ciudades ricas al tiempo que se degrada velozmente en los países más pobres, lo que provoca, según la Organización Mundial de la Salud, la muerte de siete millones de personas por año en el mundo y causa graves afecciones de salud.

De la Redacción de *Courrier international*, París.
Traducción: Gustavo Recalde

En el mundo, 9 de cada 10 personas respiran un aire con altos niveles de contaminación, según un informe dado a conocer en 2018 por la Organización Mundial de la Salud (OMS). La institución estima además que 7 millones de personas mueren cada año a causa de la exposición a las partículas finas, que provienen de diferentes fuentes como los automóviles, las fábricas, las centrales de carbón, los incendios forestales o incluso, en algunas regiones, la incineración de residuos y el polvo de los desiertos.

"Estas partículas penetran profundamente en los pulmones y en el sistema cardiovascular, lo que provoca afecciones como accidentes cerebrovasculares, cardiopatías, cáncer de pulmón, bronconeumopatías crónicas obstructivas e infecciones respiratorias, especialmente neumonía", explica la OMS en un comunicado.

En el mundo, 9 de cada 10 personas respiran un aire con altos niveles de contaminación.

"Pero –señala *The Guardian*, que publicó los resultados– los niveles de contaminación [del aire por esas partículas] varían considerablemente en función de las acciones gubernamentales y los recursos financieros". En resumen, las desigualdades en materia de contaminación del aire entre países ricos y países en desarrollo se incrementan.

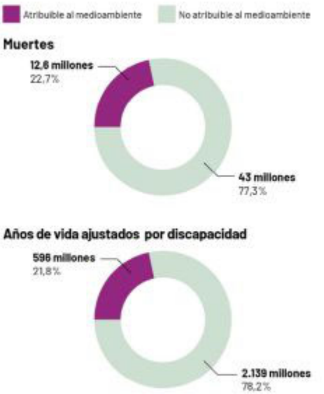
La ciudad más contaminada del mundo

Mientras que el 61% de las ciudades europeas y el 57% de las ciudades americanas observaron por primera vez una disminución de su nivel de partículas finas entre 2010 y 2016, la situación se agravó en el Sudeste Asiático y en Medio Oriente. "En materia de contaminación del aire interior, que contribuyó a la muerte de 3,8 millones de personas, la diferencia es también importante, ya que las familias de los países pobres dependen más de la combustión de la madera, el carbón y el querosén para cocinar y calentarse", precisa el diario británico.

La reducción de los riesgos ligados a la contaminación del aire "depende de la sensibilización de la gente, la voluntad política, así como de los ingresos", enumera *The Guardian*, que señala que los autores del informe elogian a China por reforzar los controles de la contaminación tras los escándalos conocidos como "Airpocalypse" [Apocalipsis del aire], las protestas públicas y los problemas de salud.

Malos aires

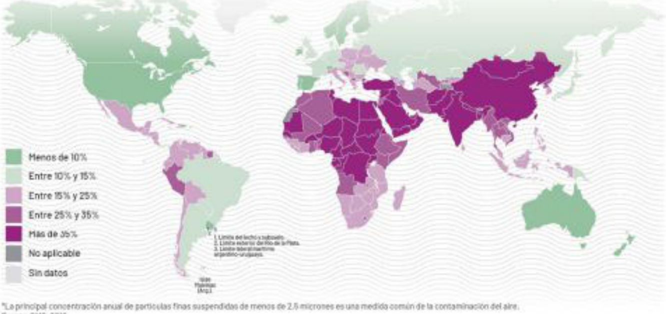
Muertes y años de vida ajustados por discapacidad atribuibles al medioambiente, en porcentaje, 2012



Fuente: Organización Mundial de la Salud, 2016.

Los ricos respiran mejor

Principales concentraciones anuales de partículas finas (PM2,5*) en áreas urbanas (ug/m³), en porcentaje. 2016.



*La principal concentración anual de partículas finas suspendidas de menos de 2,5 micrones es una medida común de la contaminación del aire.
Fuente: OMS, 2016.

La OMS insiste sin embargo en el hecho de que estos datos están incompletos. "Más de 4.300 ciudades en 108 países proveen actualmente información sobre la calidad del aire ambiente, un incremento de más del 30% con respecto a 2016 –informa el diario británico–. Se completa a través de satélites, pero hay relativamente pocos datos en África".

Además, continúa *The Guardian*, "las normas varían de un país a otro, las variaciones anuales pueden ser influenciadas por el clima, y no se sabe aún diferenciar entre las arenas provenientes de las regiones desérticas y las partículas tóxicas en las grandes ciudades".

Más del 90% de las muertes debidas a la contaminación del aire se producen en países de ingresos bajos o medianos.

Así, Yakarta, la capital de Indonesia, fue en seis oportunidades la ciudad más contaminada del mundo durante el mes de junio de 2019, tras haber sido clasificada como tal en 2018, subraya *The Jakarta Post*. Los motivos: el intenso tránsito vehicular en esta gigantesca metrópolis –que incluye las ciudades vecinas de Bogor, Depok, Tangerang y Bekasi– con más de 30 millones de habitantes, pero también, según Greenpeace, las emanaciones industriales, los basurales e incineraciones a cielo abierto y las centrales de carbón. "Diariamente, la contaminación del aire en Yakarta es 4,5 veces mayor que el límite recomendado por la OMS", señala Leonard Simanjuntak, director de Greenpeace en Indonesia.

La situación es tal que militantes ecologistas decidieron presentar una denuncia contra el presidente y varios miembros del gobierno indonesio, con el fin de que éstos aborden este problema de salud pública.

Microclimas de clase

"Más del 90% de las muertes debidas a la contaminación del aire se producen en países de ingresos bajos o medianos, principalmente en Asia y África, seguidos por los países de ingresos bajos o medianos de las regiones del Mediterráneo Oriental, Europa y América", según la OMS.

Pero, incluso en el seno de países occidentales ricos, no todos respiran lo mismo. Según un estudio publicado en junio de 2019 por la Union of Concerned Scientists (UCS), una ONG ecologista, las minorías asiáticas, latinas y afroamericanas viven en un aire más contaminado que los blancos. En varios Estados del noreste de Estados Unidos, la contaminación debida a micropartículas producidas por el tránsito en las carreteras es 66% más intensa en el aire que respiran. En el detalle, esta contaminación adicional es del 61% para los afroamericanos, el 73% para los asiáticos y el 75% para los latinos.

Así, el oeste del Bronx, en Nueva York, que sólo posee un 0,2% de blancos, es el lugar más contaminado de la región. Para determinarlo, la ONG se basó en datos de la Oficina de Censos y la Agencia Federal de Protección Ambiental (EPA). Se centró en las partículas cuyo diámetro es inferior a 2,5 micrones, que entran en la circulación sanguínea a través de los pulmones y son factores de cáncer, asma y muertes prematuras. La publicación de este estudio tenía lugar en momentos en que la administración estadounidense de Donald Trump daba marcha atrás respecto de las normas anticontaminación de los vehículos particulares.

Producción y reciclaje

OCÉANOS DE PLÁSTICO

En el modelo de consumo que impera en el mundo, un material se presenta como una de las principales amenazas para la vida sustentable: el plástico. La mayor parte de su producción no se recicla y se convierte en desecho mientras las multinacionales, en su afán de ganancias, se desentienden de las consecuencias nefastas que dejan sobre el medioambiente.

Víctor Ingrassia
Periodista y abogado. Magíster en Periodismo en la Universidad Torcuato Di Tella. También es miembro y socio fundador de la Red Argentina de Periodismo Científico.

"Cuando hayamos cortado el último árbol, contaminado el último río y pescado el último pez, entonces nos daremos cuenta de que ¡no podemos comer dinero!". Estas palabras tan pronunciadas por los ecologistas forman parte de la carta que le envió en 1855 el jefe indio Seattle de la tribu Suwamish al presidente de Estados Unidos Franklin Pierce en respuesta a la oferta de compra de las tierras indígenas en el noroeste del país, lo que ahora es el estado de Washington. Y más de 150 años después, siguen aún vigentes.

Más plástico que peces

A partir de la Revolución Industrial a mediados del siglo XVIII, el desarrollo de la industria y la tecnología promovida a través del aumento del consumo de bienes y servicios fue la principal fuente del crecimiento de las economías del mundo. Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), los países más ricos han consumido el siglo pasado más materia prima y recursos energéticos no renovables que toda la humanidad a lo largo de su historia y prehistoria. El 15% de la población mundial que vive en las naciones con altos ingresos es responsable del 56% del consumo total en el mundo, mientras que el 40% más pobre en los países de bajos ingresos es responsable solamente del 11% del consumo.

36%
del plástico se usa una sola vez y se tira.

En este modelo de consumo irresponsable que impera en el mundo, hay un material que se presenta como una de las principales amenazas para la vida: el plástico. De acuerdo a las estadísticas de ONU Medio Ambiente, el mundo produce aproximadamente 300 millones de toneladas (40 kilos por persona) de residuos plásticos cada año y actualmente solo el 14% se recolecta para el reciclaje. Los científicos estiman que 8 millones de toneladas de desechos plásticos llegan a los océanos cada año, por lo que, si no se deja de arrojar residuos, en 2050 el océano tendrá más plástico que peces.

40%
del plástico termina en el medioambiente.

Según un informe publicado en junio de 2019 de *National Geographic*, la humanidad debe lidiar con 8.300 millones de toneladas de este plástico fabricado desde los años 50. De ellas, más de 6.300 millones se han convertido en residuos. Y de esos residuos, 5.700 millones de toneladas no han pasado nunca por un contenedor de reciclaje.

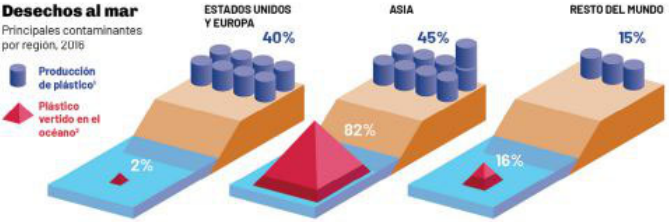
La producción mundial plástica ha registrado un aumento exponencial: de 2,1 millones de toneladas en 1950, aumentó a 147 millones en 1993 y a 407 millones en 2015. Para dimensionar este crecimiento basta sólo un ejemplo: las botellas de plástico. Cada minuto se compran un millón de botellas de plástico, según cifras de la ONU. La producción de plásticos se ha expandido un 4% cada año desde 2000, y la mayoría de las empresas esperan que ese crecimiento continúe gracias a las economías emergentes, según indica un amplio informe de 2020 elaborado por la asociación Carbon Tracker.

Coca-Cola, Nestlé y PepsiCo son las 3 empresas globales más contaminantes del mundo, según el informe titulado *BRANDED Volume II: Identifying the World Corporate Plastic Container* (1). El estudio está basado en las

> Según la ONU, los países más ricos han consumido el siglo pasado más materia prima y recursos energéticos no renovables que toda la humanidad a lo largo de su historia.

Desechos al mar

Principales contaminantes por región, 2016



Notas: 1. Excluye los termoplásticos y los poliuretanos. 2. Proporción del total global vertido sobre los océanos medido en millones de toneladas de plástico marino por año.
Fuente: "The new plastics economy: rethinking the future of plastics", World Economic Forum, Ellen Macarthur Foundation y MacKinsey & Company, 2016.

campañas de limpieza de 484 playas en más de 50 países y 6 continentes, organizadas por el movimiento Break Free From Plastic cada septiembre, en las que identificaron las principales empresas contaminantes de acuerdo a la basura hallada. Las 7 que completan el ranking de los 10 principales contaminadores son Mondelēz International, Unilever, Mars, P&G, Colgate-Palmolive, Phillip Morris y Perfetti Van Melle.

Según los datos de Carbon Tracker, los tres países más afectados por la contaminación plástica son China con 8,8 toneladas métricas, Indonesia con 3,2 y Filipinas con 1,9. China, el país más poblado del mundo, es el que más residuos plásticos produce y la mayor parte terminan en sus propias costas, lagos y ríos. En Indonesia, 4 de sus ríos se encuentran entre los 20 más contaminados del mundo. Y Filipinas ocupa el tercer lugar por contaminación plástica.

Cómo producir sin destruir

La ONU ha advertido del grave problema del "Apocalipsis climático", que podrían sufrir varias islas del Pacífico, condenadas a desaparecer alrededor de 2050 debido a la subida del nivel del mar por efecto del calentamiento global, según señala el reporte final de la Cumbre Mundial del Clima de la ONU en París, en 2015. Así, las paradisíacas Islas Maldivas, se han planteado comprar un terreno continental a un país cercano (India, Sri Lanka y Australia) por si sus 387.000 habitantes tienen que emigrar. Las Islas Vanuatu e Islas Salomón se enfrentan al mismo problema, dado que cada año el mar sube en esa zona unos 11 centímetros. En 2011 se propuso en Naciones Unidas la creación de un estatuto de "refugiado climático", aprobado finalmente en 2017, dada la cada vez más acuciante realidad de las poblaciones desplazadas.

"El mundo sigue sin encontrar el equilibrio entre la producción de recursos y la conservación del medioambiente. Arrojamos ocho millones de objetos diarios al océano, que, en conjunto, alcanzan un peso total de siete millones de toneladas de basura anuales", explicó Daniel Rolleri, director de la Asociación Ambiente Europeo (AAE).

8 millones de toneladas
de desechos plásticos aproximadamente llegan a los océanos cada año.

Michelle Bachelet, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y ex presidenta de Chile, advirtió que "la pandemia por COVID-19 debería estimularnos a adoptar medidas transformadoras basadas en los derechos humanos que promuevan la salud pública, la confianza en las autoridades y una mayor resiliencia social y económica. Esta crisis demostró que el mundo es desigual, incluso en países desarrollados. No podemos volver a como estábamos antes".

5% del plástico se recicla realmente.

Al respecto, Jason Beech, profesor de la Universidad de San Andrés e investigador superior del Conicet, explicó: "La crisis climática ya es evidente y requiere cambios urgentes en nuestros modos de organización social. El posicionamiento ético desde el cual tomemos nuestras decisiones económicas y políticas en los próximos años va a ser trascendental para el futuro de nuestra especie, sus comunidades y sus ecosistemas".

1. www.breakfreefromplastic.org/wp-content/uploads/2020/07/branded-2019.pdf.

Crecimiento exponencial

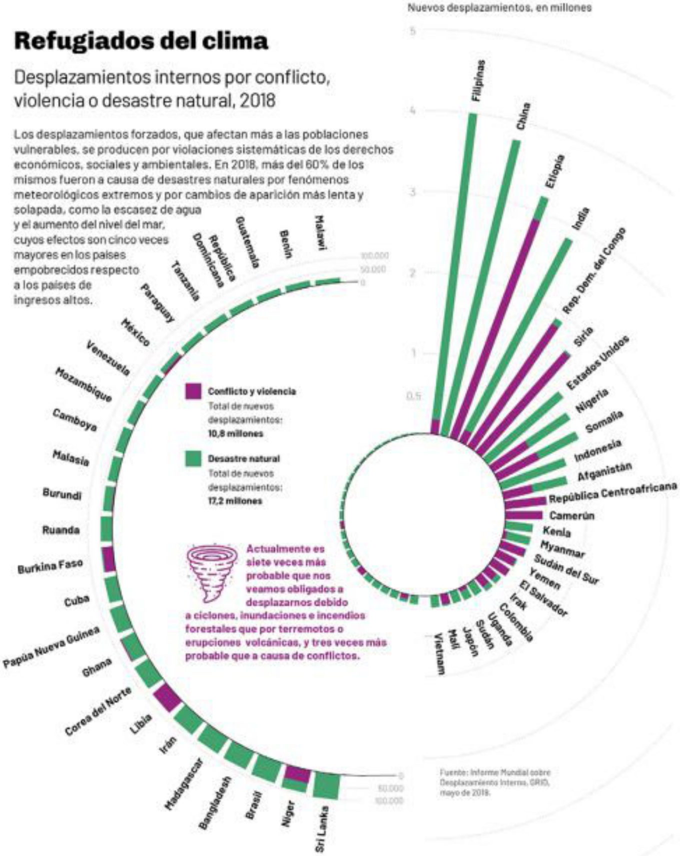
Producción de plástico en millones de toneladas, 1950-2014

Nota: Producción sólo de materia prima a base de petróleo virgen.
Fuente: "The new plastics economy: rethinking the future of plastics", World Economic Forum, Ellen Macarthur Foundation y MacKinsey & Company, 2016.

Refugiados del clima

Desplazamientos internos por conflicto, violencia o desastre natural, 2018

Los desplazamientos forzados, que afectan más a las poblaciones vulnerables, se producen por violaciones sistemáticas de los derechos económicos, sociales y ambientales. En 2018, más del 60% de los mismos fueron a causa de desastres naturales por fenómenos meteorológicos extremos y por cambios de aparición más lenta y solapada, como la escasez de agua y el aumento del nivel del mar, cuyos efectos son cinco veces mayores en los países empobrecidos respecto a los países de ingresos altos.



Fuente: Informe Mundial sobre Desplazamiento Interno, GRID, mayo de 2019.

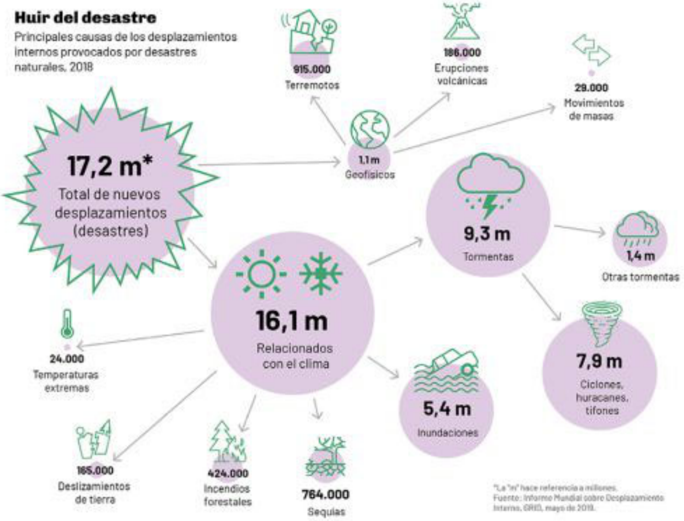
Una ola imparable

Número de desastres naturales relacionados con el clima por año

Fuente: OXFAM, 2019.

Huir del desastre

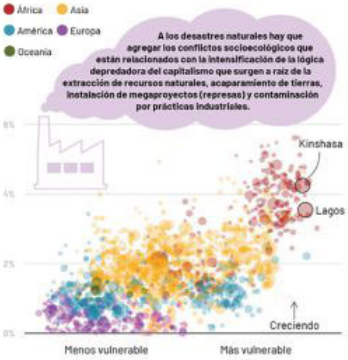
Principales causas de los desplazamientos internos provocados por desastres naturales, 2018



*La "m" hace referencia a millones.
Fuente: Informe Mundial sobre Desplazamiento Interno, GRID, mayo de 2019.

Las ciudades de mayor crecimiento se enfrentarán a mayores riesgos

Crecimiento poblacional en relación a la vulnerabilidad del cambio climático, en porcentaje, 2018-2035



El tamaño del círculo representa la población actual. Fuente: Verisk Maplecroft.

Los más castigados

Países con mayor riesgo de desplazamiento interno debido a condiciones meteorológicas extremas y participación en las emisiones de dióxido de carbono en el ranking mundial

País	Principal causa de desplazamiento	Desplazados por fenómenos meteorológicos extremos, promedio anual, 2008-2018	Posición en el ranking mundial de emisores per cápita de carbono
Cuba	Ciclones tropicales (huracanes del Atlántico)	4,8%	127
Dominica	Ciclones tropicales (huracanes del Atlántico)	4,6%	86
Tuvalu	Ciclones tropicales	4,5%	158
Filipinas	Ciclones tropicales (tifones del Pacífico noroccidental), inundaciones	3,5%	170
Saint Martin	Ciclones tropicales (huracanes del Atlántico)	2,8%	Sin datos
Vanuatu	Ciclones tropicales	2,4%	131
Fiyi	Ciclones tropicales, inundaciones	1,6%	190
Sri Lanka	Inundaciones, tormentas	1,4%	147
Tonga	Ciclones tropicales	1,3%	121
Somalia	Inundaciones	1,1%	132
Media global		0,3%	

Fuente: OXFAM, 2019.

Gestión de la basura

LOS DESCARTADOS DEL SISTEMA

La extrema desigualdad es el rasgo más destacable, por lo obsceno, de la primera quinta parte del siglo XXI. En el medioambiente, esta faceta se acentúa aun más, pues la concentración de la riqueza externaliza los costos económicos del (ab)uso privado de los bienes comunes. Un sector creciente de la población mundial, cada día más empobrecido, sobrevive en y de la basura.

Sergio Federovisky
Biólogo, periodista ambiental, actual viceministro de Ambiente de la Argentina.

En los albores de la conformación de un cuerpo de ideas para la elaboración de criterios de política ambiental como preámbulo de la Cumbre de Río de 1992, se discutía fuertemente, incluso en ámbitos progresistas, si la degradación ambiental era complementaria a la pobreza o si la pobreza era en sí misma una causa del deterioro ambiental. Visto desde hoy resulta complicado de sostener, pero incluso adalides de la izquierda ecológica, como el economista catalán Joan Martínez Allier presentaban la tesis de una discutible dialéctica: "Es fácil entender que la degradación ambiental agrava la pobreza. [...] quiero exponer la idea contraria, es decir, que la pobreza a veces es la causa de la degradación ambiental", escribió (1).

En el capitalismo, como la propiedad privada es lo más sagrado, el bien común –desde el clima mundial hasta un humedal– queda supeditado al interés particular del mercado.

Esa idea resultó superada por un análisis menos maniqueo y verdaderamente dialéctico del capitalismo que triunfaba a la par que esculpía la mayor debacle ambiental de la historia del planeta. El lienzo sobre el que se imprime esta realidad es el de la desigualdad. Una sociedad desigual es la base sobre la que se edifica la pobreza que, a su vez, se constituye de un modo inseparable de los problemas ambientales que acarrea.

La desigualdad –o quizás habría que decir "inequidad"– es el rasgo más destacable, por lo obsceno, de la primera quinta parte del siglo XXI. Un rasgo que cuando se lo traduce a lo ambiental realza su obscenidad pues deviene de facilitar la concentración de la riqueza como resultado de externalizar los costos económicos del uso privado de los bienes comunes (aire, agua, suelo, recursos naturales).

Escribe el papa Francisco: "La subordinación de la propiedad privada al destino universal de los bienes es una 'regla de oro' de todo ordenamiento ético-social" (2). El capitalismo, claro está, sigue la corriente inversa: como la propiedad privada es lo más sagrado, el bien común –desde el clima mundial hasta un humedal– queda supeditado al interés particular del mercado.

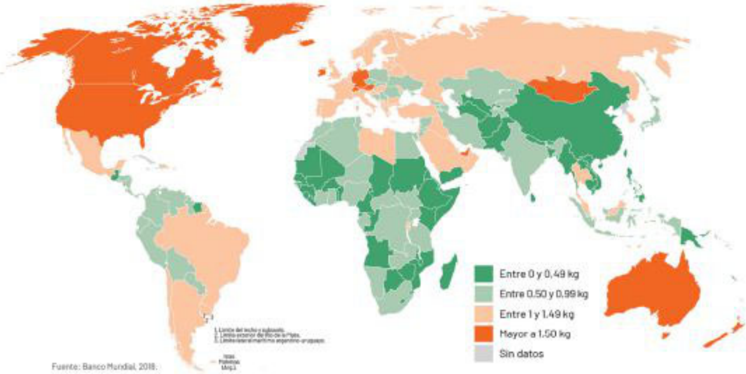
Ahora bien, ¿en qué circunstancias se verifica esta desigualdad tan obvia pero al mismo tiempo tan escondida? ¿Cómo se identifica y se describe la desigualdad ambiental al interior de una sociedad que padece la degradación sistemática del ambiente en prácticamente todos sus indicadores?

"Externalización de costos"

Quizás la expresión más acabada de la desigualdad ambiental en Argentina tenga su sede geográfica en la Cuenca Matanza-Riachuelo (3). La propia Corte Suprema de Justicia en su sentencia en la llamada Causa Mendoza en la que condenó a los tres gobiernos –a la Nación, a la provincia de Buenos Aires y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires– por la contaminación sistémica de la cuenca basó sus fundamentos en la marginación social de la que se desprende la injusticia ambiental que supone vivir sumergido en la contaminación. El fallo desnuda una especie de "selección social del riesgo"

Más riqueza, más residuos

Cantidad de desechos generados por país , en kilogramos, per cápita, por día, 2018



Fuente: Banco Mundial, 2018.

derivada de un ordenamiento territorial cuyos mecanismos agravan la desigualdad ambiental (4).

Allí, en el aprovechamiento –o, mejor dicho, apropiación– del espacio urbano, está el nudo de la configuración extrema de la desigualdad ambiental. Si tomamos el ejemplo de la Villa Inflamable, quizás el más sádico hasta por el nombre que recibe ese asentamiento a metros del Polo Petroquímico de Dock Sud, lo que se ve antes que desigualdad es una suerte de discriminación ambiental: en 2003 un estudio realizado por la agencia de cooperación japonesa JICA develó que más de un tercio de los chicos de entre 7 y 11 años presentaban altos niveles de plomo en sangre. Esperable en semejante espacio (5). Externalización de costos, lo llamarían los economistas.

La política del marketing

Un penoso récord que recorre Argentina es la existencia de unos 5.000 basurales a cielo abierto (6). El informe brindado por el organismo ambiental del Estado Nacional señala que mientras el 37% de la población no está cubierto por un sistema de disposición final de los residuos domiciliarios, existe esa enormidad de sitios de disposición irregular. Lo dramático es que "irregular" no supone ilegal o clandestino: el 75% de los basurales a cielo abierto –literalmente pozos en los que se vuelca basura para quemar sin ningún tipo de tratamiento previo– es el modo formal en que la mayor parte de los 2.500 municipios de Argentina elimina los residuos de sus habitantes.

Es dolorosamente irónico constatar que en esta etapa de la historia en la que la política ambiental se hace más desde el marketing que desde la gestión, cualquiera que llegue a uno de esos miles de municipios cuyo centro de disposición final de los residuos es un basural a cielo abierto, encontrará dos cosas: un despliegue de consignas instando a la separación y el reciclaje de la basura, y un ejército de pobres que viven de y en la basura.

Un penoso récord que recorre Argentina es la existencia de unos 5.000 basurales a cielo abierto.

La basura se constituye entonces en el paisaje y el territorio de la desigualdad más colosal. Los intendentes esconden en el mismo espacio a sus residuos (muchas veces no tienen ni la capacidad técnica, ni los recursos económicos ni la voluntad política para afrontar ese servicio) y a sus pobres, a los que dan la "cobertura" de una cooperativa de recuperación de materiales para que parezca que cumplen una función ecológica cuando en verdad son sometidos socialmente a la única opción de hallar algún tipo de sustento en aquello que otro descartó.

Realidades forzadas

El avance del proceso de calentamiento global –advierten desde hace décadas los expertos– conduce a la llamada agudización de los extremos: más inunda-

La sociedad desechable

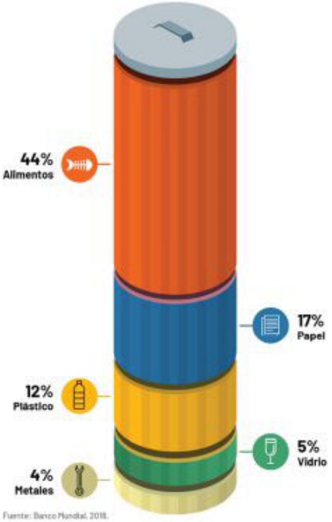
Producción de desechos por región, en toneladas, por año

En los países de ingreso bajo más del 90% de los desechos no se gestiona bien. Así aumentan las emisiones contaminantes y el riesgo de desastres, con el mayor impacto a los pobres.

Fuente: Banco Mundial, 2018.

¿Qué descartamos?

Tipo de desechos generados en el mundo, en porcentaje



Fuente: Banco Mundial, 2018.

ciones donde antes ya se inundaba y sequías más agudas en las zonas áridas, por solo citar dos ejemplos notorios. Serán más violentos entonces los llamados desastres naturales.

Para entenderlo en la lógica de la desigualdad ambiental debemos recordar que un desastre natural no es sinónimo de un evento de la naturaleza, sino que es el proceso económico, social, ambiental y político que se detona a partir de un episodio climático o meteorológico (7). Aquello que determina el impacto de un evento natural (la lluvia, la falta de lluvia, un ciclón o una ola de calor) es la vulnerabilidad de la sociedad sobre la que se expresa. Así como un terremoto de la misma magnitud dispara resultados muy disímiles si ocurre en Haití o en Japón, el huracán Katrina –la manifestación más colosal del cambio climático en el mundo desarrollado– dejó una estela de muerte y destrucción de modo abrumadoramente mayoritario en los ámbitos socialmente más postergados de Nueva Orleans.

Una herramienta denominada Sistema de Mapas de Riesgo del Cambio Climático es elocuente cuando se solapa el mapa de incidencia de los desastres naturales al influjo del calentamiento global en el escenario de los próximos cincuenta años con el que revela los índices de vulnerabilidad social de Argentina. Un ejemplo: para el área subandina de las provincias de Salta y Jujuy se pronostica un incremento de hasta 85 días más al año sometidos a ola de calor con respecto al presente. Se trata de poblaciones que en una escala del uno al seis expresan un nivel de vulnerabilidad superior a cuatro. Incapaces social-

Villa Inflamable

un barrio olvidado del municipio bonaerense de Avellaneda donde más de 1.800 familias conviven entre residuos tóxicos del polo petroquímico de Dock Sud.

mente de absorberlo sin un tremendo impacto en el empeoramiento de su calidad de vida. Otro ejemplo: para zonas precordilleranas de la provincia de Chubut en las que el promedio anual de precipitaciones hasta la actualidad era de 250 mm se prevé una disminución a la mitad, con las consecuencias productivas y laborales previsibles en un área de alta vulnerabilidad social.

El aumento del calentamiento global conduce a la "agudización de los extremos": más inundaciones donde antes ya se inundaba, sequías más agudas en las zonas áridas...

En la cuenca del río Paraná se observa la agudización del ciclo histórico de inundaciones versus sequías superlativas como la que provocó en 2020 la bajante más pronunciada de que se tenga recuerdo. La desigualdad ambiental en su estado puro: los más pobres empujados a asentarse en los valles de inundación (la superficie que los ríos "guardan" para momentos de creciente) como resultado de una colonización de la tierra dispuesta por la especulación inmobiliaria y los mismos pobres castigados por la ausencia de todo recurso cuando el agua escasea.

Vivir en la contaminación. Vivir en la basura. Vivir en el riesgo permanente. Claramente no son elecciones, sino realidades forzadas por la desigualdad de un país –y un mundo– en donde pocos tienen ambiente, algunos "medio" ambiente y la mayoría ni siquiera eso. ▢

1. Joan Martínez Allier, "La pobreza como causa de la degradación ambiental. Un comentario al Informe Brundtland", en *Documents de Analisis Geografica*, Barcelona, 1991.

2. Papa Francisco, *Laudato Si. Sobre el cuidado de la Casa Común*.

3. Débora Swistun, "El derecho a la vivienda digna en un ambiente sano. Desigualdad ambiental, pobreza y salud en la Cuenca Matanza Riachuelo", en Laura Tavares Ribeiro Soares (ed.), *Salud, desigualdad y pobreza en América Latina*, Clacso, Buenos Aires, 2013, pp. 287-318.

4. María Gabriela Merlinsky, "La causa 'Beatriz Mendoza'. El conflicto por la apropiación de los recursos naturales en la Región Metropolitana de Buenos Aires: ¿Justicia para el Riachuelo?", Presentación en el XXVII Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología.

5. https://acij.org.ar/villa-inflamable-cloacas-de-petroleo-agua-de-plomo

6. Informe del Estado del Ambiente 2017, Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable.

7. Andrew Maskrey, "Los desastres no son naturales", *La Red*, 1993.

Fuente: I-ciudad, 2018.

El Atlas de las desigualdades: claves para entender un mundo injusto / Creusa Muñoz ... [et al.] ; compilado por Creusa Muñoz ; editado por Creusa Muñoz. - 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Capital Intelectual, 2021.
Libro digital, EPUB.- (Le monde diplomatique)

Archivo Digital: descarga
ISBN 978-987-614-634-0

1. Atlas. 2. Desigualdad. I. Muñoz, Creusa, comp.
CDD 330.01

Digitalización: Proyecto451

MAPA BICONTINENTAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Mapa Político

FE DE ERRATAS
El presente mapa salva errores u omisiones contenidos en esta obra y corresponde a la representación oficial del territorio de la República Argentina establecida por el Poder Ejecutivo Nacional a través del Instituto Geográfico Nacional por Ley Nº 22.963.
La obra ha sido aprobada con fe de erratas por Expte. Nº EX-2021-20182187- -APN-DNSG#IGN, de fecha 7 de abril de 2021.

El capitalismo alcanzó su versión más descarnada y brutal. Y es que el vaso nunca derrama: el 1% más rico de la población mundial se apropió del 27% del crecimiento económico de los últimos 40 años, mientras que el 50% más pobre capturó sólo el 13%, es decir, 3.500 millones de personas se quedaron con menos de la mitad de lo que percibió la reducida elite más acaudalada del planeta. Este abismo socioeconómico se explica por las transformaciones estructurales que ha sufrido el capitalismo en la era de la financiarización. ¿Por qué persiste la desigualdad? ¿Por qué seguimos validando un sistema que beneficia a unos pocos? ¿Es posible enfrentarla?

El Atlas de las desigualdades se propone, a través del análisis de reconocidos especialistas y un amplio despliegue de mapas, gráficos e infografías, reflejar las múltiples y crecientes desigualdades que agobian al mundo y desentrañar sus causas profundas, el modo en que se retroalimentan entre ellas y las intolerables injusticias que producen.

Creusa Muñoz (compiladora)
Thomas Piketty · Branko Milanović
François Dubet · Bernardo Kliksberg · Nora Lustig · Patricia Aguirre · Gabriel Kessler
Gabriela Benza · Mélany Barragán · Mariela Belski · Sergio Federovisky · Mabel Bellucci...

Índice de Contenidos

Portada
Comienzo de lectura
Presentación. Creusa Muñoz
Un mundo desigual
Introducción. Bernardo Kliksberg
La condena originaria
Capítulo 1. Riquezas. La falacia de la meritocracia
Capítulo 2. Recursos. Vidas precarias
Capítulo 3. Salud. Brechas endémicas
Capítulo 4. Libertades. Derechos exclusivos
Capítulo 5. Género. Una revolución incompleta
Capítulo 6. Medioambiente. La deuda ecológica

Puntos de referencia

Portada
Comienzo de lectura
Presentación. Creusa Muñoz
Un mundo desigual
Introducción. Bernardo Kliksberg
La condena originaria
Índice de contenidos